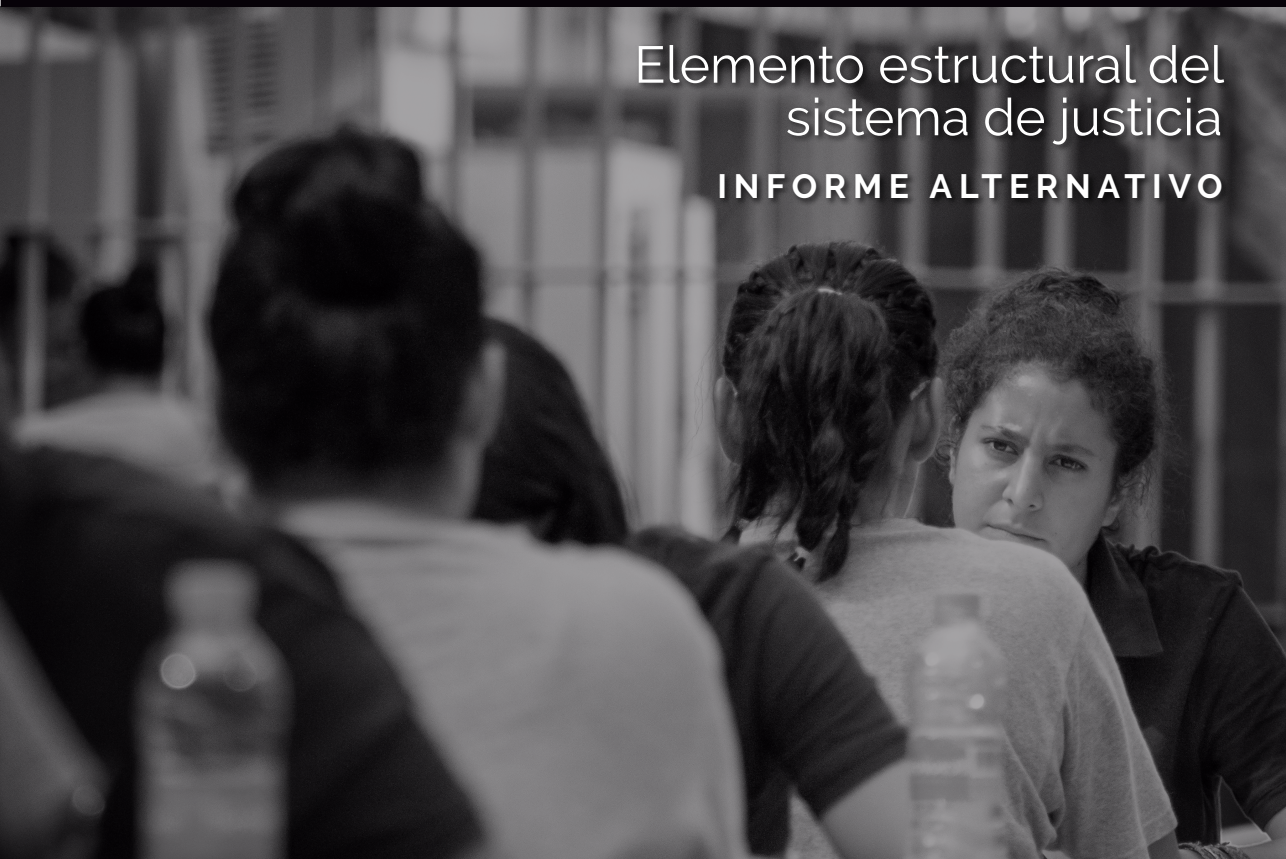


TORTURA EN MÉXICO:

Elemento estructural del
sistema de justicia

INFORME ALTERNATIVO



TORTURE IN MEXICO:

A structural element of the justice system

SHADOW REPORT

Presented by: ASISTENCIA LEGAL POR LOS DERECHOS
HUMANOS A.C (ASILEGAL)



TORTURE AU MEXIQUE :

Un élément structurel du système de justice

RAPPORT ALTERNATIF

Présenté par : ASISTENCIA LEGAL POR LOS DERECHOS
HUMANOS A.C (ASILEGAL)



INFORME ALTERNATIVO
TORTURA EN
MÉXICO:

Elemento estructural
del sistema de justicia

INFORME ALTERNATIVO

TORTURA EN MÉXICO:

Elemento estructural del sistema de justicia.

Coordinador

Mtro. José Luis Gutiérrez Román
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.
(AsiLegal)

Investigación

Verónica Garzón Bonetti
Adriana Aguilar Arias

Diseño Editorial

Dulce María Laguna Hernández

Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido escrito de esta publicación siempre y cuando se cite la fuente y sin fines de lucro.

El texto se puede consultar y descargar en:

www.asilegal.org.mx

D.R. 2019 Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal)
Pitágoras 920, Colonia del Valle,
Delegación Benito Juárez, CP. 03100, Ciudad de México.

Impreso y hecho en México.

Agradecimientos:

El informe alternativo al Comité Contra la Tortura de la ONU es el resultado de un esfuerzo conjunto del equipo de trabajo de ASILEGAL. Queremos agradecer a las siguientes organizaciones y personas por sus valiosas aportaciones, comentarios, información: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), así como todas las personas privadas de libertad que compartieron sus experiencias.

Este informe fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este informe es responsabilidad de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. ASPECTOS A ANALIZAR SOBRE LA TORTURA EN MÉXICO

I. Procedimiento Abreviado

II. Personas privadas de libertad

- a. Análisis de Riesgo
- b. Derecho a la Salud
- c. El encierro como forma de combatir el autogobierno y la inseguridad en los centros penitenciarios
- d. Las Mujeres en prisión preventiva de la guerra contra el narco

III. Orientación sexual, identidad y expresión de género no hegemónica

- a. Personas privadas de libertad
- b. Homicidios por prejuicio
- c. Migración
- d. Trabajo Sexual
- e. Terapias y tratamientos reparativos

3. RECOMENDACIONES



1.

INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) es una organización de la sociedad civil cuyo principal objetivo es la promoción y defensa de los derechos humanos de personas que se encuentran en un estado particular de vulnerabilidad. En específico, Asilegal trabaja con personas privadas de libertad bajo las siguientes líneas de acción: perspectiva de género, interculturalidad y diversidad sexual.

El presente informe alternativo se envía para consideración del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas en virtud del séptimo examen periódico a México en el marco del 66° periodo de sesiones que se celebrará los días 23 de abril y 17 de mayo de 2019. Como resultado del trabajo de campo realizado por Asilegal en diversas partes de la República Mexicana se ha logrado obtener información sobre la situación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en los diferentes contextos sociales e institucionales que dan cuenta de la sistemática violación a los derechos humanos de las personas y que se encuentran caracterizados siempre por los prejuicios, estereotipos, discriminación y, por supuesto, por la impunidad.

El documento que se presenta cuenta con testimonios recibidos directamente de las personas a las cuales se les otorga asesoría y defensa jurídica durante las diversas entrevistas realizadas dentro de Centros Penitenciarios, con el objetivo de visibilizar la situación en que se encuentran, así como lograr que el Estado mexicano tome medidas específicas para garantizar la adecuada y oportuna prevención, investigación y sanción de la tortura.

2.

ASPECTOS A ANALIZAR SOBRE LA TORTURA EN MÉXICO

2. ASPECTOS A ANALIZAR SOBRE LA TORTURA EN MÉXICO

I. Procedimiento Abreviado

En la era del encarcelamiento masivo, el hacinamiento y las malas condiciones de internamiento, el procedimiento abreviado presenta un obstáculo más en el acceso a la justicia para las personas en conflicto con la ley penal. Esta figura fue introducida con la implementación del Sistema Penal Acusatorio (2008), regulado en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales y tiene la particularidad de que se condena al imputado o imputada a una pena menor si, y sólo si, admite la plena responsabilidad por los hechos que se le imputan.

Como su nombre lo indica, el procedimiento abreviado es una modalidad de terminación anticipada del proceso penal cuyo objetivo es la despresurización del sistema de justicia a través de procesos más cortos. En consecuencia, el sistema de administración de justicia ha privilegiado las terminaciones anticipadas de manera que un gran número de personas no llegan a la etapa del juicio oral, donde en teoría tendrían la oportunidad de defenderse y contradecir la acusación del Ministerio Público.

Un ejemplo claro, y alarmante, de la implementación del procedimiento abreviado es que sólo en Baja California, desde el inicio de la implementación del Sistema Penal Acusatorio hasta diciembre de 2018 se han dictado 8,254 sentencias, de las cuales 8,005 fueron resueltas por procedimientos abreviado¹; esto significa que un 96.9% de los casos se han resuelto sin llegar a juicio oral. Las cifras anteriores reflejan una clara preferencia por la terminación anticipada y por evadir que los asuntos se resuelvan a través del juicio oral bajo el argumento de la economía procesal y el respeto al derecho a un juicio pronto y expedito. Sin embargo, el procedimiento abreviado ha sido utilizado, desde su implementación, como un espacio más donde la tortura y los malos tratos encuentran su impune materialización.

¹ Datos de la Dirección Estadística de la Presidencia del TSJCDMX disponibles en: Anuario Estadístico e indicadores de Derechos Humanos 2016, TSJCDMX, México, 2016, p. 217 y 224.

Gráfico

1

Baja California.

Número de sentencias dictadas desde la implementación del Sistema Penal Acusatorio hasta el 2018

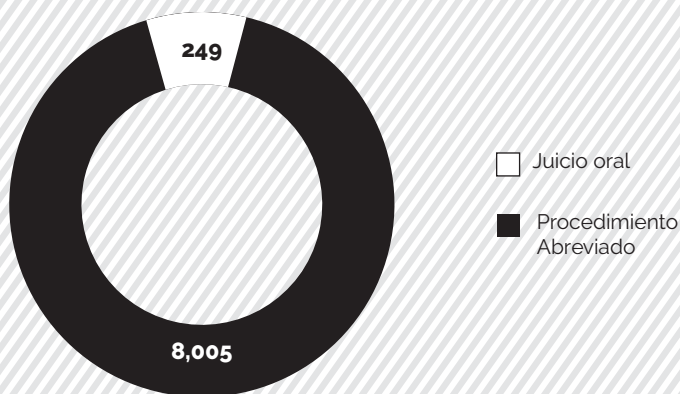


Gráfico realizado por Asilegal con datos obtenidos de Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California, recibida vía solicitud de información pública 00086719. Oficio No. 0308/UT/MXL/2019. 13 de febrero de 2019

El procedimiento abreviado configura una serie de tratos crueles inhumanos o degradantes cuyas consecuencias afectan en mayor medida a aquellas personas que se encuentran en un estado particular de vulnerabilidad -por género, orientación sexual e identidad de género, por condiciones de pobreza², por ser indígena, por no contar con una defensa adecuada³ o por desconocimiento general del funcionamiento del sistema- de manera que este tipo de terminación anticipada se utiliza para aligerar la carga del sistema de justicia, reduciendo el tiempo de las penas privativas de libertad pero a costa del debido proceso y los derechos humanos de las personas imputadas.

Como resultado de entrevistas realizadas en diversos Centros de Reinserción Social, las personas cuyo proceso fue llevado a cabo de manera abreviada⁴ desconocieron en todo momento las consecuencias y, sin recibir mayor explicación por parte de sus defensores, fueron presionadas para aceptar su tramitación bajo la afirmación de que era lo más conveniente. Incluso, se tiene información de casos en los que se prometió una disminución de la pena a cambio de la aceptación de responsabilidad por el delito, pero en la sentencia no se hizo reducción alguna.

² El 63% de las y los imputados en el marco del Nuevo Sistema Penal tienen un ingreso mensual familiar menor a \$4,500 según datos de la Dirección Estadística de la Presidencia del TSJCDMX, con información de la Encuesta de Opinión de Usuarios/as del Sistema Procesal Penal Acusatorio 2016.

³ Según datos de la ENPOL 2016, el 59.2% de las personas sentenciadas contaron únicamente con defensor de oficio. De los defensores, únicamente el 29.1 % presentó pruebas para probar la inocencia, de ahí que el nivel de satisfacción por el desempeño del defensor haya sido sólo del 30%.

⁴ 6 personas en Mexicali, 5 en Oaxaca y Chiapas, y 6 en Hidalgo.

“
Me dijeron que si firmaba y aceptaba que era culpable, que me iban a dar cuatro años y ocho meses, en lugar de siete. Firmé y todo, pero al final sí me dieron los siete años.

-TESTIMONIO DE UNA MUJER PRIVADA DE LIBERTAD EN BAJA CALIFORNIA

”

Es así como se coacciona a la persona en contra de la cual se tiene una acusación por probable responsabilidad a que confiese⁵ y se le amenaza con una sanción mayor si no lo hace. La diferencia en la pena es lo que hace de este método un método coactivo, pues se acepta una sanción que en otras circunstancias no sería aceptada y, además, se está aplicando una condena que únicamente debiera de ser adjudicada tras un juicio en el que existiera la oportunidad de defenderse frente a la fiscalía, en igualdad de circunstancias. De esta forma, la decisión que toma la imputada o el imputado al aceptar el procedimiento abreviado lo excluye de la aplicación de los principios esenciales de presunción de inocencia y de contradicción, mismos que debieran permear todo proceso. La condena, entonces, deriva de datos de prueba únicamente, es decir, aquellos elementos probatorios que aún no han sido desahogados y, por consiguiente, conforme al nuevo Sistema de Justicia Penal, no constituyen prueba en sí, además de que no pueden ser refutados ni cuestionados con posterioridad.

Esta forma de actuar de las autoridades constituye una variante de tortura psicológica donde se pretende presionar a una persona a tomar una decisión que la despoja de un juicio justo. Se somete a la persona a contextos de angustia y sufrimiento⁶ a través de actos de la autoridad que se realizan con la intención de suprimir su resistencia psíquica y forzarla a declararse culpable⁷. Como un método clásico de tortura, se amenaza y obliga a la persona en un contexto de administración de justicia que ejerce y aplica condenas sin adjudicación directa.

De igual forma, uno de los factores que impulsan a las personas a aceptar el procedimiento abreviado tiene que ver con las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano: La dilación en los procesos penales. Este problema ocasiona que haya un incumplimiento generalizado de los plazos establecidos por la norma jurídica de manera que las personas están a la espera de una sentencia -normalmente en prisión preventiva- por muchos años, por lo que las y los imputados aceptan su responsabilidad por los hechos con el único objetivo de acelerar el proceso.

⁵ Según datos de la ENPOL 2016, de la población privada de libertad, el 41.9% se encuentra en reclusión por haber aceptado o declarado haber cometido el ilícito.

⁶ Cfr. Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Serie C, No. 103, Párr. 94

⁷ Cfr. Idem, párr. 93

Estoy arrepentida de no haber aceptado el procedimiento abreviado cuando mi defensor público lo propuso porque pelear por mi inocencia va a ser más tardado. Varias compañeras ya salieron y yo sigo esperando audiencia. Ojalá me hubiera declarado culpable y ya estaría afuera con mi hijo.

-MUJER PRIVADA DE LIBERTAD EN TIJUANA

En este tipo de modalidad la fiscalía se libra de la carga que le corresponde por naturaleza de probar la culpabilidad de la persona, situación que comprende una violación a las obligaciones de los Estados de actuar con la debida diligencia en las investigaciones penales, pues se ahorra el esfuerzo de probar, fuera de toda duda razonable (como estándar de prueba), que la persona a quien se acusa es efectivamente responsable.

La razón principal de existencia de un juicio ante tribunales previamente establecidos, imparciales e independientes (como se retoma de la Constitución) es para salvaguardar los derechos de las personas en conflicto con la ley penal, y asegurarles un proceso con base en reglas aplicables para todos por igual. La introducción del procedimiento abreviado, en sí, no es del todo perjudicial, el problema con él es que, en un país donde las prácticas abusivas son cotidianas, no se puede garantizar un espacio seguro donde el imputado pueda evaluar las ventajas y desventajas en un plano libre de coacción, además de que en muchas ocasiones los agentes del Ministerio Público y los defensores públicos hacen acuerdos entre ellos sin tomar en cuenta a la persona. La mala implementación del procedimiento abreviado es lo que ocasiona un perjuicio irreparable para los imputados, pues bajo justificaciones de economía procesal, prontitud en la impartición de justicia y conveniencia por reducción de la pena, se da una renuncia expresa al juicio oral y a la protección y garantías judiciales que con él vienen, así como la exposición a las personas a espacios potencialmente torturantes.

II. Personas privadas de libertad

a. Análisis del riesgo

Con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se introdujeron una serie de beneficios penitenciarios para que las personas privadas de libertad puedan salir anticipadamente de los Centros de Reinserción Social si cumplen con determinados requisitos. La libertad condicionada y la libertad anticipada son dos de los beneficios

con los que, al compurgarse el 50% de la pena impuesta -en el caso de la condicionada o el 70% -en el caso de la anticipada- la persona puede salir libre. Para ambos casos, los requisitos a cumplir establecidos en los artículos 137 y 141, además del tiempo, son: a) ser primodelincuente; b) que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; c) haber tenido buena conducta durante su internamiento; d) haber cumplido con el Plan de Actividades; e) haber cubierto la reparación del daño y la multa; y f) no estar sujeto a otro proceso penal por delito que amerite prisión preventiva.

De los requerimientos anteriores, resulta de mayor relevancia el que se refiere al riesgo que pueda presentar la persona con su liberación. Si bien es cierto que de la redacción del artículo se desprende la necesidad de que dicho riesgo sea “objetivo y razonable”, bajo el entendido de que debe existir una prueba fehaciente que constata su existencia, en la realidad no se aplican dichos principios y se deja al arbitrio judicial la decisión de la configuración del riesgo que, muchas veces, se ve determinada por prejuicios y estigmas que tienen como fin obstaculizar el externamiento de las personas, violando así su derecho a la libertad personal y a la reinserción social.

Cualquier acto privativo de libertad requiere de límites expresos en su aplicación, así como una justificación basada en los principios de razonabilidad, objetividad, necesidad y proporcionalidad, mismos que se sustentan en el principio de mínima intervención. Es bajo este último que el derecho a la libertad personal adquiere especial relevancia, pues a pesar de la existencia de una pena privativa de libertad, ésta se encuentra supe-
ditada en todo momento al respeto de la dignidad y los derechos humanos de las personas, de lo contrario, nos encontramos frente a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Cuando se elimina la objetividad y razonabilidad en el análisis del riesgo, se abre la puerta a los ya superados criterios de peligrosidad de las personas y se justifica la privación de la libertad en fines preventivos como la posibilidad de reincidencia o las repercusiones sociales, mismos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha calificado como violatorios al principio pro persona y, por tanto, contrarios al artículo 7.3 de la CADH referente a la prohibición de ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios⁸, configurando, así, tratos crueles inhumanos y degradantes⁹.

⁸ Cfr. CIDH. Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. 30 diciembre 2013, Párr. 144

⁹ Ver también, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994, párrafo 47; Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008, párrafo 98; y Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, párrafo 158

En el caso de las mujeres, la relevancia que adquieren los beneficios preliberacionales no sólo tiene que ver con impulsar su reinserción social a través de la anticipación de su salida para que recuperen el contacto con su familia y demás redes de apoyo -sobre todo en los casos en que son madres y fueron separadas de sus hijos como consecuencia del encarcelamiento- sino que también se debe buscar que se encuentren el menor tiempo posible en reclusión, pues el abandono y desarraigo social que sufren únicamente perpetra y reproduce la exclusión estructural que existe en el exterior, pues son víctimas de una profunda criminalización y estigmatización como consecuencia de los estereotipos que giran en torno a ellas, mismos que se intensifican cuando deben vivir con la pesada carga de la prisión. Dentro de los tribunales mexicanos no existe un enfoque diferenciado que le permita a las mujeres acceder a una justicia libre de cargas de género, por lo que la negativa de otorgar beneficios preliberacionales con base en criterios subjetivos y discrecionales sólo fomenta su permanencia en entornos torturantes -como son las cárceles¹⁰.

De conformidad con lo anterior y tomando en cuenta que, por un lado, no existe evidencia que demuestre que las políticas que restringen el derecho a la libertad personal, tengan una incidencia real en la disminución de la criminalidad y la violencia, o resuelvan los problemas de inseguridad ciudadana;¹¹ y, por el otro, que muchas de las mujeres privadas de libertad no plantean un riesgo para la sociedad y su encarcelamiento sólo dificulta su reinserción social,¹² es necesario que el Estado mexicano, como parte de sus obligaciones internacionales, aplique con mayor rigurosidad los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de las sanciones¹³, de manera que el encarcelamiento se tome como último recurso y se privilegien en todo momento las medidas no privativas de libertad.

De igual forma, el amplio margen de discrecionalidad que se le deja a la autoridad jurisdiccional conlleva una incertidumbre que viola el principio de seguridad jurídica y por tanto corresponde un trato cruel inhumano y degradante, en tanto que la persona se encuentra en un estado de indefensión frente a una decisión jurisdiccional subjetiva y limitativa de la libertad personal.

¹⁰ Ver, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, párrafo 7.

¹¹ Cfr. CIDH, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, párr. 100.

¹² Resolución de la Asamblea General 65/229 el 21 de diciembre de 2010 a través de la cual se adoptan las Reglas de Bangkok.

¹³ CIDH, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, párr. 216. En el mismo sentido, ver CIDH, Violencia, niñez y crimen organizado, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 40/15, 11 noviembre 2015, párr. 481.

Gráfico

2



Gráfico

3



La falta de atención tanto a la normativa internacional como a los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad en la imposición de sanciones constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes que propician un estado especial de vulnerabilidad derivado de actos arbitrarios que atentan directamente contra la dignidad de las personas privadas de libertad. Sin dejar de lado el hecho de que muchas personas privadas de libertad no saben siquiera de la existencia de dichos beneficios¹⁴, a pesar de ser una obligación del Estado el informar y notificar a la población interna sobre sus derechos y demás circunstancias que se relacionen con su pena.

Aunado a lo anterior, los estudios de personalidad se siguen aplicando como pruebas que pretenden justificar la existencia del riesgo que representa la persona privada de libertad y el sometimiento a ellos es requisito para acceder a los beneficios preliberacionales¹⁵. Dichos estudios ya han sido condenados en múltiples ocasiones por la CIDH e incluso por los tribunales mexicanos¹⁶, en tanto estudios pseudocientíficos que pretenden determinar la peligrosidad social de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios para sacarlas del grupo de los “buenos” y justificar así, las decisiones judiciales¹⁷ limitativas de libertad. Estos estudios constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes correspondientes a un sistema penitenciario que busca la readaptación y regeneración del individuo, considerado éste como un sujeto desviado y antisocial que requiere un tratamiento de “normalización”; criterios por demás violatorios a los derechos de integridad personal y dignidad humana.

“

A mí el abogado no me dijo nada de los beneficios, me enteré por unos compañeros aquí. Fui con el área jurídica a preguntar y me dijeron que no me los iban a dar hasta que tuviera los estudios

-ENTREVISTA A UN HOMBRE PRIVADO DE LIBERTAD EN BAJA CALIFORNIA

”

Al no privilegiar medidas alternas a la privación de la libertad, se está sometiendo a las personas a contextos que son, de por sí, torturantes y se aumenta la probabilidad de sufrir tratos crueles inhumanos y degradantes cuando se encuentran

¹⁴ De las 78 personas entrevistadas en el Centro de Reinserción de Mexicali, 42 sostienen no saber sobre los beneficios que contempla la ley.

¹⁵ En Oaxaca se ha recibido información, derivado de las asesorías legales otorgadas, que en varios casos se han negado los beneficios con base en los resultados de los estudios. De igual forma, algunos casos en Mexicali reportan que se las autoridades les solicitan “los estudios” como un prerrequisito para solicitar una audiencia de concesión de beneficios.

¹⁶ Tesis: 1a. CCXXII/2016 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Septiembre de 2016. P. 504.

¹⁷ Cfr. CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México. OEA/Ser.L/I.L.100, septiembre 24, 1998, párr. 272 y 277

sujetos a la custodia del Estado en lugares que no son capaces de garantizar una vida digna. Es por demás sabido que las condiciones de internamiento de los centros penitenciarios mexicanos distan mucho de cumplir con los estándares internacionales en cuestión de respeto a los derechos humanos. Al respecto, el Estado mexicano tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a que no se le impida a las y los ciudadanos el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna,¹⁸ así como a tomar las medidas necesarias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos¹⁹.

En este sentido, si la legislación prevé supuestos que favorecen al sujeto en mayor medida respecto del derecho a la libertad personal, es labor de los jueces promover e impulsar el otorgamiento de los beneficios que permitirán a las personas hacer efectiva de manera plena su reinserción social y, como parte de la obligación de tomar todas las medidas necesarias se entiende que se deberán eliminar aquellos obstáculos que, bajo criterios discrecionales, impiden a las personas acceder a estos derechos; obstáculos que por sí solos, configuran malos tratos en perjuicio de las personas privadas de libertad.

b. Derecho a la salud

Uno de los aspectos primordiales que se relacionan con la protección a la integridad personal de los sujetos – como obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para impedir actos de tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes- es el derecho a la salud. En la normativa nacional, este derecho se encuentra contemplado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en relación con la población privada de libertad, en los artículos 9, fracciones II y X, y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Las personas privadas de libertad se hallan en una situación especial de vulnerabilidad como consecuencia de la separación y aislamiento respecto del resto de la sociedad como resultado de la naturaleza propia de la pena. Derivado de la reclusión, esta población no cuenta con ningún tipo de protección ni servicios adicionales salvo aquellos que les son brindados por las instituciones penitenciarias y, al igual que los demás aspectos relacionados con las condiciones de internamiento, resultan insuficientes y precarios²⁰. Es así como este grupo ha sido excluido de los servicios de salud

¹⁸ Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya vs. Paraguay, sentencia del 29 de marzo de 2006, serie C, núm. 146. Párr. 153.

¹⁹ Artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el artículo 1º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

²⁰ El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2017), realizado por la CNDH mostró que, a nivel nacional, hay deficiencias en los servicios de salud y alimentación, así como en las condiciones materiales e higiene de las instalaciones penitenciarias.

al no poder acceder a los mecanismos que satisfagan sus necesidades de salud bajo las mismas condiciones a que acceden otros individuos o grupos de la sociedad²¹.

La exclusión es resultado, entre otras causas, de la falta de coordinación entre autoridades e instituciones, pues históricamente se ha dejado a los centros penitenciarios como únicos obligados en el otorgamiento de los servicios de salud a la población interna, dejando a la Secretaría de Salud- quien es la encargada del sector salud a nivel nacional- libre de cualquier responsabilidad con base en los siguientes argumentos.



Gráfica realizada por Asilegal con datos obtenidos de la Secretaría de Seguridad Pública, vía solicitud de información pública No. 00014819

La Ley General de Salud, en su artículo 77 Bis 1, establece que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al sistema de salud sin importar su condición social, y será obligación del Estado otorgar los servicios bajo un esquema libre de discriminación. Por su parte, el artículo 77 Bis 3 del mismo ordenamiento señala como requisitos para ser beneficiario del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), que las personas no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social²² o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud.

²¹ OMS. Exclusión en Salud en países de América Latina y el Caribe Serie No. 1 extensión de la Protección Social en Salud. Ver también Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso De la Cruz Flores Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004, párrafo 124, y Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011, párrafo 84.

²² Este régimen aplica para las personas que están sujetas a una relación laboral

Las autoridades mexicanas han interpretado que el servicio de salud otorgado por las instituciones penitenciarias corresponde un tipo de “mecanismo de previsión social en salud”, por lo que las personas privadas de libertad no pueden ser beneficiarias del Seguro Popular conforme a los requisitos establecidos por el mencionado artículo 77 Bis 3.

Esta interpretación sobre el significado de “otro mecanismo de previsión social”, así como la restricción sobre la afiliación, se plasmó en el Manual de Afiliación y Operación del Seguro Popular:

“No procede la afiliación al Sistema de los internos de centros penitenciarios (CEFERESOS, CERESOS, reclusorios y penitenciarias).
[...]

De acuerdo a la legislación federal y estatal que regula la operación de los reclusorios y centros de readaptación social, deberá existir en los mismos un servicio de atención médico-quirúrgico, que permita resolver los problemas que se presenten, previendo dichos ordenamientos legales, la atención de los internos en las unidades médicas cercanas al centro penitenciario, en casos de gravedad”.

De igual forma, y de conformidad con los nuevos Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2018, se establece que se deberá cambiar de titular en los casos de afiliación de Núcleos Familiares, cuando éste se encuentre privado de su libertad, con la posibilidad de que, cuando la recobre, “podrá solicitar su reactivación como beneficiario”²³. Los Lineamientos en cuestión son ilegales, inconstitucionales e inconvenientes, y generan un grave incumplimiento de las obligaciones estatales de garantizar el acceso a un derecho económico y social fundamental como es el derecho a la salud.

Es con base en lo anterior, que las personas privadas de libertad han sido expresamente expulsadas del marco de protección en salud del que disfruta el resto de la población en virtud de una interpretación directamente discriminatoria de la norma²⁴ plasmada en un documento no vinculante, por lo que no tiene fuerza de ley, y violatoria de derechos humanos a pesar de existir dentro de la misma Ley General de Salud, disposicio-

²³ Dirección General de Afiliación y Operación. Guía de Afiliación y Operación (2018), p. 83. Disponible en línea: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/384970/Gu_a_Gu_a_de_Afiliaci_n.pdf

²⁴ Corte IDH. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18. Párr. 103.

nes expresas sobre atención de la salud prioritaria para los grupos vulnerables (artículo 25²⁵), mismas que sí son vinculantes y obligatorias, aunadas al mandato constitucional y la normativa internacional en la materia.

Las personas privadas de libertad se encuentran, por tanto, en una zona gris de desprotección donde, por un lado, Secretaría de Salud ha excusado su involucramiento bajo el argumento de que no es su obligación, y por el otro, el Sistema Penitenciario ha fallado en otorgar siquiera la atención de primer nivel a que lo obliga la legislación²⁶.

La ausencia de un adecuado acceso a los servicios de salud dentro de los centros penitenciarios como resultado de la negativa expresa de la autoridad corresponde una violación directa al principio de no discriminación, mismo que resulta fundamental no sólo para la protección de los derechos humanos sino también para la interpretación y aplicación misma de la Convención contra la Tortura²⁷. El trato discriminatorio que existe en perjuicio de las personas privadas de libertad configura tratos crueles inhumanos y degradantes, pues afecta directamente el ejercicio pleno de sus derechos, en específico, el derecho a la salud como componente elemental del derecho a la integridad personal y relacionado íntimamente con la dignidad humana.

“El médico es un veterinario. Hace varios años se murió una compañera, tenía cáncer, no le atendieron, se le avanzó el cáncer, cuando la sacaron era demasiado tarde, ya había invadido todo por dentro, nada más la dejaron libre para morir, unos 8 días antes de morir”

-TESTIMONIO DE UNA MUJER PRIVADA DE LIBERTAD EN HIDALGO

El derecho a la protección de la salud requiere de una obligación de hacer por parte de las autoridades, pues de sus acciones u omisiones depende la eficacia con que éste se garantice²⁸ y su efectividad demanda la observancia de los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad señalados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales²⁹, en tanto que debe garantizar la existencia de suficientes establecimientos, bienes y servicios para que toda la población pueda libremente acceder a ellos bajo un marco de igualdad y no discriminación.

²⁵ Artículo 25.- Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables.

²⁶ La falta de fiscalización en la prestación del servicio de salud por parte de los Centros Penitenciarios ha generado que se encuentre sobrepasado; no cuenta con los recursos materiales ni humanos suficientes, y la atención que da resulta sumamente deficiente.

²⁷ Cfr. CAT. Observación General No. 2. Párr. 20.

²⁸ CNDH. Recomendación General No. 15 sobre el Derecho a la Protección de la Salud, 23 de abril de 2009.

²⁹ Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párr. 12.

En este sentido, para que un servicio de salud dentro de las prisiones no sea discriminatorio, debe estar fundado en el principio de equivalencia³⁰, es decir, toda la política de salud penitenciaria debe estar integrada y ser compatible con el sistema de salud nacional de manera que se garantice un servicio bajo condiciones equiparables a los que disfruta el resto de la población en el exterior, con especial atención a los grupos vulnerables o que se encuentran en condiciones socioeconómicas menos favorables.

Es en la discriminación que la tortura y los malos tratos encuentran una vía sin obstáculos pues ésta, como práctica deshumanizante, se perpetra con mayor facilidad e impunidad cuando la víctima pertenece a un grupo de por sí desvalorizado socialmente. La discriminación, entonces, funciona como un tipo de justificación de la tortura dentro de los centros penitenciarios, pues con base en la criminalización y los estereotipos que giran en torno a las personas privadas de libertad, se considera que son merecedores de su situación y sufrimiento, por lo que implica un atentado directo contra su dignidad y, en consecuencia, un trato cruel, inhumano y degradante.

El encarcelamiento, en sí, genera consecuencias negativas en las personas privadas de libertad, sin embargo, existen afectaciones muy particulares cuando se trata de mujeres. El impacto psicoemocional que generan los tratos crueles inhumanos o degradantes imperantes en el sistema penitenciario es, por un lado, el abandono y, por el otro, la aceptación o normalización del castigo como resultado de la introyección que hacen las mujeres de los estigmas y estereotipos que se construyen en su perjuicio. El Comité ya ha subrayado que el género es un factor fundamental en la presencia de actos de tortura en virtud de que la condición de mujer se combina con otras características que las pone en riesgo de sufrir torturas y malos tratos³¹; es por ello que la discriminación en el acceso a la salud afecta en especial medida a las mujeres privadas de libertad. Siendo la mayoría de las políticas y servicios de salud de las prisiones diseñados para hombres³², se ignoran sistemáticamente las necesidades específicas de las mujeres y se omite una atención médica diferenciada, por lo que se les somete a una serie de malos tratos³³ que se ven reflejados en el deterioro de las condiciones de salud y atentan directamente contra su integridad personal.

³⁰ Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. R (98) 7 Concerning the Ethical and Organizational Aspects of Health Care in Prison (Apr. 8, 1998), párr. 10.

³¹ Cfr. CAT, Observación General No. 2, Párr. 22.

³² Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A/HRC/31/57, 5 de enero de 2016, párr. 15.

³³ Cfr. CAT, Observación General No. 3, Párr. 26.

“

Apenas hace un año estaba embarazada y no me sacaban al hospital para que me revisaran y cuando me sacaron era demasiado tarde. Ya estaba avanzada, tenía 6 meses. Supe que estaba embarazada desde un principio, pero aquí nunca me atendieron. Hasta el séptimo mes me puse mala, tuve una calentura muy fuerte y fue cuando me sacaron. Siempre comenté que me dolía el estómago, pero sólo me daban medicamento para la presión y puras cosas así

ENTREVISTA A UNA MUJER PRIVADA DE LIBERTAD EN HIDALGO

”

Se tiene información, recabada a partir de una serie de entrevistas, sobre las condiciones de internamiento, en específico relacionadas con la salud, en los Centros de Reinserción Social de Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Baja California³⁴. De ellas se han identificado una serie de patrones al momento en que la autoridad brinda los servicios de salud. Muchas de las personas entrevistadas no tenían padecimientos antes de su ingreso a los Centros o, en algunos casos, ingresaron con afectaciones directas de la tortura y malos tratos ocurridos durante su detención que no fueron atendidas pertinentemente.

En Hidalgo, por ejemplo, al momento de la detención, 33 mujeres fueron víctimas de insultos, humillaciones y amenazas; 46 de jaloneos, empujones, azotes y golpes; 6 fueron sometidas a choques eléctricos, ahogamiento y asfixia; 8 fueron desnudadas y sufrieron tocamientos.

En Chiapas y Oaxaca, de las 202 personas privadas de libertad entrevistadas, 59 alegaron haber sufrido amenazas, insultos y humillaciones durante su detención, 55 fueron víctimas de golpes, azotes, jaloneos y empujones; 10 sufrieron choques eléctricos, ahogamiento y/o asfixia.

La negación al derecho a la salud se presenta desde el momento mismo en que la persona es detenida, no sólo porque es víctima de tortura y malos tratos -un claro atentado contra la integridad personal- sino también porque muchos de los detenidos no son presentados oportunamente ante un médico legista que certifique su estado de salud.

³⁴ En Hidalgo se entrevistó a 113 mujeres en mayo de 2018. En Baja California se entrevistó a 78 personas privadas de libertad en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Mexicali, 50 hombres y 28 mujeres, en el mes de octubre de 2018. En Chiapas y Oaxaca se realizaron entrevistas entre septiembre y octubre de 2016 en 11 Centros de Reinserción Social, tres en Chiapas y ocho en Oaxaca a un total de 202 personas privadas de libertad, de ellas, 44 eran mujeres y 158 eran hombres y se encontraban repartidas de la siguiente manera: 25 personas en el CRS El Amate, 17 en el CRS Comitán, 44 en San Cristóbal de las Casas, 17 en Taniniv, 19 en Huajuapán, 12 en Juchitán, 13 en Juquila, 14 en Miahuatlán, 10 en Pochutla, 14 en Tehuantepec y 17 en Tlaxiaco.

Gráfico

5

Hidalgo.

Mujeres privadas de libertad que sufrieron tortura y malos tratos durante su detención



Gráfica realizada por Asilegal con datos obtenidos de las entrevistas realizadas a 113 mujeres

Gráfico

6

Oaxaca y Chiapas.

Personas privadas de libertad que sufrieron tortura y malos tratos durante su detención



Gráfica realizada por Asilegal con datos obtenidos de las entrevistas realizadas a 202 personas

De las personas entrevistadas, en Hidalgo 47 no fueron atendidas por médico alguno en los momentos posteriores a su presentación ante el Ministerio Público, y en Oaxaca y Chiapas, son 37 personas las que alegan la misma omisión por parte de la autoridad. Esto genera graves repercusiones en el estado de salud de las personas, mismas que, una vez ingresando al Centro penitenciario, no son atendidas adecuadamente debido a las carencias estructurales en materia de salud existentes al interior.

La cantidad de personas privadas de libertad que sufren algún padecimiento y no reciben el cuidado necesario es muy grande. En Chiapas y Oaxaca, de las 202 personas entrevistadas, 77 sufren alguna enfermedad crónica y 57 de ellas alegan no recibir ningún tipo de tratamiento o este resulta insuficiente. En Mexicali, 39 tienen alguna enfermedad o padecimiento crónico; 25 de ellas alegan que la atención ha sido muy mala e insuficiente. En Hidalgo, 70 tienen problemas de salud crónico y 31 muestran inconformidad con el servicio³⁵ (por mala calidad y por ausencia tanto de doctores como de medicamentos).



Gráfica realizada por Asilegal con datos obtenidos de las entrevistas realizadas a un total de 77 personas privadas de libertad que tienen un padecimiento crónico de salud.

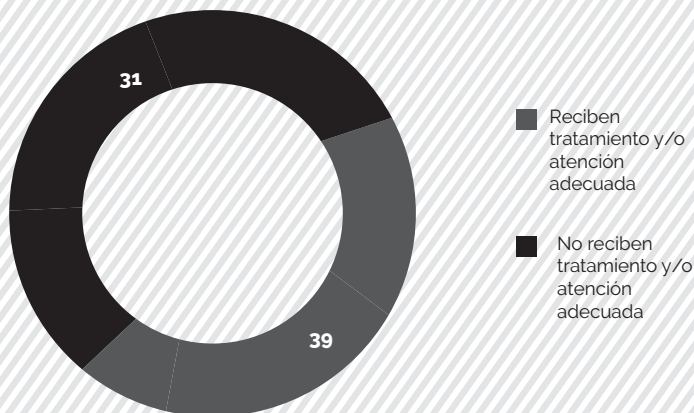
³⁵ Una mujer privada de libertad en Mexicali sostiene que “lo único que hace el dentista es sacar dientes, cuando nos duele la muela o algo, el sólo las extrae. Todas estamos chimuelas”.

Gráfico

8

Hidalgo.

Mujeres privadas de libertad que sufren un padecimiento crónico y no reciben atención médica



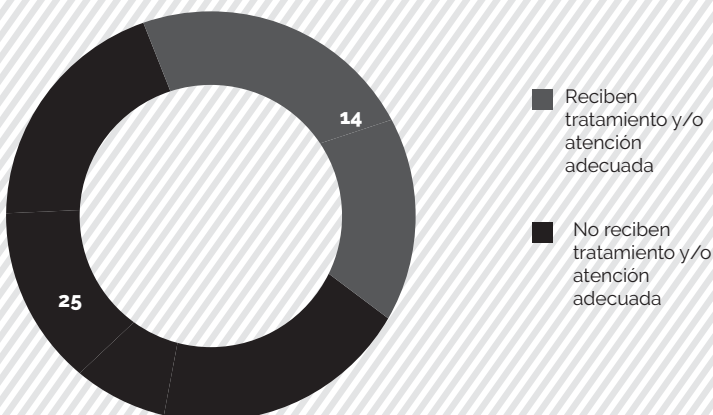
Gráfica realizada por Asilegal con datos obtenidos de las entrevistas realizadas a un total de 71 mujeres privadas de libertad que sufren algún padecimiento crónico de salud

Gráfico

9

Mexicali.

Personas Privadas de libertad que sufren un padecimiento crónico y no reciben atención médica



Gráfica realizada por Asilegal con datos obtenidos de las entrevistas realizadas a un total de 39 mujeres privadas de libertad que sufren algún padecimiento crónico de salud

De igual forma se ha recabado información sobre diversas fallas estructurales dentro de los Centros³⁶ como, por ejemplo, que no se tiene acceso a algunas medicinas y otros servicios o que son las personas privadas de libertad, a través de sus familiares, quienes deben de pagar para recibirlos. En cuanto a la atención especializada de las mujeres, en los Centros donde sí hay ginecóloga, ésta no está disponible la mayoría del tiempo y la espera para una consulta es muy prolongada.

Por todas las razones anteriormente expuestas, el Estado mexicano, al negarle el acceso a la salud a las personas privadas de libertad, está atentando contra la integridad personal bajo criterios discriminatorios³⁷, violando así el derecho a la igualdad, que es inseparable de la dignidad esencial de la persona³⁸, en perjuicio de un grupo social en específico, colocándolo en una situación de doble y especial vulnerabilidad. Las personas privadas de libertad en México son sometidas a sufrimientos y tratos crueles inhumanos o degradantes durante todo el tiempo que dure su condena, pues deben soportar dolores agudos y malestares crónicos sin que exista respuesta alguna por parte de las autoridades.

c. El encierro como forma de combatir el autogobierno y la inseguridad en los centros penitenciarios

Si bien es cierto que la seguridad constituye un elemento esencial para alcanzar el objetivo de una estancia digna para las personas en reclusión, cuando ésta es la única que se privilegia, se corre el riesgo de implementar medidas promotoras del encierro y de privación del desarrollo de actividades necesarias para el ejercicio de derechos fundamentales para las personas privadas de libertad como lo es el de la reinserción social³⁹ y que, en conjunto con las malas condiciones de internamiento bajo las cuales se le impide a la persona acceder a una vida digna, se configuran tratos crueles, inhumanos y degradantes.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existe un mayor riesgo de transgresión de la dignidad y los derechos humanos de las personas en situación de reclusión cuando se ha incrementado la sensación de inseguridad y se genera mayor presión política y

³⁶ Un caso muy particular es el registrado en Mexicali, pues ahí sólo existe un doctor al cual se puede acceder únicamente vía papeleta, a través de la cual la persona solicita una consulta. El problema es que sólo se entrega una papeleta al mes, aplicable para todas las áreas y actividades dentro del Centro, es decir, si la persona quiere una consulta con el médico, pero a la vez quiere inscribirse en alguna clase de educación, deberá escoger sólo una y esperar al siguiente mes para que, con una nueva papeleta, solicite la otra.

³⁷ Cfr. CAT. Observación General No. 2. Párr. 20

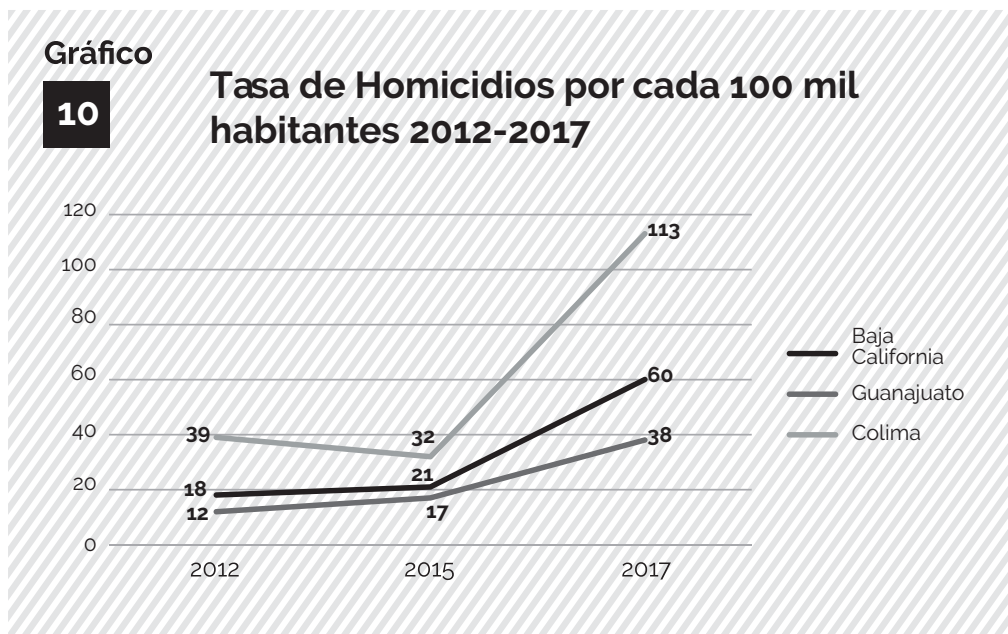
³⁸ Corte IDH. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18. Párr. 100

³⁹ De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, la reinserción social se define como la "restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos". Ahora bien, la restitución del pleno ejercicio de las libertades debe entenderse no solamente como el hecho de regresar a la persona al contexto al que se encontraba, sino como la obligación por parte del Estado de brindar las herramientas necesarias para que la persona que se encuentra privada de libertad pueda reinsertarse a la sociedad con mayores oportunidades y sea capaz de desarrollar su proyecto de vida en un marco de legalidad ("que no vuelva a delinquir"). Asilegal; La situación del derecho a la reinserción social de las mujeres, bajo la lupa de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Análisis comparativo en cuatro entidades; 2018; p. 7. En línea: <https://asilegal.org.mx/wpcontent/uploads/2019/01/INFORME_PROEQUIDAD_Asilegal_dic_2018.pdf>

mediática para el establecimiento de medidas represivas, que producen, incluso, una erosión en la prohibición de la tortura⁴⁰.

Se ha identificado que la práctica del encierro como parte de la política penitenciaria del país, se presenta en varios estados de la República, pero aquellos cuyos Centros Penitenciarios cuentan con alarmantes niveles de encierro son: Baja California, Colima y Guanajuato; así como todos los Centros de reclusión federales⁴¹.

Tanto el estado de Baja California, como Colima y Guanajuato son entidades en las que la percepción de inseguridad aumentó significativamente durante el período comprendido de 2012 a 2017 debido al proceso de reconfiguración de la violencia producido por la guerra contra el narcotráfico. Durante esos años, Baja California subió 240% su tasa de homicidios; en el caso de Colima, el aumento de la tasa de homicidios durante el mismo período fue de 193%. Respecto a Guanajuato, la entidad pasó de una tasa de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015 a 38 en 2017⁴².



Realizado por Asilegal con datos de Geografía de la violencia. Los homicidios subieron en algunos puntos de México y disminuyeron en otros. ¿Qué nuevas zonas marcan la violencia del país?; El Universal. Unidad de datos; 4 de septiembre de 2018

⁴⁰ CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas; OEA/Ser.L/V/II. Doc. 64; 31 de diciembre 2011; párr. 364 (d) En línea: <<http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf>>

⁴¹ Para la identificación de los estados en los que esta práctica es más frecuente hemos analizado los datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, de la CNDH, junto con los de la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL) 2016, del INEGI.

⁴² Geografía de la violencia. Los homicidios subieron en algunos puntos de México y disminuyeron en otros. ¿Qué nuevas zonas marcan la violencia del país?; El Universal. Unidad de datos; 4 de septiembre de 2018. En línea: <<http://interactivo.eluniversal.com.mx/2018/homicidiosgeografia-de-violencia/>>

El incremento de la violencia en estas entidades ha tenido su correspondiente reflejo en la organización de sus sistemas penitenciarios en los que se ha implementado una política de encierro absoluto en contra de las personas privadas de libertad. Los casos más graves se presentan en Baja California y en los Centros Federales en donde más del 80% de las personas pasan en sus celdas de 22 a 24 horas⁴³.

En el caso particular de Baja California hay que añadir que antes de 2002 los Centros de reclusión contaban con un grave problema de autogobierno. Bajo el argumento de la seguridad, de 2002 a la fecha, Baja California ha optado por seguir el modelo de prisiones “súper-max”⁴⁴, al desarrollar una infraestructura de alta seguridad y una política de encierro absoluto. El modelo “súper-max” también es implementado en todos los Centros Penitenciarios Federales. Una deficiencia generalizada del sistema penitenciario mexicano es la falta de personal, particularmente de seguridad y custodia. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 83.33% de los Centros Penitenciarios a nivel nacional carece de este tipo de personal⁴⁵. Esta ausencia es uno de los argumentos más utilizados por la autoridad para justificar el encierro y la imposibilidad de desarrollar actividades fuera de las celdas.

El reforzamiento de la seguridad aumentando las horas de encierro es resultado, en parte, del cumplimiento de los estándares para la obtención de acreditación de la Asociación Americana de Correccionales (ACA), que buscan implementar estructuras penitenciarias de máxima seguridad⁴⁶ para prevenir “que las organizaciones criminales transnacionales operen desde dichos centros”⁴⁷. Al respecto, la CIDH ha mostrado su preocupación por este tipo de modelos represivos y contrarios a todos los estándares internacionales, pues la priorización de recursos va encaminada a la limitación de las libertades en lugar de dignificar y humanizar las estancias penitenciarias⁴⁸.

En la siguiente tabla, es posible observar los estados y Centros Penitenciarios en los que las personas privadas de libertad permanecen prácticamente encerradas en sus celdas todo el día. En paralelo, se muestra la manera como el encierro se refleja en la inexistencia de autogobierno y en la falta de actividades. Finalmente, se añade cuántos y cuáles de estos centros cuentan con certificación ACA.

⁴³ Datos obtenidos a través de: INEGI. Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL) 2016; datos abiertos.

⁴⁴ “Las prisiones ‘súper-max’ se caracterizan por un régimen de detención muy restrictivo”. APT. Equilibrando la seguridad y la dignidad en las prisiones: un marco de trabajo para el monitoreo preventivo; ISBN: 978-1-909521-33-9; 2013; p. 17. En línea: <https://www.appt.ch/content/files_res/balancing-security-and-dignity-es.pdf>

⁴⁵ Información obtenida a través del análisis de datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2017, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En línea: <http://appweb2.cndh.org.mx/DNSP/Ceresos/p_diagNacional_Resumen.asp>

⁴⁶ Cfr. CIDH. Situación de Derechos Humanos en México. 31 diciembre 2015. Doc. 44/15, párr. 344

⁴⁷ Para que los Centros Penitenciarios obtengan su certificación, deben cumplir con 137 indicadores (40 obligatorios y 77 no obligatorios). De los 137 indicadores, el 41.87% está estrechamente vinculado a la seguridad de los Centros y solamente el 8.76% está relacionado con el tema “programa y actividad”. Cfr. SEGOB. “Solicitud de Incorporación del Subprograma: Acreditación (Certificación) de establecimientos penitenciarios. Anexo III” En línea: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189192/Acreditacion_certificacion_esta_blecimientos_penitenciarios_III.pdf>

⁴⁸ Cfr. CIDH. Situación de Derechos Humanos en México. Op. Cit. Párr. 345

ENTIDAD CENTROS PENITENCIARIOS	% DE POBLACIÓN HRS DE ENCIERRO		AUTO GOB	ACTIVIDADES				CERTIF ACA
	22-24 HRS	19-21 HRS		LABORALES	EDUCATIVAS	DEPORTIVAS	VINC CON LA SOCIEDAD	
BAJA CALIFORNIA	78.49	6.05						
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL TIJUANA	87.55	2.3	8.09	1.29	6.89	6.82	6.26	Sí
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DE MEXICALI	81.54	9.16	8.15	0.9	6.34	5.39	7.66	
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL "EL HONGO"	81.85	2.74	9.06	6.68	7.28	8.38	6.39	Sí
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL "EL HONGO II"			7.9	7.27	7.86	9.34	7.32	
COLIMA	16.37	11.36						No
RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN			8.5	5	7.21	6.21	7.09	
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL COLIMA			8.11	5.84	7.03	7.71	6.94	
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DE MANZANILLO			8.72	5.69	7.18	7.07	6.86	
GUANAJUATO	17.48	6.39						
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE IRAPUATO			9.32	6.97	7.11	7.57	8.44	Sí
CENTRO ESTATAL DE REINSECCIÓN SOCIAL DE GUANAJUATO			8.79	2.62	4.35	2.92	7.48	Sí
CENTRO ESTATAL DE REINSECCIÓN SOCIAL DE VALLE DE SANTIAGO			8.87	6.97	7.12	7.32	8.55	Sí
CENTRO ESTATAL DE REINSECCIÓN SOCIAL DE LEÓN			8.97	5.76	7.48	7.74	8.38	Sí
CENTRO ESTATAL DE REINSECCIÓN SOCIAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE			9.22	3.48	8.04	7.2	8.37	Sí
CENTROS FEDERALES	96.26	3.02						
CEFESO NO. 14 "CPS", GÓMEZ PALACIO, DURANGO			9.59	2.98	5.81	7.93	7.26	Sí
CEFESO NO. 7 "NOR-NOROESTE", GUADALUPE VICTORIA, DURANGO			8.35	3.55	8.34	7.49	6.99	Sí
CEFESO NO. 12 "CPS", GUANAJUATO			9.99	4.98	9.58	4.99	5.21	Sí
CEFESO NO. 1 "ALTIPLANO", ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDOMEX			10	4.91	6.8	6.85	5.95	Sí
CEFERPSI, MORELOS			9.84	2.57	6.71	7.57	5.99	Sí
CEFESO NO. 16 "CPS", MORELOS			9.99	3.41	6.65	6.64	6.57	Sí
CEFESO NO. 4 "NOROESTE", NAYARIT	21.44	64.79	9.94	4.87	6.72	3.06	4.42	Sí
CEFESO NO. 2 "OCCIDENTE", EL SALTO, JALISCO			10	6.5	3.6	6.06	4.06	Sí
CEFESO NO. 13 "CPS", OAXACA	62.36	34.45	10	1.52	3.4	5.59	5.56	Sí
CEFESO NO. 6 "SURESTE", HUIMANGUILLO, TABASCO			9.94	4.37	7.17	7.05	6.58	Sí
CEFESO NO. 11 "CPS", SONORA	62.31	34.49	9.98	3.05	4	6.07	5.94	Sí
CEFESO NO. 5 "ORIENTE", VILLA ALDAMA, VERACRUZ	87.19	7.79	9.29	7.15	8.25	3.8	4.83	Sí
CEFESO NO. 8 "NOR-PONIENTE", GUASAVE, SINALOA			9.62	2.21	7.1	6.66	5.09	Sí
CEFESO NO. 15 "CPS", TAPACHULA, CHIAPAS	84.76	5.17	9.93	0.68	4.71	5.84	5.41	Sí
CEFESO NO. 9 "NORTE", CUIDAD JUAREZ, CHIHUAHUA			9.84	3.05	6.25	6.27	6.98	Sí

"FUENTE: Tabla elaborada a partir de la sistematización de datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL) 2016, del INEGI; del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, de la CNDH, y del documento de la Secretaría de Gobernación: Solicitud de Incorporación del Subprograma: "Acreditación (Certificación) de establecimientos penitenciarios".

* Los Centros Penitenciarios que se analizaron fueron los visitados y evaluados durante 2017 por la CNDH. Cada año, la CNDH desarrolla una evaluación de los Centros de reclusión con base en sus condiciones de internamiento (la escala va de 0 a 10, siendo el 10 el mejor valor en cuestiones de internamiento). "

Como puede observarse, en el estado de Baja California prácticamente toda la población se encuentra encerrada dentro de sus celdas de 22 a 24 horas diarias. Además de que las personas tienen un acceso sumamente limitado al desarrollo de actividades laborales, educativas y deportivas. Dos de los Centros visitados por la CNDH (Mexicali y El Hongo II) cuentan con certificación ACA.

La información anterior puede ser corroborada a partir de los hallazgos presentados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en su informe sobre su visita a centros Penitenciarios de Baja California en 2018:

“A las personas privadas de la libertad les permiten salir de sus dormitorios una hora a la semana (actividad denominada “yarda”), tiempo en el que compran artículos en la tienda, se cortan el cabello, hablan por teléfono y, ocasionalmente, practican alguna actividad deportiva... Las personas entrevistadas se inconformaron por dicha situación de encierro y falta de actividades.”⁴⁹

Con relación a las actividades, el MNPT mencionó que solamente el 4.89% de la población privada de libertad en Baja California cuenta con una actividad laboral remunerada, el 26.79% tiene alguna actividad educativa –esta actividad muchas veces la desarrollan dentro de la celda- y 25.90% realiza alguna actividad deportiva⁵⁰.

En cuanto al estado de Colima, sus Centros Penitenciarios no cuentan con certificación ACA. Sin embargo, casi un tercio de la población (27.73%) pasa entre 19 y 24 horas en su celda. De acuerdo con la CNDH, la entidad no cuenta con problemas de autogobierno, pero está reprobada en el desarrollo de actividades laborales dirigidas a las personas privadas de libertad.

En Guanajuato, todos los Centros Penitenciarios cuentan con certificación ACA; casi un cuarto de su población pasa encerrado de 19 a 21 horas diarias. Los Centros de este estado tampoco tienen problemas de autogobierno, pero en tres de los cinco centros evaluados, las personas no tienen acceso al desarrollo de actividades laborales, educativas o deportivas.

Finalmente, como puede identificarse en la tabla, en todos los Centros Federales, se hace uso de la política del encierro excesivo para garantizar la seguridad. Todos los CEFERESOS, a excepción del No. 17 “CPS” Michoacán, cuentan con certificación ACA y no tienen problemas de autogobierno. Sin embargo, también en todos ellos las personas se encuentran absolutamente privadas de la posibilidad de realizar actividades para su reinserción social.

⁴⁹ MNPT. Informe de Supervisión ISP-5/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) sobre los Centros de Reinserción Social del Estado de Baja California; 12 de junio de 2018; p. 15. En línea: <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/5_2018.pdf>.

⁵⁰ MNPT. Informe de Supervisión ISP-5/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) sobre los Centros de Reinserción Social del Estado de Baja California; 12 de junio de 2018; p. 16. En línea: <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/5_2018.pdf>.

Con relación al encierro y la falta de actividades en Centros Penitenciarios Federales, el MNPT ha manifestado lo siguiente:

“En los seis CEFERESOS ‘CPS’ visitados se constató que no existen actividades laborales remuneradas, y en cinco de ellos se tuvo conocimiento sobre situaciones relacionadas con la falta o insuficiencia de personal técnico para la organización de actividades laborales y de capacitación, educativas y deportivas, por lo que las personas privadas de la libertad permanecen la mayoría del tiempo en sus estancias. Cabe mencionar que en los CEFERESOS ‘CPS’ No. 11, en Sonora, y 14, en Durango, los internos señalaron que permanecen 23 horas al día en sus celdas, y que incluso en ocasiones no salen en todo el día, mientras que en el CEFERESO ‘CPS’ No. 15, en Chiapas, refirieron también que permanecen hasta 22 horas en esas circunstancias.”⁵¹

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través de la Opinión Técnica Consultiva ex officio No. 002/2014, ha referido que:

“los Estados de la región deberían abstenerse de diseñar políticas de seguridad que se fundamenten únicamente en una respuesta represiva. En este sentido, es importante recordar que una posible sensación generalizada de inseguridad no debería servir como razón para la formulación de políticas de flexibilización y devaluación de las personas privadas de libertad, donde normalmente se encuentran sobrerrepresentadas las minorías más excluidas de la sociedad.”⁵²

El encierro y la privación de actividades que contribuyan a la reinserción social son acciones violatorias de lo establecido en el artículo 18 de la Constitución mexicana, en la Ley Nacional de Ejecución Penal y en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) en el sentido de que, de acuerdo con dichos ordenamientos, el sistema penitenciario debe basarse en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona, pues de no atender esas máximas se abre un camino libre para la perpetración de tortura y malos tratos⁵³ en virtud de que se privilegia la seguridad a través de medidas que devalúan a uno de los grupo minoritarios y vulnerables más excluidos de la sociedad”.⁵⁴

⁵¹ MNPT. Informe 8/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los Centros Federales de Readaptación Social Denominados ‘CPS’; 10 de octubre de 2016; p. 11. En línea: <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/8_2016.pdf>

⁵² UN. ONUDC. La prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: una posible estrategia para la República de Panamá; Opinión Técnica Consultiva ex officio No. 002/2014; p. 4. En línea <https://www.unodc.org/documents/ropan/Technical_Consultative_Opinions_2014/Opinion_Consultiva_2014-002.pdf>

⁵³ Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

⁵⁴ Cfr. UN. ONUDC. La prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: una posible estrategia para la República de Panamá; Opinión Técnica Consultiva ex officio No. 002/2014; p. 4. En línea: <https://www.unodc.org/documents/ropan/Technical_Consultative_Opinions_2014/Opinion_Consultiva_2014-002.pdf>

d. Las Mujeres en prisión preventiva de la guerra contra el narcotráfico

En el 2011, punto más intenso de la Guerra contra el Narcotráfico impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón, eran comunes los arrestos masivos desplegados como actos de desmantelamiento de los Carteles de drogas a fin de demostrar la eficiencia de la estrategia militar del gobierno contra el crimen organizado.

El resultado de esa política fue un encarcelamiento masivo de mujeres bajo causas penales conjuntas (con más coacusados), cuyos casos hasta la fecha no han recibido sentencia y se encuentran todas privadas de libertad como medida cautelar. La prisión preventiva es una medida excepcional que tiene como finalidad asegurar la presencia de la persona acusada a su proceso, con el límite de que no debe durar más de dos años. Sin embargo, a nivel nacional, el abuso de esa medida ha generado que un tercio de las personas privadas de la libertad se encuentran en prisión preventiva, muchas por más del límite legal.

“

Me detuvieron en un retén militar mientras iba de regreso a mi casa, no traía identificación y ya no me dejaron ir. Llevo ya casi 8 años esperando, sin ver a mis hijas... solo quiero saber qué está pasando

-TESTIMONIO DE UNA MUJER PRIVADA DE LIBERTAD EN BAJA CALIFORNIA

”

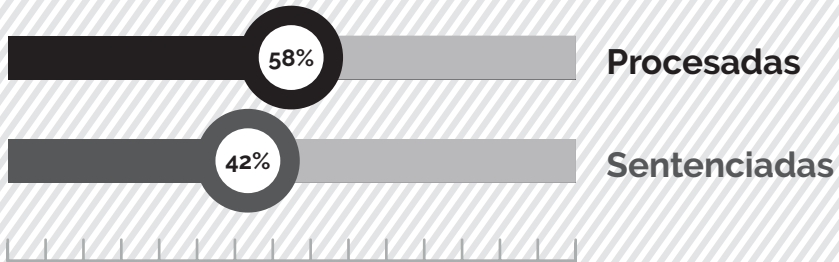
Las mujeres acusadas de delitos del Fuero Federal son víctimas de manera desproporcionada del abuso de la prisión preventiva: mientras el 41% de los hombres acusados de delitos del fuero federal están en espera de juicio, esta situación afecta el 58% de las mujeres acusadas de delitos del fuero federal⁵⁵.

⁵⁵ Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, agosto 2018, Comisión Nacional de Seguridad

Gráfico

11

Situación jurídica de las mujeres en el fuero federal

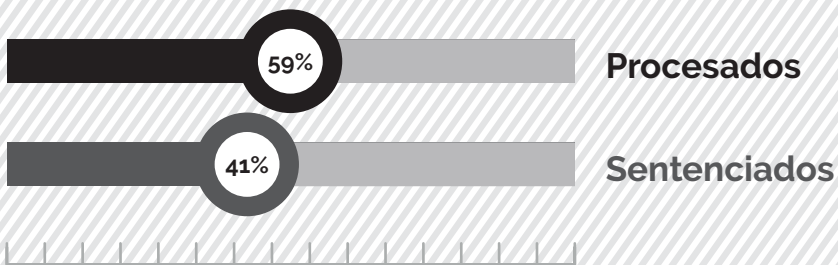


Realizado por Asilegal con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, agosto 2018

Gráfico

12

Situación jurídica de los hombres en el fuero federal



Realizado por Asilegal con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, agosto 2018

A través de una serie de entrevistas realizadas en Baja California, se ha logrado identificar una serie de patrones existentes en casi todos los casos, entre los cuales se encuentra la dispersión geográfica como causa principal de la dilación prolongada de estos procesos penales. Las mujeres entrevistadas fueron detenidas en Cancún, Puebla, el estado de México, Guanajuato o Veracruz; todas fueron trasladadas a Baja California, pero sus coacusados se encuentran en diversas entidades federativas. A su vez, el juez responsable de su caso está en Tamaulipas, Puebla o Veracruz, así como sus defensores públicos.

Me detuvieron en Oaxaca, me arraigaron 80 días en la Ciudad de México, luego me llevaron a Mexicali, pero mi defensor y el juez están en Tamaulipas. Tengo muchos coacusados, unos están en Morelos, otros en Veracruz.

-TESTIMONIO DE UNA MUJER PRIVADA DE LIBERTAD EN BAJA CALIFORNIA

Esta dispersión geográfica dificulta fuertemente los avances en el proceso, y deja a las mujeres en situación de grave indefensión jurídica que las expone a entornos torturantes y a severas angustias y sufrimientos derivados de la falta de certeza jurídica, por lo que constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, al estar lejos de sus domicilios de origen, se encuentran apartadas de sus familiares y demás redes de apoyo, por lo que sufren de una alienación aún mayor en perjuicio de su salud mental.

Me golpearon en la cabeza y en el estómago, me dieron toques eléctricos en la vagina, me amenazaron con matar a mis hijos si no firmaba unos papeles, no me dejaron leerlos... Estaba embarazada, perdí a mi bebé.

-TESTIMONIO DE UNA MUJER PRIVADA DE LIBERTAD EN BAJA CALIFORNIA

Asimismo, otro de los patrones fue la tortura de que fueron víctimas durante su detención arbitraria. Es menester recordar que en México existe un régimen de excepción aplicable a los casos de delincuencia organizada que justifica la existencia de figuras como el arraigo, misma que además de ser ineficiente resulta violatoria de los derechos humanos y propicia la existencia de espacios sin ley donde la autoridad actúa arbitrariamente y se facilita la obtención de confesiones bajo tortura en un marco de total impunidad.

En un contexto generalizado de violencia machista, la violencia sexual es una de las formas más brutales de tortura, de la cual las mujeres son víctimas de manera desproporcionada. AsiLegal tuvo la oportunidad de entrevistar a 21 mujeres procesadas por delitos del fuero federal. De ellas, 16 describieron diversos actos de tortura física, psicológica y/o sexual por parte de los elementos aprehensores.

Los métodos de tortura incluyeron golpes en diferentes partes del cuerpo, posiciones incómodas prolongadas durante más de veinte horas, de privación de sueño, amenazas de muerte hacia los familiares, obligar a ver otras personas ser torturadas, toques eléctricos en los genitales, violación sexual. Dos de las mujeres entrevistadas estaban embarazadas y perdieron a sus bebés como resultado de la tortura.

La mitad de las mujeres víctimas entrevistadas denunciaron los actos de tortura ante su defensor o ante el juez, sin embargo y a pesar de la obligación de perseguir al delito de tortura de oficio, ningún miembro de las fuerzas armadas o policíacas fue perseguido.

La Guerra contra el Narcotráfico sirvió para legitimar a nivel gubernamental una serie de prácticas ilegales que, desde entonces, han causado perjuicios irreparables a las mujeres privadas de libertad que aún siguen a la espera de una sentencia que defina su situación jurídica. Mientras tanto, y durante todo su proceso, no han dejado de ser víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, atentando directamente contra su integridad física y psicológica, así como contra su dignidad y permanecen, aún inocentes, privadas de la libertad.

III. Orientación sexual, identidad y expresión de género no hegemónica

La permanente situación de discriminación, prejuicio, y desigualdad que existe en México ha construido un entorno hostil y particularmente violento para las personas LGBTI en virtud de su discordancia con una sociedad hetero y cisnormativa dominante que reprime las diversas manifestaciones de orientación sexual y/o identidad de género y, por tanto, las pone en riesgo de ser víctimas de tortura y malos tratos⁵⁶. Esta situación provoca que haya una desconfianza generalizada, así como angustia, ansiedad y miedo

⁵⁶ Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ONU, 2016

con consecuencias negativas psicoemocionales debido a la constante intranquilidad que acarrea la posibilidad -en absoluto remota- de ser víctima de tortura u otros tratos crueles.

El riesgo a ser víctima de estos actos motivados por el odio y la discriminación, así como la vulnerabilidad que envuelve a las personas LGBT en tanto grupo históricamente excluido, adquiere especial relevancia y se potencia cuando se conjunta con otras características y contextos, como son la privación de libertad, la migración, el origen étnico, el trabajo sexual, la defensa de derechos humanos, entre otros. Cada uno de los entornos anteriores ve materializadas violaciones sistemáticas de derechos humanos, en específico de libertad, integridad y seguridad personales, en contra de las personas LGBT.

“

A las lesbianas las tienen separadas de las demás mujeres y tienen prohibido relacionarse con otras compañeras porque si lo hacen, las castigan con quince días de aislamiento

-ENTREVISTA A UNA MUJER PRIVADA DE LIBERTAD EN MEXICALI

”

a. Personas Privadas de Libertad

En el contexto de privación de libertad, la naturaleza propia de la pena⁵⁷ en un país como México, donde los derechos humanos son pasados por alto y las violaciones a la integridad física y psicológica configuran prácticas cotidianas y, por demás, normalizadas, expone a las personas LGBTI a un entorno particularmente torturante en el que, además de negárseles su libre identidad, expresión, de género y orientación, el Estado falla en otorgar medidas de protección de sus derechos, así como a atender sus necesidades específicas⁵⁸. La ausencia de un registro de personas LGBTI en reclusión provoca que se invisibilicen y queden impunes todos aquellos actos perpetrados en su contra, ya sea a manos de las autoridades estatales o de otras personas privadas de libertad, por razón de su orientación sexual y/o identidad de género. En la actualidad, la estadística penitenciaria que realiza la Secretaría de Gobernación no se encuentra desagregada a partir de las lesiones, riñas u homicidios en donde no se evidencia si estuvo implicada una persona LGBT⁵⁹.

⁵⁷ Informe de seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sobre su misión a México: “las personas LGBTI están particularmente expuestas a sufrir torturas y malos tratos en las situaciones de privación de libertad”, párr. 71

⁵⁸ Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Op. Cit

⁵⁹ Los Cuadernos mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional, son emitidos por la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, y cuentan con un capítulo específico de Incidencias, en el cual desagregan datos relativos a instituciones penitenciarias, concepto, número de internos involucrados, heridos y homicidios.

Poder identificar a la población LGBT privada de libertad, permitiría no sólo satisfacer de mejor manera sus necesidades particulares, sino también evitar situaciones que las dejen en riesgo de sufrir tortura y malos tratos pues es sabido, por ejemplo, que las mujeres y hombres trans son más susceptibles a agresiones físicas y sexuales si se les coloca con la población penitenciaria general⁶⁰. Es importante que la información recabada para conocimiento del número de personas LGBTI en reclusión no se use con fines discriminatorios, algo en lo que el Estado mexicano tiene que poner todos sus esfuerzos, pues hasta ahora, en muchos Centros Penitenciarios se separa a las personas LGBT, bajo criterios estigmatizantes y prejuiciosos, con el objetivo de tenerlas aisladas y excluidas del resto de la población carcelaria, de manera que se les impide el acceso a actividades y demás servicios en igualdad de circunstancias respecto del resto. Poner a las personas LGBTI en un régimen de segregación total constituye una violación a la prohibición de la tortura y malos tratos⁶¹.

b. Homicidios por prejuicio

La ausencia de un registro de esta población no sólo afecta y se ve reflejada en el ámbito de los centros penitenciarios, sino también en otros contextos como son los homicidios. La información con que se cuenta actualmente es resultado, en su mayoría, de notas periodísticas y de estudios realizados por diversas organizaciones de la sociedad civil que se han dado a la tarea de visibilizar la violencia contra personas LGBT, sin embargo, y como resultado del subregistro y la discriminación, a nivel gubernamental no han existido acciones concretas para investigar los casos de homicidio ni sancionar efectivamente a los responsables.

En los casos de homicidios en contra de personas LGBT, se observan investigaciones parciales, llenas de prejuicios y estigmas⁶², así como una total indisposición de llevar a los responsables ante la justicia. El contexto general de impunidad que permea en las instituciones mexicanas impide la obtención de justicia y reparación a las víctimas⁶³, pues las autoridades no cumplen sus obligaciones de diligencia debida de combatir, prevenir y remediar las agresiones⁶⁴, además de que se vuelve particularmente difícil sancionar a los responsables en los casos en que son los mismos agentes estatales los perpetradores.

60 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. A/HRC/19/41. 17 de noviembre de 2011. Párr. 34

61 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos degradantes. A/HRC/31/57. 5 de enero de 2016. Párr. 35

62 CIDH. Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América. Op. Cit. Párr.483

63 Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns en su misión a México. 28 de abril de 2014. A/HRC/26/36/Add.1 Párr. 87

64 Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 5 de enero de 2016. Doc. A/HRC/31/57. Párr. 57

Uno de los elementos que caracteriza a los homicidios contra esta población, es la clara intención de infringir daños físicos y psicológicos, así como dolor y sufrimiento en las víctimas, motivados por odio y prejuicios que constituyen tratos crueles inhumanos o degradantes, además de ser actos cometidos con terrible brutalidad⁶⁵.

Del 2015 al 2017, Veracruz fue la entidad federativa con mayor número de homicidios reportados en contra de personas LGBT con 22 casos, le sigue el Estado de México con 15, Quintana Roo con 15 y Chihuahua con 14 casos⁶⁶.

Además, en muchos de los casos que se reportan al público sobre homicidios de personas LGBT, no se reconoce la identidad de las personas, pues se alude a las víctimas como “hombres vestidos de mujer” o con “costumbres afeminadas”, así como también se minimizan los actos violentos realizados a través del uso de calificativos como “crímenes pasionales” o incluso reaccionarios⁶⁷.

c. Migración

En los contextos de movilidad humana, una constante es la discriminación que sufren las personas LGBT, tanto en sus países de origen, como en los de destino. En muchos casos, las razones que impulsan el traslado son la violencia, persecución y hostigamiento de que son víctimas, por lo que se configuran desplazamientos forzados en tanto única vía para proteger su vida, integridad y libertad⁶⁸.

A consecuencia de la falta de un registro de personas migrantes adecuado, existe una escasa documentación sobre el número de personas LGBTI que llegan a México, ya sea como país de tránsito o de destino, lo cual presenta un gran obstáculo para poder atender sus necesidades, así como otorgarles la debida protección contra actos de tortura y malos tratos. En el ámbito migratorio, las personas se encuentran particularmente vulnerables a actos de violencia, amenazas y secuestros por parte de grupos delictivos organizados⁶⁹, pero cuando dicha condición se intersecta con la orientación sexual y/o identidad de género, el riesgo de ser una víctima de violencia es mucho mayor.

La situación de discriminación, que se conjunta con la calidad de migrante, provoca que muchas personas LGBT vivan en condiciones precarias cuando se establecen en México, ya sea de mane-

⁶⁵ En el 2014, Edgar Sosa Meyemberg, un profesor gay y activista de los derechos reproductivos en México, fue encontrado muerto con claros signos de tortura y el cráneo destrozado por un objeto contundente. Fuente: CIDH. Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América. OAS/Ser.L/V/II/rev. 12 noviembre 2015. Párr. 352

⁶⁶ Redacción Letra S, Reportan 202 asesinatos de la integrantes de comunidad LGBT en últimos tres años, Letra S, 17 de mayo del 2017, Consultado el 5 de junio del 2017 en: <http://www.letraese.org.mx/reportan-202-asesinatos-de-integrantes-decomunidad-lgbt-enultimos-tres-anos/>

⁶⁷ Letra Ese. Crímenes de Odio por Homofobia: un concepto en construcción, p. 34

⁶⁸ Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual A.C. Cárreaga G. (Coord). Migración LGBT a la Ciudad de México. Diagnóstico y principales desafíos. Noviembre, 2015, p. 18

⁶⁹ Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A/HRC/31/57. 5 de enero de 2016. También, Letra Ese. Crímenes de Odio por Homofobia: un concepto en construcción, p. 62.

ra transitoria o permanente, ya sea de manera independiente o dentro de los centros de detención migratoria⁷⁰. Las mujeres Transgénero migrantes muchas veces encuentran dificultades para obtener un documento de identificación que reconozca su identidad de género⁷¹, situación que construye un obstáculo para el pleno ejercicio de sus derechos, sobre todo en relación con los sectores laborales, educativos y de salud. Es por ello, y derivado de la marginación socioeconómica, que muchos se ven obligados a laborar bajo la informalidad⁷², así como a alojarse en espacios bajo condiciones de hacinamiento o en zonas urbanas que las exponen a mayores riesgos⁷³.

d. Trabajo Sexual

Otra de las prácticas que se llevan a cabo, como parte de la amplia gama de tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes, tienen como víctima a las(os) trabajadoras(es) sexuales. Como resultado de un contexto social de discriminación y exclusión en perjuicio de las personas LGBT, muchas mujeres trans se ven limitadas a acceder a oportunidades laborales idóneas que les permitan tener solvencia e independencia económica, lo que las inclina a dedicarse al trabajo sexual. Lo cierto es que, independientemente de las razones por las que se encuentran desempeñando trabajo sexual, esta actividad las expone a un mayor riesgo de sufrir violencia, tortura y malos tratos⁷⁴ pues las condiciones laborales, por lo general, no son seguras ni salubres, sobre todo derivado de la carencia de una regulación adecuada con un enfoque de derechos humanos que proteja a las y los trabajadores sexuales.

El hostigamiento y los malos tratos en su perjuicio, que se encuentran siempre presentes en el desempeño de su ocupación, tienen en muchas ocasiones el objetivo de obligar a trabajadores sexuales a abandonar determinados lugares y desincentivarlos de reunirse en ellos. Además, en los casos en donde existe un acto de violencia e incluso un homicidio contra una persona LGBT trabajador(a) sexual, existe un índice muchísimo menor de obtención de verdad y justicia en estos casos, pues no solo no existe empatía social hacia estos casos y son vistos como una forma de “limpieza social”⁷⁵; sino que además las autoridades de justicia desincentivan las investigaciones con prejuicios y estereotipos.

⁷⁰ El Relator Especial ha sostenido que las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero que son privadas de su libertad corren un riesgo particular de sufrir torturas y malos tratos en contextos de detención de inmigrantes. Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A/HRC/31/57. 5 de enero de 2016. Párr. 34

⁷¹ Asilegal. Informe sobre la situación de Derechos Humanos de las personas LGBTI en México. Presentado ante la CIDH para el 163 periodo extraordinario de sesiones. P. 21

⁷² En un estudio realizado por Letra Ese sobre homicidios contra personas LGBTI se dio a conocer que de los migrantes asesinados en México, dos eran mujeres trans y uno era hombre homosexual, y todos eran trabajadores sexuales. En, Letra Ese. Crímenes de Odio por Homofobia: un concepto en construcción.

⁷³ Asilegal. Informe sobre la situación de Derechos Humanos de las personas LGBTI en México. Op. Cit. p. 22

⁷⁴ En un informe presentado por Letra S sobre un seguimiento realizado a notas periodísticas de homicidios a personas LGBTI, resultó que de las 203 notas de 2013 a 2017 que incluían información sobre la ocupación de las víctimas, 41 se dedicaban al trabajo sexual. En, Letra S, Violencia, impunidad y prejuicios. Asesinatos de personas LGBTTTT en México 2013-2017. Mayo de 2018

⁷⁵ CIDH. Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América. OAS/Ser.L/V/II.rev. 12 noviembre 2015. Párr. 29. trabajador

Aunado a lo anterior, la extorsión en el medio es una práctica cotidiana; a las y los trabajadores sexuales en muchas ocasiones se les obliga a pagar por el uso de piso⁷⁶. Las mujeres trans que desempeñan trabajo sexual son las más expuestas a la violencia homicida, pues su mayor visibilidad pública las sitúa en la mira de ataques por parte de autoridades e individuos (muchas veces los mismos clientes)⁷⁷.

e. Terapias y tratamientos reparativos

Es relevante hacer mención de otra de las materializaciones de la discriminación y violencia que sufre la comunidad LGBTI en México: las llamadas “terapias de conversión” o “terapias reparativas”. Estas siguen siendo ejercidas por diversas organizaciones⁷⁸ en un intento de cambiar la orientación sexual y/o identidad de género de las personas para transformarlas de conformidad con una sociedad hetero y cisnormativa regida a partir de estereotipos. Estos mecanismos tienen por objeto reprimir la manera en que las personas viven y expresan su sexualidad, configurando un tipo de violencia con claros menoscabos a la dignidad e integridad personal que constituyen tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Los esfuerzos por “curar” a las personas LGBTI se presentan también dentro del sector salud nacional y son un claro obstáculo al pleno ejercicio de su derecho a la salud e integridad personal. Al respecto, en un estudio realizado por la Fundación Arcoíris sobre el acceso a la salud de las personas LGBTI, se encontró que el 21.21% de los entrevistados fue obligado al menos alguna vez a tomar tratamientos relacionados con su orientación sexual o identidad de género⁷⁹.

Además de las mencionadas terapias, muchas veces se les somete a evaluaciones psiquiátricas, procedimientos hormonales y de esterilización, así como intervenciones quirúrgicas, todas involuntarias, que ocasionan dolores y sufrimiento físico y psicológicos que equivale a tortura y malos tratos⁸⁰ en tanto actos que transgreden los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad personal, a la dignidad y a la igualdad y no discriminación.

⁷⁶ Letra Ee. Crímenes de Odio por Homofobia: un concepto en construcción. Op. Cit, p. 37

⁷⁷ Idem, p.80

⁷⁸ Exodus Global Alliance, una organización de origen estadounidense con alcance en México, así como la Clínica Venser en Jalisco, son uno de los ejemplos de grupos conformados para el propósito de conversión de las personas LGBTI. Ver, Letra S. Terapias Tóxicas, por Leonardo Bastida Aguilar. En línea: <http://letraee.jornada.com.mx/2018/10/31/terapiastoxicas-7600.html>

⁷⁹ Fundación Arcoíris. Atención a personas LGBTI en México, la condición en algunos estados del centro del país. Coord. Gloria Careaga Pérez. México 2016. p.42)

⁸⁰ Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A/HRC/31/57. 5 de enero de 2016, párr. 48



3.

RECOMENDACIONES

PROCEDIMIENTO ABREVIADO

1. Que el Estado mexicano asegure la ausencia de coacción al momento de proponer la tramitación del procedimiento abreviado a los imputados e imputadas. En este sentido, las autoridades jurisdiccionales deberán de manera privada asegurarse que la persona conoce las consecuencias y que es verdaderamente su voluntad aceptarlo.
2. Que se garantice la reducción de la pena propuesta por el Ministerio Público, de manera que no se pueda obtener la aceptación de los hechos por parte de la o el imputado para posteriormente otorgarle la sentencia con la pena privativa de libertad original
3. Que se prevea un recurso jurídico específico para las personas que hayan sido coaccionadas a aceptar el procedimiento abreviado que permita reinstaurar el proceso penal y sancione a las o los responsables.

ANÁLISIS DE RIESGO

1. El Estado mexicano deberá garantizar que se dejen de aplicar de manera inmediata los estudios de personalidad a las y los privados de libertad.
2. EL gobierno deberá impulsar una política penitenciaria que privilegie las medidas no privativas de libertad y otorgue, cuando se cumplan los requisitos legales, los beneficios de preliberación sin restricción alguna que atente contra la dignidad y la libertad personal de los sujetos

DERECHO A LA SALUD

1. México deberá eliminar cualquier obstáculo legislativo o de otro tipo en específico, todos aquellos lineamientos sobre afiliación y operación del sector salud que los excluyen del goce y disfrute de dicho derecho.
2. Sancionar a cualquier autoridad que se niegue a otorgar la atención médica necesaria a las personas privadas de libertad
3. Coordinar a todas las autoridades para que se realicen convenios específicos y vinculantes sobre otorgamiento de servicios de salud dentro de los centros penitenciarios.

4. Que se otorgue la atención especializada que las mujeres requieren dentro de los Centros de Reinserción Social y que se les garantice el acceso a un ginecólogo que se encuentre disponible en todo momento.

ENCIERRO

1. Hacer públicos los lineamientos y estándares bajo los cuales se otorgan las acreditaciones ante la Asociación Americana de Correccionales (ACA)
2. Establecer políticas penitenciarias que equilibren la seguridad y el desarrollo de actividades dentro de los centros penitenciarios para eliminar la situación de encierro.

MUJERES EN PRISIÓN PREVENTIVA DE LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

1. Hacer una revisión de los casos de mujeres que, derivado de los arrestos masivos realizados durante esa época, se encuentran aún en prisión preventiva, de manera que se prioricen los casos y agilicen las instancias jurisdiccionales para otorgar una sentencia a la brevedad.
2. Asegurar que las autoridades judiciales no tomen en cuenta las confesiones ni demás pruebas obtenidas bajo tortura en sus procedimientos, así como garantizar que reciban la atención médica y psicológica necesaria que como víctimas les corresponde.
3. Realizar las diligencias necesarias para concentrar las causas penales y eliminar la dispersión geográfica que ha alentado tanto su proceso.
4. Otorgar debida reparación a las víctimas de tortura

DIVERSIDAD SEXUAL

1. Crear un registro que permita saber el número de personas LGBT en reclusión.
2. El Estado mexicano debe realizar investigaciones imparciales y libres de prejuicios para llevar a los responsables ante los tribunales, así como asegurar las sanciones correspondientes.

- 
3. Llevar a cabo un registro oficial de los homicidios perpetrados en contra de las personas LGBT.
 4. Que el Estado mexicano cree un registro de las personas LGBT que transitan o se establecen en el país, así como que les otorgue un documento de identificación donde se reconozca su identidad de género.
 5. Garantizar que el desarrollo del trabajo sexual se dé bajo condiciones salubres y de seguridad para las y los trabajadores sexuales LGBT. Esto implica una obligación para legislar sobre la materia y regular las condiciones de este trabajo en protección de los derechos de los sujetos.
 6. Asegurar que existan oportunidades laborales libres de discriminación para las mujeres trans, con ingresos suficientes y condiciones dignas de trabajo.
 7. El Estado deberá prohibir y penar jurídicamente las prácticas que tengan como fin “convertir” a las personas LGBT, tanto en las instituciones privadas como públicas.
 8. Sancionar a los trabajadores de las instituciones de salud, públicas y privadas, que pretendan otorgar medicamentos, cirugías, esterilizaciones y demás tratamientos involuntarios en contra de las personas LGBT.



GRACIAS

DIRECTORIO

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).

Dirección General

José Luis Gutiérrez Román

Coordinación Administrativa

Luis Díaz Carmona

Asistente de Dirección

Milton Martínez Molina

Asistentes Administrativos

Luciana Contreras Feliciano

Alfredo Medina Hernández

Área de Contabilidad

Norma Guadalupe García García

Área de Comunicación

Daniel Islas Espinoza (Coordinador)

Área de Diseño

Dulce María Laguna Hernández

Área de Investigación

Adriana Aguilar Arias (Coordinadora)

Área de Incidencia Internacional

Verónica Garzón Bonetti (Coordinadora)

Área de Educación

Daffne Ortega Martínez (Coordinadora)

Área Jurídica

Layla Almaraz Olivares (Coordinadora)

Alfredo Alexander Utrera Dimas

CONTACTO

Dirección: Pitágoras 920, col. Del Valle, delegación Benito Juárez, CP. 03100, Ciudad de México.

Teléfonos: +52 (55) 5687 8759 | 5639 6755

Página: asilegal.org.mx

Redes sociales: **Twitter:** @AsiLegal_df **Facebook:** ASILEGAL | **Vimeo:** ASILEGAL

SHADOW REPORT

TORTURE IN MEXICO:

A structural element of the
justice system

SHADOW REPORT

TORTURE IN MEXICO:

A structural element of the justice system

Coordinator

Mtro. José Luis Gutiérrez Román
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.
(AsiLegal)

Research

Verónica Garzón Bonetti
Adriana Aguilar Arias

English translation by

Verónica Garzón Bonetti
Layla Almaraz Olivares

Editorial Design

Dulce María Laguna Hernández.

We authorize the partial or total reproduction of the written content of this publication if the author is cited and with a non-profit basis.

The document can be checked and downloaded in:
www.asilegal.org.mx

D.R. 2019 Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal)
Pitágoras 920, Colonia del Valle,
Delegación Benito Juárez, CP. 03100, Ciudad de México.

Made and printed in México.

Acknowledgments:

The Shadow Report for the UN Committee Against Torture is the result of a collective effort of all AsiLegal staff. We want to thank the following organizations and persons for their valuable contributions, comments and information: United States Agency for International Development (USAID), and all of the persons deprived of liberty who shared their testimonies with us.

This report was made possible thanks to the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The content of this report is the responsibility of Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. and does not necessarily reflect the point of view of USAID or the US government.

CONTENTS

1. INTRODUCTION

2. ASPECTS TO STUDY OVER TORTURE IN MEXICO

I. Abbreviated Process

II. People deprived of their liberty

- a. Risk Analysis
- b. Right to Health
- c. Confinement as a way to fight self-governance and insecurity in penitentiaries
- d. Women in pre-trial detention from the War Against Drugs

III. Sexual Orientation, identity and non-hegemonic gender expression

- a. LGBT persons deprived of their liberty
- b. Homicides by prejudice
- c. Migration
- d. Sexual Labour
- e. Therapies and reparative treatment

3. RECOMMENDATIONS



1.

INTRODUCTION

1. INTRODUCTION

Legal Assistance for Human Rights (Asistencia Legal por los Derechos Humanos) is a civil society organization whose main objective is the promotion and defense of people's human rights, especially those who find themselves in a particular state of vulnerability. Particularly, Asilegal works with individuals deprived of their liberty intersected the following lines of action: gender perspective, interculturality and sexual diversity.

This alternative report is sent for the consideration of the UN Committee Against Torture under the terms of the 7th periodical examination of the Mexican State in the 66th session held on April 23rd and May 17th of 2019.

As a result of the field work made by Asilegal in several regions of the Mexican Republic, information regarding torture and other cruel, inhuman or degrading treatment in the different social and institutional contexts has been compiled. This information shows the systematic violation of human rights characterized always by prejudice, stereotypes, discrimination and, naturally, by impunity. The document accounts for testimonies received directly from the people to whom we give legal aid and counseling during the interviews, we make in order to make visible their situation as well as to achieve that the State finally take specific measures to guarantee an adequate and appropriate prevention, investigation and sanction of torture.



2.

**ASPECTS TO STUDY
OVER TORTURE IN
MEXICO**

2. ASPECTS TO STUDY OVER TORTURE IN MEXICO

I. Abbreviated Process

In the age of massive incarceration, overcrowded prisons and bad prison conditions, the abbreviated trial¹ represents another obstacle in the access to justice for people in conflict with the law. This figure was introduced by the new Accusatory Criminal Justice System (2008), contemplated in Article 201 of the National Code of Criminal Procedures and has the peculiarity of condemning the accused person to a shorter sentence if, and only if, he or she admits the full responsibility for the crime he or she is charged for.

As implied by its name, the abbreviated trial is a form of anticipated termination of the process, having as its main goal the depressurization of the criminal justice system through shorter processes. Therefore, the system has privileged the anticipated terminations in a way that many people don't even reach the stage of oral trial where, in theory, they would get the opportunity to defend themselves against the Public Ministry's accusation.

A clear, and alarming example regarding the implementation of the abbreviated process is that in the State of Baja California alone, since the beginning of the Accusatory Criminal Justice System until December of 2018, the Courts have dictated 8,254 resolutions, from which 8,005 were resolved under abbreviated process; this means that 96.9% of the cases ended without reaching trial. The aforementioned data shows a clear preference for the anticipated termination as well as for the evasion of cases reaching trial under the argument of judicial economy and the respect of the right to a fair and speedy trial. However, the abbreviated process has been used, since its implementation, as another space in which torture and degrading treatment find their materialization.

¹ In Spanish: "procedimiento abreviado"

Graphic

1

Baja California.

Number of sentences dictated since the implementation of the Accusatory Criminal Justice System until 2018

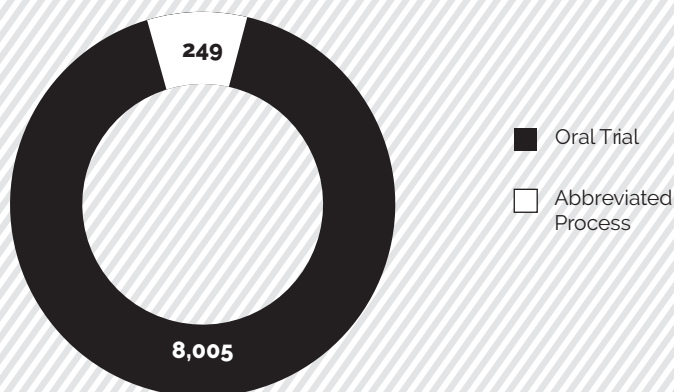


Chart designed by AsiLegal with data obtained from the Transparency Unit of the Judiciary Branch of Baja California, in a request for public information N. 00086719, Official Document 0308/UT/MXL/2019, February 13th, 2019

The abbreviated trial presents a form of cruel, inhuman and degrading treatment, in part because its consequences affect, in a greater way, people under a particular state of vulnerability either by gender, sexual orientation or gender identity, poverty², ethnicity, not having a good legal defense³, or not knowing how the system works. This type of trial is being used as a way to lighten the workload of the criminal justice system, proposing to the accused a reduction of the length of the prison sentence (which are excessively long in Mexico) in exchange for abandoning their human rights, and particularly their right to a fair trial.

As a result of the interviews made in Social Reinsertion Centers (CERESO for its acronym in Spanish), people whose process was carried out this way⁴ were at all times unaware of the consequences and, without further explanation from their defenders, were pressured into accepting under the assertion that it was the most suitable way to solve the case. We even knew of some cases of persons who were promised a reduced sentence in exchange for accepting their guilt, but where condemned to the normal sentence.

² 63% of the accused under the Accusatory Criminal Justice System has a monthly income under \$4,500 Mexican pesos, according to data from the Statistics Direction of the Presidency of the Superior Justice Tribunal of Mexico City, with information of the Opinion Poll of Users of the Accusatory Criminal Justice System 2016.

³ According to the National Survey of People Deprived of their Liberty 2016 (ENPOL for its acronym in Spanish), 59.2% of convicted people had only a public defender. Regarding defenders, only 29.1 % presented evidence to prove someone's innocence, this could explain why the satisfaction levels related with public defenders is only 30%.

⁴ 6 persons in Mexicali, 5 in Oaxaca and Chiapas, and 6 in Hidalgo.

They told me that if I signed and accepted I was guilty, they would give me only four years and eight months instead of seven. I signed and all, but in the end, they did give me the seven years

-TESTIMONY OF A WOMAN DEPRIVED OF HER LIBERTY IN THE STATE OF BAJA CALIFORNIA,

This is how a person is coerced into confessing guilt⁵ and is threatened with a greater sentence of prison if he or she chooses not to accept. The difference in the punishment is what makes this method a coercive one, since the accepted punishment would not be admitted under other circumstances; in addition to the fact that such a punishment should only be given after a trial in which the person had the opportunity to defend himself against the Public Ministry, under equal circumstances. Thus, the decision made by the accused of accepting the procedure, excludes the application of essential procedural principles, like the contradictory principle or the presumption of innocence, which should reign over every criminal process. The conviction, therefore, is the result of mere pieces of evidence which have not yet been presented, let alone discussed, in court. Under the new Criminal Justice System, such pieces of evidence do not constitute -yet- evidence per se, in addition to the fact that they cannot be later refuted or even questioned.

The acts of the Mexican authorities constitute a form of psychological torture where the main goal is to push people into making a decision that deprives them of a fair trial. The person is put through a context of grave anguish and suffering⁶ with actions intended to suppress their psychic resistance and force them to plead guilty⁷. Like any other classical form of torture, a person is threatened and obligated in a sphere of justice administration that awards punishments without a direct adjudication.

Furthermore, one of the factors that motivate people into accepting the abbreviated process is related to the structural deficiencies prevailing in the Mexican justice system, i.e. the delay of the criminal processes. This problem has caused a generalized lack of compliance with the legal term dates, causing people to wait for a sentence -almost always under preventive prison- for many years; therefore, the accused accept their responsibility for the crime in order to accelerate the process.

⁵ According to data from the ENPOL 2016, of the population deprived of its Liberty, el 41.9% is in prison for accepting having committed the crime.

⁶ Cf. *Maritza Urrutia v. Guatemala*. Merits, Reparations and Costs. Judgement of November 27, 2003, Serie C, No. 103, Par. 94

Under

⁷ *Idem*. Parr. 93

I regret not having accepted the abbreviated process when my public defender proposed it to me because fighting for my innocence will take longer. Several girls have already gone out and I am still here waiting for my hearing. I wish I had pleaded guilty because I would already be outside with my son

- WOMAN DEPRIVED OF HER LIBERTY IN TIJUANA

Under this type of trial, the Public Ministry is free from its normal duty of proving the guilt of the accused person, thus violating the obligation of the States to act with due diligence in criminal investigations. The authorities then, save themselves from proving, beyond any reasonable doubt (as a standard of proof), that the accused is indeed guilty.

The main reason for the existence of a trial before previously established, impartial and independent Courts (as stated in the Constitution), is to safeguard the rights of all people in conflict with the law and to guarantee a process based on rules that are equally applicable to everyone. The introduction of the abbreviated trial, per se, is not completely at fault. The problem arises in countries in which the State institutions are structurally corrupted and unable to carry out their duties, when it cannot be guaranteed a safe space where the accused can evaluate the advantages and disadvantages in a coercion-free environment, as well as the fact that in many occasions the Public Ministry agents and the public defenders make deals between them without consulting the person. The incorrect implementation of this new process is what is causing irreparable harm to people. Under judicial economy justifications, speed in the justice administration and the benefits of having a shorter sentence, the accused person is coerced into explicitly giving up their right to an oral trial and to the protection of the judicial safeguards that come with it, implying people's exposure to potentially torturing spaces.

II. People deprived of their liberty

a. Risk analysis

With the implementation of the National Law of Criminal Enforcement (Ley Nacional de Ejecución Penal), several sentence reductions were introduced so that people deprived of their liberty can walk free from the penitentiary centers earlier if they fulfill the legal requirements. The anticipated liberty and the conditioned liberty are two of such benefits with

which, having completed 50% of the conviction -for the conditioned- or 70% for the anticipated- the person can be out. In both cases, the requirements established in Articles 137 and 141, besides the time, are: a) first time having a condemnatory sentence; b) that the liberation does not present an objective and reasonable risk for the victim, the offended, the witnesses or the society; c) having behaved well during imprisonment; d) having complied with the Activities Program; e) having payed the legal reparation imposed as well as the fine; and f) not be subjected to another criminal process with pre-trial detention.

From the aforementioned requirements, the one that requires further analysis is the one related to the risk that the person might present with his/her release. While being true that from the writing of the Article there is a need for the risk to be “objective and reasonable”, understood as the existence of evidence that proves irrefutably a threat to the victim or witness, the reality is that those principles are hardly enforced and the decision of whether there is a risk or not is left to the judicial’s will, which is most times defined by stigma and prejudices that hinder the release of the people, violating their right to personal liberty and social reinsercion.

Any liberty-deprivation act requires explicit limits in its enforcement, as well as a justification based on the principles of reasonability, objectivity, necessity and proportionality, which are grounded on the principle of minimal intervention. It’s the last one under which personal liberty acquires a higher significance. In spite of existing a deprivation of liberty conviction, it is always subordinated to the respect of dignity and human rights. Otherwise, it implies torture and other cruel, inhuman and degrading treatment.

When objectivity and reasonability are eliminated in the risk assessment, the door to the already-exceeded criteria of dangerousness of a person is once again opened and the deprivation of liberty is justified under preventive purposes such as recidivism or the social repercussions, which have been condemned by the Interamerican Commission of Human Rights as clear violations to the pro personae principle and, therefore, are contrary to Article 7.3 of the American Convention on Human Rights regarding the prohibition to be subjected to arbitrary detention or imprisonment⁸, constituting cruel, inhuman and degrading treatment⁹.

⁸ Cf. IACHR. Report on the Use of Pretrial Detention in the Americas. December 30th, 2013, par. 144

⁹ Also, *Gangaram Panday Vs. Surinam*. Merits, Reparations and Costs. Judgment of January 21 1994, par. 47; *Yvon Neptune Vs. Haiti*. Merits, Reparations and Costs. Judgment of May 6 2008, par. 98; and *J. Vs. Perú*. Preliminary Exceptions, Merits, Reparations and Costs. Judgment of November 27 2013, par. 158

In the particular case of women, the importance of penitentiary benefits not only has a relevant role to boost their social reinsertion through an anticipated release that will help them regain their contact with family and other support networks especially when they are mothers and were separated from their children as a result of the incarceration- but also to avoid keeping them a longer time in prison, since the abandon and social uprooting they suffer only perpetrates and reproduces the structural exclusion that prevails outside, due to the fact that they are victims of a grave criminalization and stigmatization as a consequence of the stereotypes that revolve around them and tend to intensify after they have to live their lives carrying the heavy burden of prison. The Mexican tribunals have no differentiated approach that allows women to access a justice system free of gender prejudices; the refusal to grant penitentiary benefits based on discretionary and subjective criteria only encourages their permanence in torturing structures- as prisons mostly are¹⁰.

Considering that, on the one hand, there's no evidence showing that the policies that restrict the right to personal liberty have a real incidence in the decrease of criminality and violence, or solve the problem of insecurity¹¹; and, on the other hand, that most women deprived of their liberty do not represent a risk towards society and their incarceration only challenges their social reinsertion¹², it is necessary that the Mexican State, meeting its international obligations, apply with greater rigor the criteria of necessity, proportionality and reasonability in the infliction of penalties¹³, so that imprisonment works only as a last resort and the alternative or non-custodial sentences be favored.

Likewise, the large margin of discretion that is left to the judicial authorities leads to a violation of the legal certainty principle raising cruel, degrading and inhuman treatment, since the person finds him/herself in a state of defenselessness against a subjective and freedom-limiting ruling.

¹⁰ See, Inter-American Court of Human Rights, *Espinoza González Vs. Perú*. Preliminary Exceptions, Merits, Reparations and Costs. Judgment of November 20, 2014, par. 7.

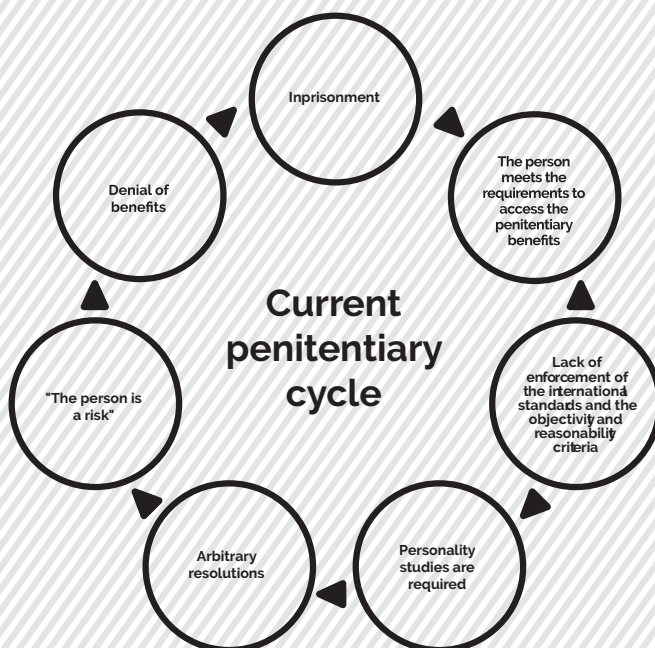
¹¹ Cf. IACHR, Report on the use of pretrial detention in the Americas. par. 100.

¹² General Assembly, Resolution 65/229 of November 21, 2010.

¹³ IHCR, Report on the use of pretrial detention in the Americas. par. 216. Also, Violence, Children and Organized Crime, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 40/15, November 11, 2015, par. 481.

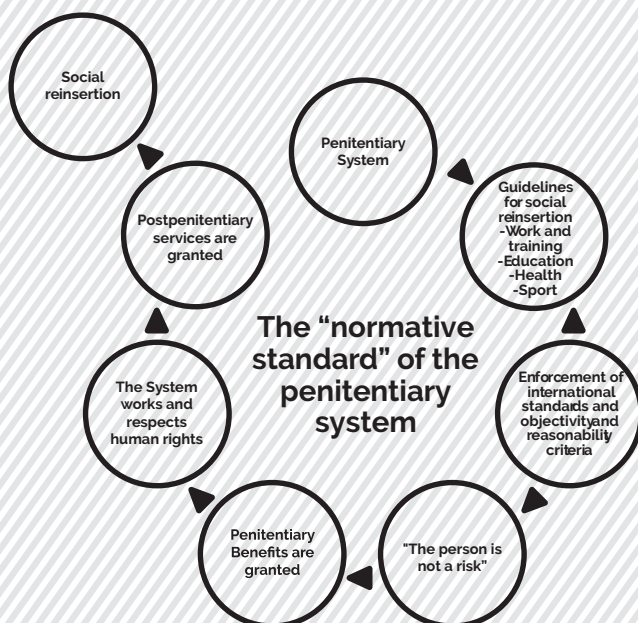
Graphic

2



Graphic

3



The omission to attend International Law, as well as proportionality, reasonability and necessity principles in the imposition of penalties constitute cruel, inhuman and degrading treatment that cause a status of special vulnerability in detriment of the dignity of people deprived of their liberty. Needless to mention that many people do not even know about the existence of such benefits¹⁴ in spite of being an obligation of the State to inform and notify the prison population about its rights and other circumstances related to their conviction.

Moreover, personality studies are still being applied as requirements to access penitentiary benefits¹⁵, pretending to prove the existence or non-existence of the risk. Such studies have been condemned in various occasions by the IACHR and even by the Mexican tribunals¹⁶ for being pseudoscientific studies that aim to determine the social dangerousness of people in penitentiary centers to keep them out of the “good persons” group and use it to legitimize the judicial decisions¹⁷. These studies constitute bad treatment, for matching a penitentiary system that aims for the readaptation and regeneration of the individuals, considering them deviant and anti-social subjects who require a “normalization” treatment; criteria beyond harmful to the rights of personal integrity and human dignity

“

The lawyer didn't say anything about benefits, I found out by some inmates here. I went to the legal office to ask and they told me that I would not get no benefits until I got the studies

-INTERVIEW WITH A MAN DEPRIVED OF HIS LIBERTY IN BAJA CALIFORNIA, MEXICO.

”

By no favoring the non-custodial sentences, the individuals are being subjected to contexts that are, in themselves, torturing and the probabilities of suffering from torture and other cruel, inhuman and degrading treatment are even hi-

¹⁴ Of the 78 interviewed individuals in the Center of Mexicali, 42 manifest not knowing about the benefits.

¹⁵ In Oaxaca, information has been received that in many cases the benefits have been denied based on the outcome of the studies. Likewise, some cases in Mexicali report that the authorities ask for the studies as a requirement to request the hearing for granting the benefits.

¹⁶ Tesis: 1a. CCXXII/2016 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Septiembre de 2016. P. 504.

¹⁷ Cf. IACHR. Report on the Situation of Human Rights in Mexico. OEA/Ser.L/II.100, Septiembre 24, 1998, par. 272 y 277

gher when they find themselves under the care of the State in places that are unable to guarantee a dignified life. It is well known that the prison conditions in Mexico are far from meeting the international standards regarding respect to human rights. Accordingly, the State has the duty to safeguard the citizen's right to not be prevented from accessing the conditions that guarantee a life with dignity¹⁸, as well as to take the necessary measures to achieve the progressive effectiveness of the recognized rights¹⁹.

Thus, if the legislation foresees scenarios that favor the individual in a greater way regarding the right to personal freedom, it is the judges duty to foster and enhance the granting of the benefits that will allow people to make effective their full social reinsercion and, as part of the obligation to take all the necessary measures, the State must eliminate any other obstacle that prevents people to exercise those rights; obstacles that, alone, constitute ill-treatment in detriment of persons deprived of their liberty.

b. Right to health

One of the main aspects related to the protection of personal integrity of individuals -as an obligation of the State to take the needed measures to prevent acts of torture and other cruel, inhuman and degrading treatment- is the right to health. In the national legislation this right is contained in Article 4 of the Constitution and, in relation with imprisoned population, in Articles 9-II and X, as well as 77 of the National Law of Criminal Enforcement.

People deprived of their liberty have a special status of vulnerability as a consequence of the separation and isolation that they suffer as a natural result of the penalty. In prison, the population has no protection or additional services except those given by the penitentiary institution and, just as the rest of the general conditions, these are insufficient and precarious²⁰. Thus, this group has been excluded from the health services as they cannot access effective mechanisms that cover their health needs under equal circumstances compared to other individuals or social groups²¹.

18 Interamerican Court of Human Rights. *Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay*, Judgment of March 29, 2006, serie C, No. 146. Par. 153

19 Article 2.1 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights

20 The National Diagnostic of Penitentiary Supervision, NDPS (*Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria*) 2017, showed that at national level there are severe deficiencies in the health services as well as in the material and hygiene conditions of prisons.

21 WHO. *Exclusion in Health in Latin America and the Caribbean*. Serie No. 1. Also *Interamerican Court of Human Rights. De la Cruz Flores Vs. Perú*. Merits, Reparations and Costs. Judgement of November 18, 2004, par. 124; and *y Fleury and others Vs. Haiti*. Merits and Reparations. Judgment of November 23rd, 2011, par. 84.

The exclusion is the result, among other causes, of the absence of adequate coordination between authorities and institutions, since historically, the penitentiary centers have been left as the only responsible for granting health services to the imprisoned population, leaving the Health Secretariat -who is entrusted to the health sector at national level- free of any obligation based on the following arguments.

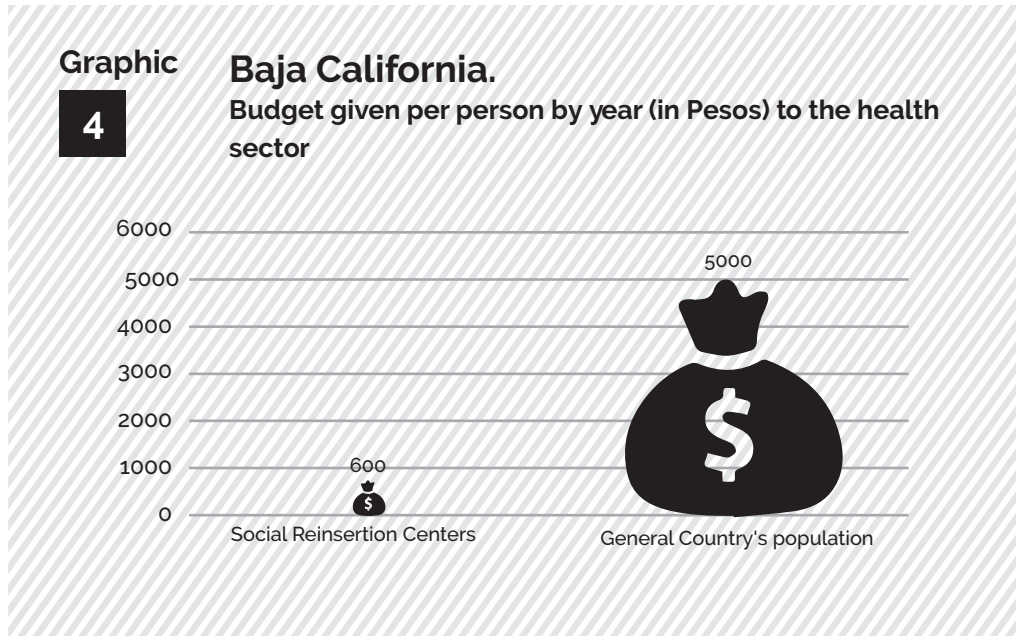


Chart made by AsiLegal with data obtained from the Public Securityt Ministry in a request for public information N. 00014819

The General Health Law (Ley General de Salud), in its Article 77 Bis 1, establishes the right of every Mexican to be incorporated into the health system regardless of their social status and it is an obligation of the State to grant the services without discrimination. On the other hand, Article 77 Bis 3 from the same law requires that in order to be a beneficiary of the Social Health Security System (Sistema de Protección Social en Salud) also known as Popular Insurance (Seguro Popular), people must not be beneficiaries of the social security institutions nor have any other mechanism of social health welfare²².

²² This regime is applicable to people subject to a labor relation/contract

Mexican authorities have interpreted that the health service provided by the penitentiaries is indeed a type of “social health welfare mechanism”, thus the people deprived of their liberty cannot benefit from the Popular Insurance according to Article 77 Bis 3.

This interpretation of the meaning of “other social health welfare mechanism”, as well as the restriction on affiliation, was embodied in the Manual of Affiliation and Operation of the Popular Insurance (Manual de Afiliación y Operación del Seguro Popular):

“The affiliation to the System does not apply to interns of penitentiary centers (CEFERESOS, CERESOS, detention centers and penitentiaries) [...]

According to the federal and local legislation that regulates the operation of the detention centers and Centers of Social Readaptation, they must have a medical and surgical service which allows solving the problems presented, foreseeing such norms, the attention of inmates in the medical units closer to the penitentiary centers, in severe cases”²³.

Likewise, the new Guidelines of Affiliation and Operation of the Social Health Security System, published in the Official Journal of the Federation on May 8th 2018, establish that the head of the affiliated household should be changed if he or she is deprived of liberty, with the possibility that when freedom is recovered, [he or she] “can request the reactivation as beneficiary”²⁴. The aforementioned guidelines are illegal, unconstitutional and unconventional as they do not comply with the State’s duties of guaranteeing the exercise of an economic and social fundamental right such as the right to health.

Thus, people deprived of their liberty have been explicitly expelled from the health protection framework that is given to the rest of the population based on an explicitly discriminatory interpretation of the law,²⁵ embodied in a non-binding document, with no legal force, and in violation of human rights. This situation happens regardless of existing rules established in the General Health Law about attending first and foremost the health of vulnerable groups (Article 25)²⁶, which are binding and obligatory, joined with the constitutional safeguards and the international normativity in this area.

²³ National Commission of Social Protection in Health. Manual of Affiliation and Operation, p. 16. On line: <http://seguropopular.gob.mx/images/Contenidos/informacion/MANUAL%20DE%20AFILIACION%20Y%20OPERACION.pdf>

²⁴ General Office of Affiliation and Operation (2018), p. 83. Available in: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/384970/Gu_a_Gu_a_de_Afiliaci_n.pdf

²⁵ Interamerican Court of Human Rights. Juridical Condition and Rights of Undocumented Migrants. Advisory Opinion OC-18/03 of September 17, 2003. Serie A No. 18, Par. 103

²⁶ Article 25.- According to the priorities if the National Health System, it Will be guaranteed the quantitative and qualitative extension of the health services, preferably to vulnerable groups.

Therefore, individuals deprived of their liberty find themselves in a gray area of unprotection where, on the one hand, the Health Secretariat has excused its involvement under the argument that it is not its duty and, on the other hand, the Penitentiary System has failed to give even the first level attention that the law requires²⁷.

Absence of an adequate access to health services inside penitentiary centers as the result of the explicit refusal of the authorities, constitutes a direct violation to the non-discrimination principle, which is fundamental not only to protect human rights but also to interpret and apply the Convention Against Torture²⁸. The discriminatory treatment against these people represent cruel, inhuman and degrading treatment, since it affects the full exercise of their rights, specifically, the right to health as one of the bases of personal integrity and intimately related to human dignity.

The medic is a veterinary. A few years ago, an inmate died, she had cancer and was not attended, the cancer advanced and when they released her it was already too late, it had invaded everything inside; they only released her so she could die, they released her exactly 8 days before dying

--TESTIMONY OF A WOMAN DEPRIVED OF HER LIBERTY IN HIDALGO, MEXICO

The right to health protection requires positive actions from authorities, since depending on their doings and omissions rests the efficiency on which the right is guaranteed²⁹ and its effectiveness demands the enforcement of the elements of availability, accessibility, acceptability and quality required by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights³⁰, as it must grant the existence of adequate establishments, goods and services so all people can reach them under an equality and nondiscrimination framework.

Furthermore, a health service in prison must be founded on the principle of equivalence³¹, that is, all public policies on health in penitentiaries must be integrated and compatible with the national health system to guarantee a service under comparable conditions to that granted to the rest of society, with special attention to vulnerable groups or those who are in a least favorable socioeconomical status.

²⁷ The lack of Audit in the granting of the health service by the penitentiaries has caused it to be surpassed; it does not have the material nor human resources, so the care given is extremely deficient.

²⁸ Cfr. CAT. General Comment No. 2. Parr. 20.

²⁹ National Commission Of Human Rights. General Recommendation No. 15 regarding the Right to the Protection of Health. April 23, 2009.

³⁰ General Comment No. 14 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, par. 12

³¹ Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. R (98) 7 Concerning the Ethical and Organizational Aspects of Health Care in Prison (Apr. 8, 1998), par. 10

It is in discrimination that torture, and ill-treatment find an obstacle-free path, as it is perpetrated as a dehumanizing practice, and in an easier and unpunished way since the victim belongs to a devaluated social group. Discrimination, thus, works as a form of justification of torture inside jails, considering that due to criminalization and stereotypes that revolve around people deprived of their liberty, it is considered that they deserve of their situation and suffering, which is a direct attack against their dignity and, in consequence, a cruel and inhuman treatment.

Incarceration, in and for itself, causes negative impacts on the individuals; however, it affects most some groups of population, particularly women. The psycho-emotional consequences that the reigning cruel and inhuman treatment causes is, on the one hand, the abandonment and, on the other, the acceptance and normalization of the punishment as result of the internalization of the stereotypes and stigma by the women themselves. The Committee Against Torture has marked that gender is a fundamental factor in the presence of acts of torture because woman conditions are combined with other characteristics that put them at risk of suffering from torture and ill-treatment;³² that is the reason why discrimination in the access to a health system affects women in a greater way. Since most policies and health services inside prisons are designed for men³³, the specific needs of women are systematically ignored and the differentiated medical attention is left out completely, which subjects them to a series of ill-treatments³⁴ that echo in the deterioration of their health conditions and undermine their personal integrity.

“

I got pregnant last year, and they would not let me go to a hospital for a check-up. When they let me out it was too late. I was already advanced, I had 6 months. I knew I was pregnant from the beginning, but they didn't give me attention here. It was until the seventh month when I became ill, I had fever and only then they did let me out. I always complained about my stomach hurting but they only gave me medicine for pressure and such.

-INTERVIEW WITH A WOMAN DEPRIVED OF HER LIBERTY IN HIDALGO, MEXICO.

”

32 Cf. CAT. General Comment No. 2. Par. 22

33 Report of the Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment. A/HRC/31/57. January 5, 2016, par. 15

34 Cf. CAT. General Comment No. 3. Par. 26

We have information, gathered from a series of interviews on prisons conditions, specifically regarding the health sector in the Centers of Social Reinsertion of Oaxaca, Chiapas, Hidalgo and Baja California³⁵. We have identified several patterns in the health services delivery by the authorities. Many of the interviewed people did not have medical afflictions before entering the Centers or, in some cases, they entered with direct afflictions from the torture suffered during detention, which were not appropriately treated.

In Hidalgo for example, at the moment of their detention, 33 women were victims of insults, humiliations and threats; 46 were pushed, scourged and beaten; 6 were electrocuted, drowned and/or suffocated; and 8 were undressed and sexually molested.

In Chiapas and Oaxaca, from the 202 interviewed people, 59 were threatened, humiliated and insulted; 55 were victims of beatings, scourging and pushing; and 10 suffered from electrocution, suffocation and/or drowning.

The refusal to guarantee the right to health appears from the moment the person is detained, not only because it is a victim of torture -a clear attack against personal integrity- but also because many detainees are not promptly presented to a doctor to certify their health status. From the interviewed individuals, in Hidalgo 47 were not attended by a doctor after being presented to the Public Ministry Agency, and in Oaxaca and Chiapas 37 people allege having suffered from the same omission. This provokes grave implications in the health status of people, who, once entering the Penitentiary Center, are not adequately attended due to the structural deficiencies present on the inside.

³⁵ In Hidalgo 113 people were interviewed on May 2018. In Baja California 78 people were interviewed in the Social Reinsertion Center of Mexicali, 50 men and 28 women in October 2018. In Chiapas and Oaxaca the interviews were on September and October of 2016 in 11 Centers, 3 in Chiapas and 8 in Oaxaca to a total of 202 people, from which 44 were women and 158 were men distributed as follows: 25 in El Amate, 17 in Comitán, 44 in San Cristóbal de las Casas, 17 in Tanivet, 19 in Huajuapán, 12 in Juchitán, 13 in Juquila, 14 in Miahuatlán, 10 in Pochutla, 14 in Tehuantepec y 17 in Tlaxiaco.

Graphic

5

Hidalgo.

Women deprived of their liberty who suffered torture and ill-treatment during detention

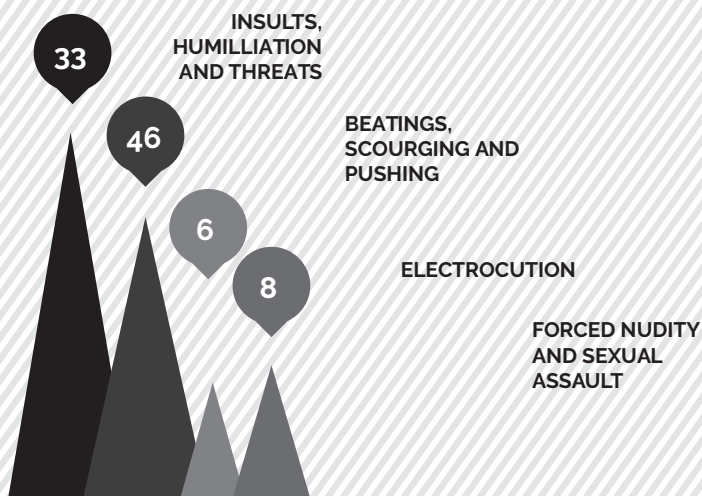


Chart made by AsiLegal with data obtained from interviews to 113 women

Graphic

6

Oaxaca and Chiapas.

People deprived of their liberty who suffered torture and ill-treatment during detention

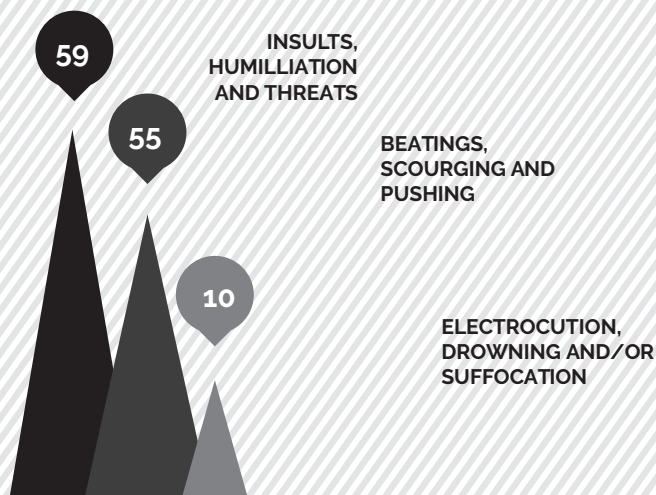


Chart made by AsiLegal with information obtained from interviews to 202 people

The number of persons deprived of their liberty who suffer from some medical affliction and do not receive the necessary care is enormous. In Chiapas and Oaxaca, from the 202 persons that were interviewed, 77 suffer from some chronic illness and 57 denounced either not having received any kind of treatment or one that it is insufficient. In Mexicali, 39 have some sickness and 29 say they have had bad care or none at all. In Hidalgo, from the 113 women interviewed, 70 have some chronic health problem and 31 show inconformity with the service given³⁶ (either for the bad quality or for the lack of doctors and medicine).

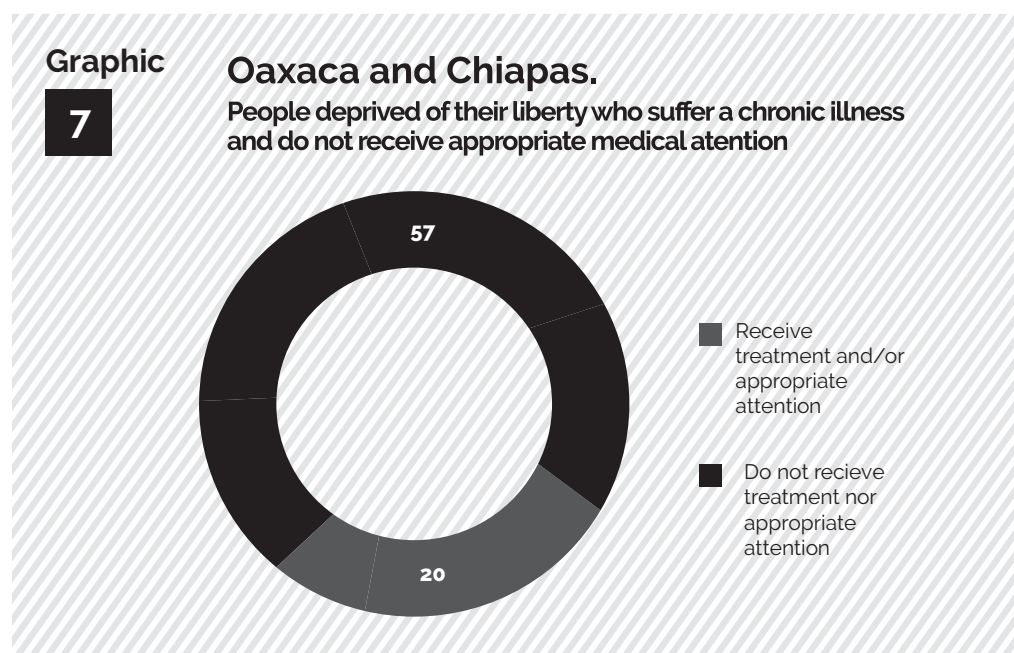


Chart created by AsiLegal with data obtained from the interviews to 77 people deprived of their Liberty who suffer from a chronic health problem

³⁶ A woman deprived of her liberty in Mexicali said that “the only thing the dentist does is pull out teeth; when a tooth hurts, he only extracts it. We are all toothless”

Graphic

8

Hidalgo.

People deprived of their liberty who suffer a chronic illness and do not receive appropriate medical attention

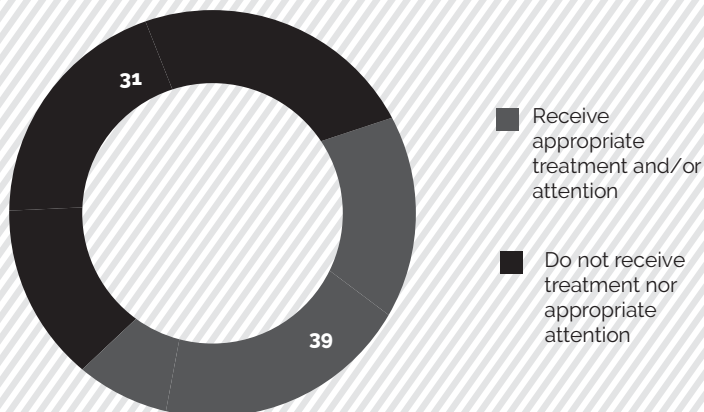


Chart created by AsiLegal with data obtained from the interviews to 70 women deprived of their Liberty who suffer from a chronic health problem

Graphic

9

Mexicali.

People deprived of their liberty who suffer a chronic illness and do not receive appropriate medical

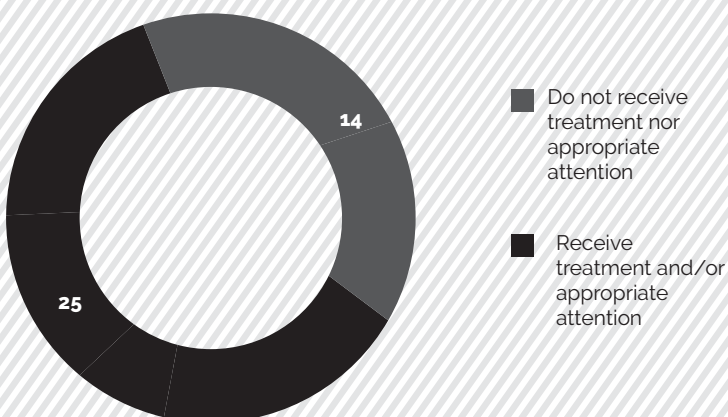


Chart created by AsiLegal with data obtained from the interviews to 39 people deprived of their Liberty who suffer from a chronic health problema

Likewise, information has been received over multiple structural failures inside the Centers³⁷. For example, there is no access to certain medication or the person him or herself or the family on the outside, must pay for them. Regarding specialized attention for women, in the Centers where there is a gynecologist, he/she is not available most of the time and the wait for an appointment is much extended.

For all the aforementioned reasons, the Mexican State, by denying the access to health for people deprived of their liberty, infringes personal integrity under discriminatory³⁸ criteria, violating the right to equality which is inseparable from the essential individual dignity³⁹, in detriment of a specific social group, leaving it in a situation of double and special vulnerability. People deprived of their liberty in Mexico are subjected to suffering and cruel, inhuman and degrading treatment for as long as their penalty lasts, thus must they stand severe pain and chronic discomfort without ever having a response by the authorities.

c. Confinement as a way of fighting self-governance and insecurity in penitentiaries

While it is true that security is an essential element for obtaining dignified living conditions for the people in prison, if it becomes the only element taken into account, a high risk of promoting and implementing confinement measures is taken, as well as limiting the development of necessary activities for the full exercise of human rights for the persons deprived of their liberty like the right to social reinsertion⁴⁰. These measures, joint with the precarious prison conditions under which the individuals are prevented from accessing a life with dignity, constitute cruel, inhuman and degrading treatment.

According to the Interamerican Commission of Human Rights, a greater risk exists of infringing dignity and human rights of the people deprived of their liberty when the feeling of insecurity increases and causes more political pressure and from the media too, to implement repressive measures which produce an erosion of the prohibition of torture⁴¹.

37 A very special case registered in Mexicali, for there is only one doctor to whom one can visit with a ballot requesting an appointment. The problem is that only one ballot is given per month, applicable to all areas and activities, that means that is the person wants to go to the doctor and at the same time want to register to a class, he or she must choose only one and wait for next month to ask for the other, with a new ballot

38 Cfr. CAT. General Comment No. 2. Par. 20

39 Interamerican Court of Human Rights. Juridical Condition and Rights of Undocumented Migrants. Advisory Opinion OC-18/03 of September 17, 2003. Serie A No. 18. Par. 100.

40 According to the National Law of Criminal Enforcement, social reinsertion is the "restitution of the full exercise of liberties after having completed a punishment or security measure under the respect of human rights". The restitution of the full exercise of liberties must be understood not only as the return of the person to the context in which he or she was before, but also as the State's duty to give the necessary tools for the person to be completely reinserted in society with better opportunities and able to develop a life project in compliance with the law. Asilegal; The situation of the right for women to social reinsertion under the scope of the National Law of Criminal Enforcement. Comparative Analysis in four entities; 2018; p.7. Online: <https://asilegal.org.mx/wpcontent/uploads/2019/01/INFORME_PROEQUIDAD_Asilegal_dic_2018.pdf>

41 IACHR. Report on the Human Rights of Persons Deprived of their Liberty in the Americas; OEA/Ser.L/V/II. Doc. 64; December 31, 2011; par. 364 (d) Online: <<http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf>>

Graphic

10

Rate of homicides per 100 thousand inhabitants 2012-2017

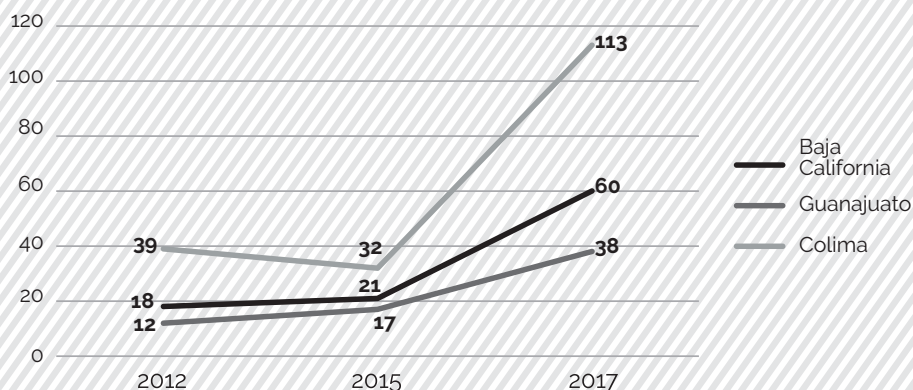


Chart made by AsiLegal with data obtained from Geography of violence. The homicides increased in some parts of Mexico and decrease in others. ¿Which new zones show violence in the country? El Universal. Data Unit; September 4, 2018.

It has been identified that confinement as a penitentiary policy can be found in many states of the Republic, however, the Penitentiary Centers who have alarming levels of confinement are Baja California, Colima and Guanajuato; as well as all the Federal Penitentiaries⁴².

Baja California, as well as Colima and Guanajuato are states in which the perception of insecurity increased significantly during the 2012-2017 period, due to a process of reconfiguration of the violence resulted from the War Against Drugs. During those years, Baja California raised its homicide rate by 240%. In Colima, the increase of the homicide rate during the same period was of 193%. In Guanajuato, the rate went from 17 homicides for every 100,000 inhabitants in 2015 to 38 in 2017⁴³.

⁴² For the identification of the states where this practice is more frequent, we have analyzed data from the National Diagnostic of Penitentiary Supervision 2017 along with the ENPOL 2016.

⁴³ Geography of violence. The homicides increased in some parts of Mexico and decrease in others. ¿Which new zones show violence in the country? El Universal. Data Unit; September 4, 2018. Online: <<http://interactivo.eluniversal.com.mx/2018/homicidiosgeografia-de-violencia/>>

The growth of violence in those states has had the accordingly result in the organization of their penitentiary systems, where the absolute-confinement policy has been implemented against the people deprived of their liberty. The most severe cases are shown in Baja California and in the Federal Penitentiaries where more than 80% of the persons spend 22 to 24 hours inside their cells⁴⁴.

The special case of Baja California is relevant because before 2002, the prisons had a serious self-governance problem. Under the argument of security, from 2002 until today, Baja California has followed the “super-max” prison model⁴⁵ by developing a high security infrastructure and a complete-confinement policy. The “super-max” model has been implemented in the Federal penitentiaries as well.

A generalized deficiency of the Mexican penitentiary system is the lack of custodial and security staff. According to the National Commission of Human Rights (Comisión Nacional de Derechos Humanos), 83.33% on the Centers at national level don't have enough staff⁴⁶. This is one of the main arguments used by the authorities to justify the confinement and the impossibility to have activities outside the cells.

The reinforcement of security is the consequence of the implementation of the American Correctional Association (ACA) standards. In order to obtain accreditation, the aim is to create maximum security penitentiary structures⁴⁷ to prevent criminal organizations from operating inside the Centers⁴⁸. Moreover, the Interamerican Commission has shown concern for this type of repressive models clearly contrary to all the international standards, for the prioritization of resources goes directly into limiting liberties instead of dignifying and humanizing the penitentiaries⁴⁹.

The following chart displays the states and Centers where the people stay confined almost the entire day. It also demonstrates how the confinement reflects on the inexistence of selfgovernance and the lack of activities. Finally, it shows how many and which Centers are accredited by the ACA.

44 ENPOL. 2016; open data.

45 The ‘super-max’ prisons have a very restrictive detention regime. APT. Balancing security and dignity in prisons: A framework for preventing monitoring. ISBN: 978-1-909521-33-9; 2013; p. 17. Online: <https://www.appt.ch/content/files_res/balancing-security-and-dignities.pdf>

46 Data obtained through the analysis of the DNSP (2017). Online: <http://appweb2.cndh.org.mx/DNSP/Ceresos/p_diagNacional_Resumen.asp>

47 Cf. IACHR. Situation of Human Rights in Mexico. December 31, 2015. Doc. 44/15, par. 344

48 For the accreditation, the Prisons must meet 137 indicators (40 mandatory and 77 nonmandatory). Of the 137 indicators, 41.87% are related to security and only 8.76% are related to “program and activity”. Cf. SEGOB. “Request for Incorporation to the Subprogram: Accreditation (certification) of penitentiary establishments”. Anex III” Online: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189192/Acreditacion_certificacion_establecimientos_penitenciarios_III.pdf>

49 Cf. IACHR. Situation of Human Rights in Mexico. Op. Cit. Par. 345

STATE PENITENTIARY CENTERS	% OF POPULATION HRS OF CONFINEMENT			ACTIVITIES					ACA ACREDI- TATION
	22-24 HRS	19-21 HRS	SELF- GOVER- NANCE	WORK	EDUCATION	SPORT	RELATIONS WITH SOCIETY		
BAJA CALIFORNIA	78.49	6.05							
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL TIJUANA	87.55	2.3	8.09	1.29	6.89	6.82	6.26	Si	
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DE MEXICALI	81.54	9.16	8.15	0.9	6.34	5.39	7.66		
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL "EL HONGO"	81.85	2.74	9.06	6.68	7.28	8.38	6.39	Si	
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL "EL HONGO II"			7.9	7.27	7.86	9.34	7.32		
COLIMA	16.37	11.36						No	
RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN			8.5	5	7.21	6.21	7.09		
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL COLIMA			8.11	5.84	7.03	7.71	6.94		
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DE MANZANILLO			8.72	5.69	7.18	7.07	6.86		
GUANAJUATO	17.48	6.39							
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE IRAPUATO			9.32	6.97	7.11	7.57	8.44	Si	
CENTRO ESTATAL DE REINSECCIÓN SOCIAL DE GUANAJUATO			8.79	2.62	4.35	2.92	7.48	Si	
CENTRO ESTATAL DE REINSECCIÓN SOCIAL DE VALLE DE SANTIAGO			8.87	6.97	7.12	7.32	8.55	Si	
CENTRO ESTATAL DE REINSECCIÓN SOCIAL DE LEÓN			8.97	5.76	7.48	7.74	8.38	Si	
CENTRO ESTATAL DE REINSECCIÓN SOCIAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE			9.22	3.48	8.04	7.2	8.37	Si	
CENTROS FEDERALES	96.26	3.02							
CEFERESO NO. 14 "CPS", GÓMEZ PALACIO, DURANGO			9.59	2.98	5.81	7.93	7.26	Si	
CEFERESO NO. 7 "NOR-NOROESTE", GUADALUPE VICTORIA, DURANGO			8.35	3.55	8.34	7.49	6.99	Si	
CEFERESO NO. 12 "CPS", GUANAJUATO			9.99	4.98	9.58	4.99	5.21	Si	
CEFERESO NO. 1 "ALTIPLANO", ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDOMEX			10	4.91	6.8	6.85	5.95	Si	
CEFEREPSI, MORELOS			9.84	2.57	6.71	7.57	5.99	Si	
CEFERESO NO. 16 "CPS", MORELOS			9.99	3.41	6.65	6.64	6.57	Si	
CEFERESO No. 4 "NOROESTE", NAYARIT	21.44	64.79	9.94	4.87	6.72	3.06	4.42	Si	
CEFERESO No. 2 "OCCIDENTE", EL SALTO, JALISCO			10	6.5	3.6	6.06	4.06	Si	
CEFERESO NO. 13 "CPS", OAXACA	62.36	34.45	10	1.52	3.4	5.59	5.56	Si	
CEFERESO NO. 6 "SURESTE", HUIMANGUILLO, TABASCO			9.94	4.37	7.17	7.05	6.58	Si	
CEFERESO NO 11 "CPS", SONORA	62.31	34.49	9.98	3.05	4	6.07	5.94	Si	
CEFERESO NO. 5 "ORIENTE", VILLA ALDAMA, VERACRUZ	87.19	7.79	9.29	7.15	8.25	3.8	4.83	Si	
CEFERESO NO. 8 "NOR-PONIENTE", GUASAVE, SINALOA			9.62	2.21	7.1	6.66	5.09	Si	
CEFERESO NO. 15 "CPS", TAPACHULA, CHIAPAS	84.76	5.17	9.93	0.68	4.71	5.84	5.41	Si	
CEFERESO NO. 9 "NORTE", CUIDAD JUAREZ, CHIHUAHUA			9.84	3.05	6.25	6.27	6.98	Si	

"SOURCE: Chart made with the sistematization of data by the ENPOL 2016, the National Diagnostic Penitentiary Information 2017, and the document: Request for incorporation to the Subprogram: ""Acreditation (certification) of penitentiaries"".

* The studied penitentiary centers were visited and evaluated by the National Commission for Human Rights in 2017. Each year the Commission makes an evaluation of the Penitentiaries based on their confinement conditions (the scale goes from 0, being the worst conditions, to 10, being the better)."

As it can be observed, the prison population in Baja California spends 22 to 24 hours confined and they have limited access to labor, educational and sport activities. Two of the Centers visited by the National Commission of Human Rights, Mexicali and El Hongo II both have ACA accreditation.

The information can be verified with the findings of the National Mechanism for the Prevention of Torture (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) when it visited Baja California in 2018:

“The people deprived of their liberty are allowed outside their dormitories one hour per week (activity called “yard”); during that time they buy articles from the store, cut their hair, talk on the phone and, occasionally, practice some sport... The interviewed people are discontent with that situation as well as with the lack of activities”⁵⁰

In relation with the activities, the National Mechanism for the Prevention of Torture mentioned that only 4.89% of the population in prison in Baja California have a paid activity, only 26.79% have an educational activity-most times performed inside the cells- and 25.90% do a physical activity or sport⁵¹.

Colima’s Centers are not accredited by ACA. However, almost a third of the population (27.73%) spent 19-24 hours in their cells. According to the National Commission of Human Rights, the state doesn’t have self-governance issues but fails to give work activities for the people deprived of their liberty.

In Guanajuato every Center has been accredited by ACA; almost a fourth of its population spends 19-21 hours in confinement. This state does not have self-governance problems but in three out of the five Centers evaluated, the individuals have no access to work activities.

As it can be seen on the chart, all Federal penitentiaries use excessive confinement as a way to guarantee security. All the Federal Centers, except No.17 “CPS” Michoacán, have been accredited by ACA and don’t have self-governance issues. However, as the rest, there are no activities for the people in order to guarantee their right to reinsertion and a dignified treatment.

The National Mechanism for the Prevention of Torture, relating confinement and lack of activities in Federal Penitentiaries, has manifested:

⁵⁰ National Mechanism for Prevention of Torture. Supervision Report. ISP-5/2018 of Social Reinsertion Centers in the state of Baja California; June 12, 2018; p. 15. Online: <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/5_2018.pdf>
⁵¹ Ibid. P.16

“In the six visited “CPS” Federal Centers it was determined that no paid activities existed, and in five of them situations relating the lack or insufficient personnel for the organization of working, training, educational and physical activities were seen, causing that people deprived of their liberty remain in their cells most of the time. It is worthy of mention that in the CPS Federal Centers (N. 11 in Sonora and N.14 in Durango) the inmates manifested being in their cells 23 hours per day, and that sometimes they do not leave them for the entire day; while on CPS Federal Center N.15 in Chiapas, people stay 22 hours under the same circumstances.⁵²

The excessive confinement and the lack of access to activities which contribute to social reinsertion are violatory actions of the content of article 18 of the Constitution, the National Law of Criminal Enforcement and article 10 of the International Covenant on Civil and Political Rights, for the penitentiary system must be based under the respect of human rights and personal dignity. When those principles are not met, a free path for torture and illtreatment⁵³ is open since the security is being privileged through measures that devalue one of the most vulnerable and excluded minority social groups⁵⁴.

d. Women in pre-trial detention from the War Against Drugs

In 2011, the most violent peak of the War Against Drugs (or War Against the Narco) launched by former president Felipe Calderón, the massive arrests were displayed as attempts to dismantle the Drug Cartels and demonstrate the efficiency of the military strategies deployed by the government against organized crime.

As a result of that policy, many women suffered from mass imprisonment under criminal cases shared with several other accused, and haven't, until today, received a judicial ruling, thus finding themselves deprived of their liberty as a preventive measure. Pre-trial detention has the goal of ensuring the presence of the accused in its process and it cannot last more than two years. However, the abuse of such measure at national level has generated

⁵² National Mechanism for Prevention of Torture. Supervision Report. ISP-5/2018 of Social Reinsertion Centers en the state of Baja California; June 12, 2018; p. 11. Online: <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/5_2018.pdf>

⁵³ Article 18 of the Political Constitution of the United Mexican States.

⁵⁴ Cf. UN. ONUDC. The prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment: a possible strategy for the Republic of Panama; Technical Consultative Opinion ex oficio No. 002/2014; p. 4. Online: <https://www.unodc.org/documents/ropan/Technical_Consultative_Opinions_2014/Opini_on_Consultiva_2014-002.pdf>

that a third of the people deprived of their liberty find themselves under this preventive mechanism.

Women accused of federal crimes are victims of the abuse of pretrial detention in a disproportionate way: While 41% of men accused of federal crimes await their sentence, the same situation affects 58% of women⁵⁵.

Through a series of interviews made in Baja California, a few patterns have been identified in almost all cases, in which geographic dispersion represent one of the main causes for the criminal process excessive delay. The interviewed women were detained in Cancún, Puebla, Estado de México, Guanajuato or Veracruz; all of them were transferred to Baja California, but their co-accused are located in other states of the country. Likewise, the judge responsible for their cases is in Tamaulipas, Puebla or Veracruz, as well as their public defenders.

“

They detained me in a military checkpoint while going back home, I did not have my ID and from that moment on, they have not let me go. I have been waiting for over eight years, without seeing my kids...I just want to know what is going on.

-INTERVIEW WITH A WOMAN DEPRIVED OF HER LIBERTY IN BAJA CALIFORNIA, MEXICO

”

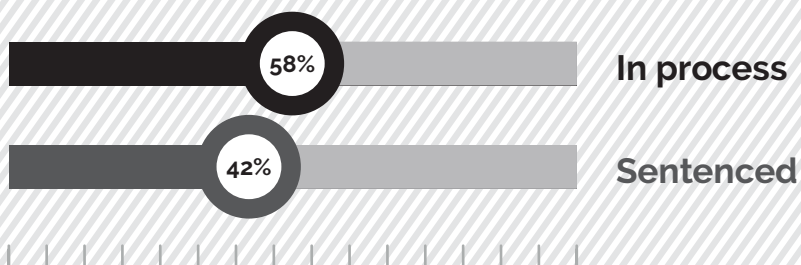
This geographic scattering stops the process to advance and leaves the women in a situation of absolute defenselessness that puts them in torturing environments as well as severe anguish and suffering caused by the lack of legal certainty, constituting cruel, inhuman and degrading treatment. Furthermore, being so far away from their home-states they are separated from their families and other support networks, enduring an even greater alienation in detriment of their mental health.

⁵⁵ Monthly handbook of Statistical Penitentiary Information, August 2018, National Security Commission

Graphic

11

Legal situation of women in the federal jurisdiction

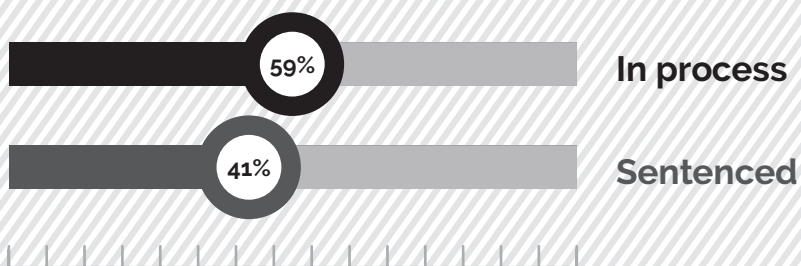


Charts created by AsiLegal with data obtained from the Monthly handbook of Statistical Penitentiary Information, August 2018, National Security Commission

Graphic

12

Legal situation of men in the federal jurisdiction



Charts created by AsiLegal with data obtained from the Monthly handbook of Statistical Penitentiary Information, August 2018, National Security Commission

They arrested me in Oaxaca, they retained me ("arraigar") 80 days in Mexico City, then they sent me to Mexicali, but my defender and judge are both in Tamaulipas. I have many co-accused, some are in Morelos, others in Veracruz. There are no hearings and my defender does not answer the phone

-INTERVIEW WITH A WOMAN DEPRIVED OF HER LIBERTY IN BAJA CALIFORNIA, MEXICO

Another one of the patterns detected was the torture of which they were victims during their arbitrary detention. It is important to recall that Mexico has an exception regime applicable to all cases relating organized crime that justifies the implementation of mechanisms like the "arraigo" (retainment during up to 80 days); in addition to being completely ineffective, such measure violates human rights and propitiates the existence of lawless spaces where the authorities can act arbitrarily and facilitate the obtention of confessions using torture in a framework of total impunity.

In a generalized context of machist violence, sexual violence es one of the most brutal forms of torture, form which women are victims in a disproportionate way. As a result of an interview made to 21 women processed for federal crime, 16 of them described multiple acts of physical, psychological and/or sexual torture committed by the State's agents.

They hit me in the head and in the stomach, they electrocuted me in the vagina and threatened to kill my kids if I did not sign some papers, they would not let me read... I was pregnant, I lost the baby.

-INTERVIEW WITH A WOMAN DEPRIVED OF HER LIBERTY IN BAJA CALIFORNIA, MEXICO

The torture methods included beatings, uncomfortable positions sustained over more than twenty hours, sleep deprivation, death threats towards family members, forcing into watching other people being tortured, electrocution in the genital area and rape. Two of the interviewed women were pregnant and lost their babies as a result of the torture.

Half of the women denounced the acts of torture to the defender or the judge however, no member of the armed forces nor the police was prosecuted, despite the obligation of prosecuting torture *ex officio*.

The War Against Drugs was used to legitimize at government level, a series of illegal practices that, since then, have caused irreparable harm to the women deprived of their liberty who still await a sentence which would settle their situation. Meanwhile, and during all their process, they have been non-stop victims of systematic violations to their human rights, diminishing their physical and psychological integrity as well as their dignity, thus remaining, although innocent, deprived of their liberty.

III. SEXUAL ORIENTATION, IDENTITY AND NONHEGEMONIC GENDER EXPRESSION

The permanent situation of discrimination, prejudice and inequality in Mexico has built a hostile and particularly violent environment for the LGBT people due to their discordance with a dominantly hetero and cisnormative society that oppresses the diverse manifestations of sexual orientation and/or gender identity, thus, putting them at risk of torture and ill-treatment⁵⁶. This situation causes a generalized mistrust, as well as anguish, anxiety and fear with negative psycho-emotional consequences due to the continuous unease that comes with the non-remote possibility of being a victim of torture and other cruel treatment.

The risk of being a victim of these acts motivated by hate and discrimination, as well as the vulnerability that involves the LGBT people, as a historically-excluded group, acquires special relevance and potentiates when pulled together with other personal characteristics and contexts, such as deprivation of liberty, migration, ethnicity, sexual work, human rights defense, and so on. In each of those sceneries systematic human rights violations are materialized, specifically liberty, integrity and personal security against LGBT persons.

⁵⁶ Report of the Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment., UN, 2016

a. People Deprived of their Liberty

In the context of liberty deprivation, the own nature of the penalty⁵⁷ in a country like Mexico, where human rights are overlooked and violations of physical and psychological integrity are normalized practices, exposes LGBT persons to a particularly torturing environment where, besides the denial of their identity, gender expression and orientation, the State fails to grant protection measures as well as attending their specific needs⁵⁸. The absence of a registry of LGBT persons in jail causes the anticivilization and impunity of all violence committed against them, perpetrated either by the authorities or other inmates on account of their sexual orientation and/or gender identity. The penitentiary statistic data made by the Ministry of Government is disaggregated neither by injuries, quarrels nor homicides in which an LGBT person is involved⁵⁹.

“

The lesbians are separated from the rest of the women and have it prohibited to interact with other inmates because if they do it, they are punished with isolation for fifteen days

-INTERVIEW WITH A WOMAN DEPRIVED OF HER LIBERTY IN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA,

”

Identifying LGBT persons in prison would allow not only to satisfy their needs more adequately, but also would help avoiding situations which put them at risk of suffering torture and other ill-treatment for it is known, for example, that trans men and women are more susceptible to physical and sexual aggressions if kept with the rest of the prison population⁶⁰. It is important that information regarding the LGBT persons is not gathered and used for discriminatory aims, something in which the State must focus all efforts, since so far, in many Penitentiary Centers, LGBT persons are being separated under stigmatizing and prejudicial criteria with the goal of keeping them isolated and excluded from the rest of the population and, therefore, preventing them to access under equal conditions to activities and other services as the others. Putting LGBT persons in a segregation regime constitutes a violation to the prohibition of torture and ill-treatment⁶¹.

57 Follow-up Report of the Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment on his mission to México: LGBT people are particularly exposed to suffering torture in situations of liberty deprivation (p. 71)

58 Report of the Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment. Op. Cit.

59 The monthly Handbooks of Statistical Penitentiary Information have a specific chapter of where they desegregate data relating penitentiary institutions, concept, number of interns involved, people hurt and homicides.

60 UN. HRC. Report of the High Commissioner for Human Rights. Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity. A/HRC/19/41. November 17, 2011. Par. 34

61 Report of the Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment. A/HRC/31/57. January 5, 2016. Par. 35

b. Homicides by prejudice

The absence of an appropriate registry of these persons has not only consequences in the penitentiary system, but also in other situations such as the homicidal violence. The information so far gathered is the result of news, stories and follow-up research recovered from the media by multiple civil society organizations that have worked for bringing to the light the violence against LGBT persons, however, and as a result of the lack of data and discrimination, the government has taken no action to investigate the cases of homicide, nor sanctioning the offenders.

In the cases of homicide against LGBT people, partial investigations full of prejudices and stigma⁶² are observed, as well as a complete indisposition to bring the responsible to justice. The general context of impunity that reigns over Mexican institutions prevents the victims to obtain justice and get the reparations they deserve⁶³, since authorities do not meet their due diligence obligations regarding the combat, prevention and remedy of the aggressions⁶⁴, besides the fact that it is particularly difficult to sanction the offenders in the events in which the own State agents are the perpetrators.

One of the elements which characterize the homicides against these persons is the clear intention to inflict physical and psychological damage, as well as pain and suffering on the victims, motivated of course by hate and prejudice that constitute cruel, inhuman and degrading treatment, apart from being acts committed with horrible brutality⁶⁵.

From 2015 to 2017, Veracruz was the state with greater number of homicides reported against LGBT persons with 22 cases, followed by the State of Mexico with 15, Quintana Roo with 15 and Chihuahua with 14⁶⁶.

In addition, in many of the cases reported to the public of LGBT homicides, the identity of the individuals is not recognized, for they are alluded to as “men dressed as women” or with “feminine manners”; also, the violent acts are minimized with the use of terms like “crimes of passion” or even reactionary⁶⁷.

c. Migration

In the contexts of human mobility, a constant discrimination is suffered by the LGBT persons in their countries of origin as well as the destiny ones. In many cases, reasons that motivate the

62 IACHR. Violence against Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Persons in the Americas. OAS/Ser.L/V/II.rev.1. 12 November 2015. Par.483

63 HRC. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary execution, Christof Heyns on his mission to Mexico. April 28, 2014. A/HRC/26/36/Add.1 Par. 87

64 HRC. Report of the Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment. January 5, 2016. Doc. A/HCR/31/57. Par. 57

65 In 2014, Edgar Sosa Meyemberg, a gay professor and reproductive rights activist was found dead with signs of torture and his skull destroyed. Source:

IACHR. Violence against Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Persons in the Americas. OAS/Ser.L/V/II.rev. 12 noviembre 2015. Párr. 352

66 Letra S. 202 murders reported of LGBT individuals in the last three years, Letra S. May 17, 2017, Consulted December 5 2018 in: <http://www.letraese.org.mx/reportan-202asesinatos-de-integrantes-decomunidad-lgbt-en-ultimos-tres-anos/>

67 Letra S. Hate Crimes Committed by Homophobia: A concept in construction, p. 34

movement are violence, persecution and harassment of which they are victims, reason why it is considered a form of forced displacement since fleeing is, the only path to protect their lives, integrity and liberty⁶⁸.

As a result of the lack of a thorough registry of migrants, there is little documentation on the number of LGBT persons that arrive to Mexico, either as a country of origin or destiny, which presents a great obstacle for the adequate attendance of their needs and protection against torture and other ill-treatment. In the migratory sector, the individuals find themselves particularly vulnerable to acts of violence, threats and abductions by organized criminal groups⁶⁹, but when said condition intersects with sexual orientation and/or gender identity, the risk of being a victim is greater.

The situation of discrimination, joint with the migrant condition, forces many LGBT persons to live in precarious conditions when they settle in Mexico, either temporarily or permanently, either independently or under the care of migrant detention centers⁷⁰. Transgender migrant women encounter obstacles to obtain a document of identification that recognizes their gender identity⁷¹ and impedes the full exercise of their rights, especially in relation with labor, education and health sectors. Hence, and as a result of socioeconomical marginalization, many individuals are forced to work under informality conditions⁷² as well as accommodating in overcrowded spaces or in urban areas that put them in riskier situations⁷³.

d. Sex Labor

Another of the many practices carried out as part of the broad spectre of torture and other cruel, inhuman and degrading treatment, have the sex workers as victims. As a result of the discriminatory and excluding social context against LGBT persons, many trans women see their labor opportunities restricted to access ideal working conditions which allow them to have economic independence and solvency, which inclines them into doing sex labor. Regardless of the reasons behind the job performance, this activity puts them in riskier situations of suffering violence, torture and other ill-treatment⁷⁴, since the workplace conditions are generally unsafe and unsanitary, especially because of the absence of an appropriate regulation without an approach on human rights which could help protect sex workers.

68 Rainbow Foundation for the Respect of Sexual Diversity A.C. Cárreaga G. (Coord). LGBT Migration in Mexico City. Diagnose and main challenges. November 2015, p. 18

69 Report of the Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment. A/HRC/31/57. January 5, 2016. También, Letra Ese. Crímenes de Odio por Homofobia: un concepto en construcción, p. 62.

70 The Special Rapporteur has said that LGBT people deprived of their Liberty are at a greater risk of suffering torture in the context of migrant detention. A/HRC/31/57. January 5, 2016. Par. 34

71 Asilegal. Report of the situation of Human Rights of LGBTI people in Mexico. Presented for the 163th session period. P. 21

72 A study made by Letra S about homicides of LGBT persons, shows that form the migrants murdered in Mexico, two were trans women and one a homosexual man, all of them sexual workers. In, Letra Ese. Hate Crimes Committed by Homophobia: A concept in construction.

73 Asilegal. Report of the situation of Human Rights of LGBTI people in Mexico. Presented for the 163th session period. P. 22

74 A study presented by Letra S about a follow-up of news reports of LGBT homicides, shows that from the 203 news from 2013 a 2017 that included information about the occupation of the victims, 41 were sex workers. In, Letra S, Violence, Impunity and prejudice. Assassination of LGBTTT persons in Mexico 2013-2017. May, 2018.

Harassment and ill-treatment committed against them in their daily occupation, have the purpose to force workers into abandoning certain spaces and discourage them to meet there. Besides, in the cases where an act of violence or homicide is perpetrated against an LGBT sex worker, there is a smaller rate of truth and justice procurement, not only because it does not exist any kind of social empathy and acts are seen as a type of “social cleansing”⁷⁵; but also, because the authorities hinder the investigations with their prejudices and stereotypes.

Accordingly, the extortion in this context is an everyday practice; LGBT sexual workers are in many occasions forced to pay for using the space⁷⁶. Trans sexual workers are the most exposed to homicidal violence because their public visibility in the streets places them as a target for authorities and other individuals (sometimes their own clients)⁷⁷.

e. Therapies and reparative treatments

It is duly important to mention another one of the many materializations of the discrimination and violence against the LGBT community in Mexico: the so called “conversion therapies” or “reparative therapies”. These are still being used by many organizations⁷⁸ in an attempt to change the sexual orientation and/or gender identity of individuals to transform them according to the stereotype-ruled hetero and cisnormative society. These mechanisms aim to suppress the way people live and express their sexuality as a form of violence with severe consequences against dignity and personal integrity, therefore constituting torture and other cruel, inhuman and degrading treatment.

The efforts to “cure” LGBT persons are also present in the national health sector and signify a clear obstacle to the plain exercise of the right to health and personal integrity. Hence, a study made by the Rainbow Foundation (Fundación Arcoíris) regarding access to health of LGBT individuals, showed that 21.21% of the interviewed were at least once forced to take a treatment for their sexual orientation and/or gender identity⁷⁹.

⁷⁵ IACHR Violence against Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Persons in the Americas. Op. Cit. Párr. 29.

⁷⁶ Letra Ese. Hate Crimes Committed by Homophobia: A concept in construction. P. 37

⁷⁷ Letra Ese. Hate Crimes Committed by Homophobia: A concept in construction. P.80

⁷⁸ Exodus Global Alliance, an American organization with ramifications in México, as well as the Venser Clinic in Jalisco, are just a few of the examples of groups created with the purpose of converting LGBT persons. See, Letra S. Toxic therapies, by Leonardo Bastida Aguilar. Online: <http://letraese.jornada.com.mx/2018/10/31/terapias-toxicas-7600.html>

⁷⁹ Rainbow Foundation. Attention to LGBT persons in Mexico, the condition of some states in the center of the country. Coord. Gloria Careaga Pérez. México, 2016. p.42.

Besides the aforementioned therapies, many times they are subjected to psychiatric evaluations, hormonal and sterilization procedures, as well as surgical interventions (all involuntary) that cause severe physical and psychological pain and suffering equivalent to torture and ill-treatment,⁷⁹ whilst infringing the rights to the free personal identity, health, personal integrity, dignity and equality and non-discrimination.

⁸⁰ Report of the Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment op. Cit. par. 48

3.

RECOMMENDATIONS

ABBREVIATED PROCESS

1. The Mexican State must ensure a coercive-free proposal of this process. The judicial authorities must make sure, privately, that the accused is aware of the consequences and it's his/her true free will to accept it.
2. The government must guarantee the permanence of the reduced sentenced proposed by the Public Ministry in such a way that there cannot be a further change increasing the penalty or giving the original one when the person has already accepted certain reduction.
3. A judicial mechanism must be implemented in order to allow people who have been coerced into accepting the abbreviated process to appeal and redo the process, as well as sanction the authorities responsible for the violation.

RISK ANALYSIS

1. Mexico must ensure that the personality studies are immediately eliminated.
2. The State must create a penitentiary policy that favors non-custodial penalties and grants, when the requirements are fulfilled, the penitentiary benefits without restrictions that attempt the dignity and personal freedom

RIGHT TO HEALTH

1. The State must eliminate any legislative obstacle, or of any kind, specifically those regarding the general affiliation and operation guidelines of the health sector that exclude people deprived of their liberty from accessing the right to health
2. Sanction any authority that refuses to give medical attention to the people deprived of their liberty
3. Coordinate all authorities so that they sign specific and binding agreements regarding health services inside penitentiaries
4. That specialized medical attention be granted to women in prison, ensuring the access to a gynecologist available at all times.

CONFINEMENT

1. Make public the guidelines and standards for the accreditation of the American Correction Association
2. Establish penitentiary measures that balance security and activity development inside prisons in order to eliminate the extreme confinement

WOMEN IN PRE-TRIAL DETENTION FROM THE WAR AGAINST DRUGS

1. Make a review of all the cases of women that are still under pretrial detention in order to prioritize those cases and speed them up in court.
2. Make sure that the judicial authorities do not take into account the evidence recovered as result of torture, as well as guaranteeing that the victims receive adequate medical and psychological attention
3. Take necessary measures to concentrate the criminal cases and eliminate the geographical dispersion that has slowed the process down
4. Grant the due reparation to the victims of torture

SEXUAL DIVERSITY

1. Create a registry of the LGBT persons in prison
2. The State must investigate impartially and prejudice-free the homicides committed against an LGBT person, as well as sanction the offenders
3. Mexico must have an official registry of the homicides and other acts of violence committed against LGBT persons
4. Create an official registry for the LGBT persons that arrive in the country and guarantee that an official identification document that recognizes their gender identity is given



5. Guarantee that the LGBT sex workers do their jobs in sanitary and safe conditions. That includes a legislation that regulates the conditions for the better protection of the individuals

6. Make sure to grant labor opportunities under the principles of equality and non-discrimination for trans women which ensures sufficient income and dignifies work conditions

7. The State must prohibit and sanction all the practices that tend to “convert” LGBT people, both in private and public institutions

8. Sanction the workers of health institutions, private and public, who give medication, or perform surgeries, sterilizations and other involuntary treatment against LGBT persons.



THANK YOU

DIRECTORY

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).

General Management

José Luis Gutiérrez Román

Administrative Coordination

Luis Díaz Carmona

Management Assistant

Milton Martínez Molina

Administrative Assistants

Luciana Contreras Feliciano

Alfredo Medina Hernández

Accounting Department

Norma Guadalupe García García

Communication Department

Daniel Islas Espinoza (Coordinator)

Design Department

Dulce María Laguna Hernández

Investigation Department

Adriana Aguilar Arias (Coordinator)

International Incidence Department:

Verónica Garzón Bonetti (Coordinator)

Education Department

Daffne Ortega Martínez (Coordinator)

Legal Department

Layla Almaraz Olivares (Coordinator)

Alfredo Alexander Utrera Dimas

CONTACT

Address: Pitágoras 920, col. Del Valle, delegación Benito Juárez, Zip Code. 03100, Mexico City.

Telephone: +52 (55) 5687 8759 | 5639 6755

Web page: asilegal.org.mx

Social Network: **Twitter:** @AsiLegal_df **Facebook:** ASILEGAL | **Vimeo:** ASILEGAL

RAPPORT ALTERNATIF

TORTURE AU MEXIQUE:

Un élément structurel du
système de justice

RAPPORT ALTERNATIF

TORTURE AU MEXIQUE:

Un élément structurel du système de justice.

Coordinateur

Mtro. José Luis Gutiérrez Román
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.
(AsiLegal)

Recherche et rédaction

Verónica Garzón Bonetti
Adriana Aguilar Arias

Traduction française par

María Fernanda Ochoa Chávez
Ana Karen Ochoa Chávez

Edition

Dulce María Laguna Hernández.

La reproduction totale ou partielle du contenu écrit de cette publication est autorisée à condition d'être à but non lucratif et de mentionner la source du document.

Le texte peut être consulté et téléchargé sur:

www.asilegal.org.mx

D.R. 2019 Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal)
Pitágoras 920, Colonia del Valle,
Delegación Benito Juárez, CP. 03100, Ciudad de México.

Imprimé au Mexique.

Remerciements

Le Rapport Alternatif au Comité Contre la Torture de l'ONU est le résultat d'un effort collectif de l'équipe de travail d'ASILEGAL. Nous souhaitons remercier les organisations et personnes suivantes pour leurs précieux apports, commentaires et informations: l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID); ainsi que toutes les personnes privées de liberté qui ont partagé leurs témoignages.

Ce rapport a été possible grâce au soutien des États-Unis, à travers de l'agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Le contenu de ce rapport est la responsabilité d'Assistance Légale pour les Droits Humains A.C. et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis.

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION

2. ASPECTS À ANALYSER SUR LA TORTURE AU MEXIQUE

I. Procédure abrégée

II. Personnes privées de liberté

Analyse du risque

b. Droit à la santé

c. L'enfermement comme méthode pour combattre l'auto-gouvernement et l'insécurité dans les centres pénitentiaires

d. Les femmes oubliées en détention provisoire de la guerre contre le narco

III. Orientation sexuelle ; identité et expression de genre non hégémonique

a. Personnes privées de liberté

b. Crimes de haine contre personnes LGBT

c. Migration et diversité sexuelle

d. Travail sexuel e. Thérapies de conversion et de réorientation sexuelle

3. RECOMMANDATIONS



1.

INTRODUCTION

1. INTRODUCTION

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal ou en français, Assistance Légale pour les Droits Humains) est une organisation de la société civile dont le principal objectif est la promotion et la défense des droits humains des personnes en situation de grande vulnérabilité. En particulier, AsiLegal travaille avec les personnes privées de liberté sous les différentes lignes d'intervention : perspective de genre, interculturalité et diversité sexuelle.

Ce rapport alternatif est envoyé au Comité Contre la Torture à l'occasion du septième examen périodique du Mexique dans le cadre de la 66ème période de sessions qui sera célébrée le 23 avril et le 17 mai 2019. A partir du travail de terrain réalisé par AsiLegal dans différentes régions du territoire mexicain, nous avons obtenu des informations sur la situation de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants dans différents contextes sociaux et institutionnels qui montrent la violation systématique des droits humains des personnes et qui se caractérisent toujours par des préjugés, des stéréotypes, de la discrimination et, évidemment, par l'impunité.

Le document que nous présentons contient des témoignages obtenus directement auprès des personnes auxquelles nous offrons des conseils juridiques au cours d'entretiens menés dans différents centres pénitentiaires, avec l'objectif de visibiliser la situation dans laquelle elles se trouvent et pousser l'Etat mexicain à prendre des mesures concrètes pour garantir la prévention, investigation et sanction des actes de torture.

2.

ASPECTS A ANALYSER SUR LA TORTURE AU MEXIQUE

2. ASPECTS A ANALYSER SUR LA TORTURE AU MEXIQUE

I. Procédure abrégée

A l'époque de l'enfermement massif, de la surpopulation carcérale et des mauvaises conditions de vie en prison, la procédure abrégée représente un obstacle de plus pour l'accès à un procès juste pour les personnes en conflit avec la loi. Cette procédure a été introduite lors de la mise en place du Nouveau Système Pénal Accusatoire (2008), régie par l'article 201 du Code Pénal et a pour particularité de proposer à l'accusé une peine réduite à condition qu'elle reconnaisse sa pleine responsabilité pour les faits qui lui sont reprochés.

Comme son nom l'indique, la procédure abrégée permet de finaliser de manière anticipée le procès pénal, dont l'objectif est de désaturer le système de justice à travers des procès plus courts. Comme conséquence, le système de justice a privilégié les procédures abrégées au point que la grande majorité des personnes imputées ne parviennent pas à l'étape du procès au cours duquel elles auraient en théorie l'opportunité de se défendre contre l'accusation du ministère public.

Un exemple alarmant des abus de la procédure abrégée est que, en Basse Californie, depuis le début de la mise en place du Système Pénal Accusatoire jusqu'à 2018, 8 254 sentences ont été dictées, dont 8 005 par procédure abrégée ; cela signifie que 96,9% des cas ont été résolus sans passer par un procès oral¹. Les chiffres cités reflètent une claire préférence pour les procédures abrégées, sous l'argument de l'économie procédurale et du droit à une justice expéditive. Cependant, les procédures abrégées ont été utilisées, depuis leur mise en place, comme un espace de torture et de mauvais traitements.

¹ Données de la Direction Statistique de la présidence du TSJCDMX disponibles dans: Annuaire statistique et indicateurs des Droits Humains 2016, TSJCDMX, Mexique, 2016, p. 217 y 224.

Graphique

1

Baja California.

Nombre de sentences dictées depuis la mise en place du Nouveau Système Accusatoire Pénal (2008-2018)

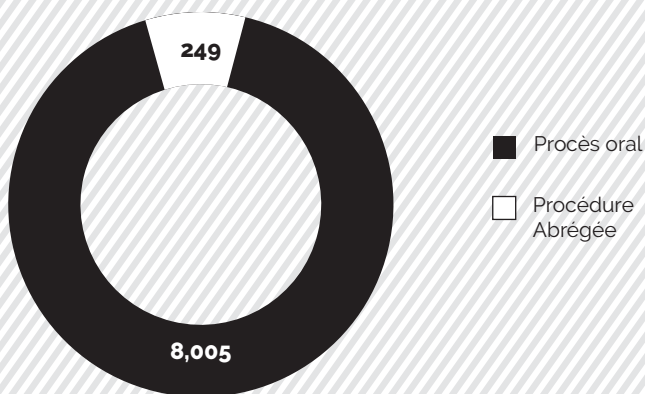


Schéma réalisé par AsiLegal à partir d'information de l'Unité de Transparence du Pouvoir Judiciaire de la Basse Californie, obtenue à la suite d'une requête d'accès à l'information 00086719. Document No. 0308/UT/MXL/2019. 13 février 2019

L'abus de la procédure abrégée provoque une série de traitements cruels, inhumains et dégradants dont les conséquences affectent en particulier les personnes qui se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité de par leur genre, orientation sexuelle, identité de genre, pauvreté, discrimination culturelle (envers les personnes des peuples autochtones)², absence de défense de qualité³ ou méconnaissance du fonctionnement du système de justice, de manière qu'elle est utilisée pour alléger la charge de travail du système de justice aux dépens de la présomption d'innocence et des droits humains des personnes accusées de délits.

Nous avons pu constater lors des entretiens menés dans différents centres pénitentiaires, les personnes jugées en procédure abrégée⁴ n'étaient pas conscientes des conséquences de la procédure et, dans recevoir d'explication par leur avocat, ont été pressionnées afin d'accepter la procédure sous l'argument que cela leur convenait. Nous avons même eu connaissance de cas dans lesquels une personne s'est vu promettre une réduction de peine en échange de l'acceptation de sa responsabilité, mais a été condamnée à la peine complète.

² 63% des personnes inculpées en vertu du nouveau système pénal ont un revenu familial mensuel inférieur à \$ 4 500, Selon les données de la Direction Statistique de la présidence du TSJCDMX avec des informations tirées du sondage d'opinion auprès des utilisateurs du système de procédure pénale accusatoire 2016.

³ Selon données de l'ENPOL 2016, le 59.2% des personnes qui ont été condamnées, ils ont eus uniquement défenseur public. Parmi les défenseurs, juste le 29.1% a présenté tests pour prouver l'innocence, le niveau de satisfaction pour la performance du défenseur n'était donc que de 30%.

⁴ 6 gens à Mexicali, 5 à Oaxaca et Chiapas, et 6 en Hidalgo.

Ils m'ont dit que si je signais et que j'acceptais que j'étais coupable, qu'ils allaient me donner 4 ans et 8 mois au lieu de 7 ans. J'ai tout signé, mais à la fin ils m'ont quand même donné 7 ans.

-TÉMOIGNAGE D'UNE FEMME PRIVÉE DE LIBERTÉ EN BASSE CALIFORNIE

C'est ainsi qu'on fait pression sur les personnes accusées d'un délit pour qu'elles confes-sent⁵ et qu'on les menace d'une sanction si elles refusent. La différence de peine est ce qui constitue l'élément de pression, puisqu'on accepte une sanction réduite sans passer par un jugement qui donne l'occasion de se défendre à égalité face aux chefs d'accusa-tion. De cette manière, la décision prise par l'accusée d'accepter la procédure abrégée l'exclue des principes essentiels de la présomption d'innocence et de contradiction qui devraient primer durant tout le procès. La condamnation découle alors de simples élé-ments probatoires, c'est-à-dire des éléments qui n'ont pas été discutées en audience et donc, selon le Nouveau Système de Justice Pénale, ne constituent pas en soi des preu-ves, et qui de plus ne pourront pas être réfutés ou remis en question postérieurement.

Cette manière d'agir des autorités constitue une forme de torture psychologique par le biais de laquelle on tente de faire pression sur une personne afin qu'elle renonce à son droit à un procès équitable. On soumet cette personne à des situations d'angoisse et de souffrance⁶ au travers d'actes de l'autorité dont l'intention est de supprimer sa ré-sistance psychique et l'obliger à se déclarer coupable⁷. Comme dans une méthode clas-sique de torture, on menace et oblige une personne dans un contexte d'application de la justice qui exerce son pouvoir et applique des sentences sans procédure juste.

De plus, un des facteurs qui pousse les personnes à accepter la procédure abrégée tient aux défauts structurels du système de justice mexicain : la lenteur des procédures pénales. Les délais légaux des procès pénaux ne sont quasiment jamais respectés, de sorte que les personnes qui sont en attente de jugement (presque toujours en prison préventive) doivent patienter pendant de nombreuses années pour recevoir une sentence, ce qui les pousse à se déclarer coupables pour mettre fin à cette autre forme de torture psychique.

⁵ Selon les données de l'ENPOL 2016, sur la population privée de liberté, 41,9% sont en prison pour avoir accepté ou déclaré avoir commis le crime.

⁶ Cfr. Cour IDH. Cas Maritza Urrutia c. Guatemala. Fonds, Réparations et Coûts. Sentence du 27 novembre 2003, Serie C, No. 103, Par. 94

⁷ Cfr. Idem, par. 93

“

Je me repens de n'ai pas acceptée le procédure abrégée quand mon défenseur public l'a proposé parce que se bâtir pour l'innocence est plus difficile. Plusieurs de mes collègues sont déjà partis et je suis encore en attente d'une audience. Je voudrais m'avais déclarée culpable et de cette façon je serai libre avec mon fil.

-FEMME PRIVÉ DE LIBERTÉ À TIJUANA

”

De cette manière, le ministère public se libère de la charge qui lui correspond par nature, celle de prouver la culpabilité de la personne accusée, ce qui provoque une série de violations des obligations des Etats d'agir avec diligence dans les enquêtes pénales, puisque l'Etat évite alors l'effort de prouver, au-delà de tout doute raisonnable (comme standard de preuve) que la personne accusée est effectivement responsable.

La fonction principale de l'existence d'un procès face à des tribunaux établis, impartiaux et indépendants (ainsi définis par la Constitution) est de protéger les droits des personnes en conflit avec la loi pénale et leur assurer un procès basé sur des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. L'introduction de la procédure abrégée, en soi, n'est pas totalement négative ; le problème est que, dans un pays dont les institutions reproduisent de manière systématique des pratiques abusives, il est impossible de garantir un espace sûr dans lequel la personne accusée puisse évaluer les avantages et inconvénients de chaque procédure sans pression, sans parler du fait que le Ministère Public et les avocats commis d'office se mettent souvent d'accord sans prendre en compte la personne accusée. La mise en place défailtante de la procédure abrégée provoque des dégâts irréparables pour les personnes accusées, puisque, sous couvert d'économie de moyens, de célérité dans les procédures judiciaires, et des avantages représentés par la réduction de la peine, on pousse les personnes à renoncer explicitement à un procès oral et aux garanties judiciaires qui vont avec, exposant ainsi les personnes à des espaces potentiellement torturants.

II. Personnes privées de liberté

a. Analyse de risque

Avec l'entrée en vigueur de la Loi Nationale d'Application des Peines, une série de mesures de remise de peines ont été introduites afin que les personnes privées de liberté puisse être libérées de manière anticipée des Centres Pénitentiaires, à condition de remplir certains critères. La liberté conditionnelle et la liberté anticipée sont deux des mesures de

remise de peine grâce auxquels, une fois arrivé à 50% de la sentence – dans le cas de la liberté conditionnelle- ou 70% - dans le cas de la liberté anticipée- la personne condamnée puisse sortir de prison. Dans les deux cas, les critères à remplir établis dans les articles 137 et 141, en plus du pourcentage de la peine accomplie, sont : a) être primodélinquant-e ; b) absence de risque objectif et raisonnable provoqué par la libération de la personne envers la victime, les témoins et la société ; c) avoir fait preuve de bonne conduite durant la peine de prison ; d) avoir respecté le Plan d'Activités ; e) avoir payé la réparation du préjudice et l'amende ; et f) ne pas être soumis à un autre procès pénal pour un délit qui implique passer le procès en prison préventive¹.

Parmi les critères cités, celui du risque représenté par la mise en liberté de la personne nous semble le plus important. S'il est vrai que la rédaction de l'article précise que le risque doit être « objectif et raisonnable » et donc qu'il doit y avoir une preuve réelle de son existence, en réalité ces principes ne sont pas appliqués et la décision est laissée au libre arbitre du juge d'application des peines, laquelle est en général marquée par les préjugés et la stigmatisation et a pour conséquence de limiter au maximum l'octroi des remises de peine, ce qui représente une violation au droit de la personne condamnée à la liberté personnelle et à la réinsertion sociale.

Tout acte de privation de la liberté requiert des limites expresses dans son application, ainsi qu'une justification basée sur les principes de raisonnable, objectivité, nécessité et proportionnalité, lesquels se basent à leur tour sur le principe d'intervention minimale. C'est au regard de ce dernier critère que le droit à la liberté personnelle acquiert une importance particulière, puisque, bien que nous soyons face à une peine de privation de liberté, celle-ci se trouve toujours limitée par le respect de la dignité et des droits humains des personnes, sans cela nous nous trouvons face à des traitements cruels, inhumains et dégradants.

Quand on élimine l'objectivité et le raisonnable dans l'analyse de risque, on ouvre la porte aux critères dépassés de dangerosité des personnes et on justifie la privation de la liberté à des fins de prévention de la récidive ou des répercussions sociales, que la Commission Interaméricaine des Droits Humains a qualifié comme contraires au principe pro personne, et donc à l'article 7.3 de la Convention Américaine des Droits Humains portant sur l'interdiction de soumettre quelqu'un à une détention ou à un enfermement arbitraire⁸, ce qui consiste en un traitement cruel, inhumain ou dégradant⁹.

⁸ Cf. CIDH. Rapport sur l'utilisation de la prison préventive dans les Amériques. 30 décembre 2013, par. 144

⁹ Voir aussi, Cour Interaméricaine des Droits Humains, Affaire Gangaram Panday c. Suriname. Fonds, réparations et coûts. Jugement du 21 Janvier 1994, paragraphe 47; Affaire Yvon Neptune c. Haïti. Fonds, réparations et coûts. Sentence du 6 mai 2008, paragraphe 98; et affaire J. c. Pérou. Objection préliminaire, fonds, réparations et coûts. Sentence du 27 novembre 2013, paragraphe 158.

Dans le cas des femmes, l'importance des remises de peine a à voir non seulement avec la promotion de la réinsertion sociale à travers de libérations anticipées afin qu'elles puissent récupérer le contact avec leur famille et leurs réseaux de soutien – surtout lorsqu'elles sont mères et ont été séparées de leurs enfants suite à leur enfermement – mais aussi à tenter de limiter au maximum la durée de l'enfermement car l'abandon et le déracinement social dont elles souffrent participe à la reproduction de l'exclusion structurelle des femmes dans la société, car elles sont victimes d'une profonde criminalisation et stigmatisation en conséquence des stéréotypes de genre qui s'intensifient lorsqu'elles doivent vivre avec le poids d'avoir été condamnées à une peine de prison. Dans les tribunaux mexicains, il n'existe pas de perspective différenciée qui puisse permettre aux femmes d'accéder à une justice sans préjugés de genre ; en conséquence, le refus d'octroyer des remises de peine basé sur des critères subjectifs et arbitraires provoque l'allongement des durées de peine dans les milieux torturants des prisons¹⁰.

En poursuivant le raisonnement antérieur et en prenant en compte que, d'un côté, il n'y a pas d'éléments qui démontrent que les politiques d'enfermement aient un impact réel sur la diminution de la criminalité et de la violence, ou résolvent les problèmes de sécurité citoyenne;¹¹ et, de l'autre, que de nombreuses femmes privées de liberté ne posent pas de risque pour la société et que leur enfermement rend plus difficile leur réinsertion sociale,¹² il est nécessaire que l'Etat mexicain, de par ses obligations internationales, applique avec plus de rigueur les critères de nécessité, proportionnalité et raisonnable dans l'imposition des sanctions,¹³ de sorte que l'enfermement soit une mesure exceptionnelle et que soient privilégiées les mesures non privatives de liberté.

De la même manière, la grande marge de discrétion laissée au juge provoque une incertitude qui viole le principe de sécurité juridique et correspond donc à un traitement cruel, inhumain et dégradant, puisque la personne est réduite à un état de vulnérabilité face à une décision juridique subjective et qui limite le droit à la liberté personnelle.

¹⁰ Voir Cour Interaméricaine des Droits de l'homme, affaire Espinoza Gonzáles c. Pérou. Objections préliminaires, fond, réparations et dépens. Arrêt du 20 novembre 2014, paragraphe 7.

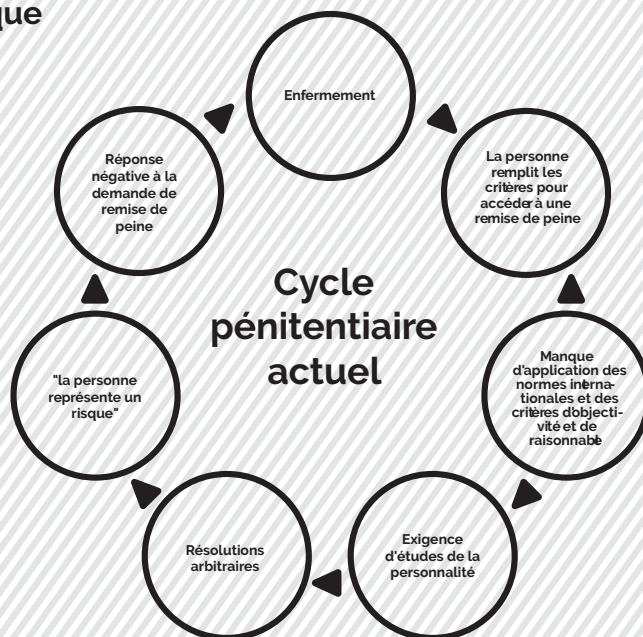
¹¹ Cfr. CIDH, Rapport sur le recours à la détention avant jugement dans les Amériques, par. 100

¹² Résolution 65/229 de l'Assemblée générale du 21 décembre 2010, par laquelle les Règles de Bangkok ont été adoptées.

¹³ CIDH, Rapport sur le recours à la détention avant jugement dans les Amériques, par. 216. Dans le même sens, voir CIDH, La violence, les enfants et le crime organisé, OEA / Ser.L / V / II. Doc 40/15, 11 novembre 2015, par. 481

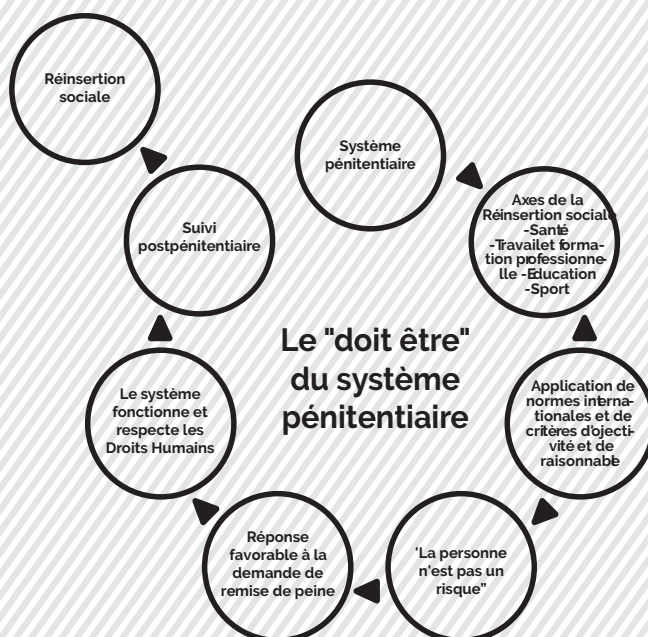
Graphique

2



Graphique

3



Le manque d'application des normes internationales et des critères de proportionnalité, raisonnable et nécessité dans l'imposition de sanctions constituent des traitements cruels, inhumains et dégradants qui favorisent un état de vulnérabilité particulière qui débouche d'actes arbitraires qui portent directement atteinte à la dignité des personnes privées de liberté. Sans oublier le fait que de nombreuses personnes privées de liberté ne connaissent même pas l'existence de ces remises de peine,¹⁴ malgré le fait que l'Etat a l'obligation d'informer les personnes emprisonnées de leurs droits.

De plus, les tests de personnalité continuent d'être appliquées comme des preuves qui prétendent justifier l'existence d'un risque supposé représenté par la personne privée de liberté, et qu'elles représentent dans la pratique une obligation pour accéder aux remises de peine¹⁵. Ces tests ont été condamnés à de multiples reprises par la CIDH et même par des tribunaux mexicains,¹⁶ pour leur caractère pseudoscientifique cherchant à déterminer la dangerosité sociale des personnes qui se trouvent en prison pour leur accoler une étiquette de « mauvaises personnes » et ainsi justifier les décisions judiciaires¹⁷ qui limitent la liberté personnelle. Ces tests constituent des traitements cruels, inhumains et dégradants qui correspondent à un système pénitentiaire qui cherche la réadaptation et la régénération de l'individu, le considérant comme un sujet déviant et antisocial qui requiert un traitement de « normalisation », critères qui sont contraires en tous points aux droits à l'intégrité personnelle et à la dignité humaine.

“

A moi, l'avocat ne m'a pas parlé des remises de peine, j'ai appris qu'ils existaient par des camarades de cellule. Je suis allé voir les gens du département juridique pour demander ce que je devais faire et ils m'ont dit que je n'y aurais pas droit à moins que je fasse les tests

-ENTRETIEN AVEC UN HOMME PRIVÉ DE LIBERTÉ EN BASSE CALIFORNIE

”

Le fait de ne pas privilégier les mesures non privatives de la liberté provoque la soumission des personnes à des contextes qui sont intrinsèquement torturants, et augmente la probabilité d'être victime de traitements cruels, inhumains et dégradants quand elles se trouvent à la garde de l'Etat dans des endroits qui ne garantissent pas une vie digne.

¹⁴ Sur les 78 personnes interrogées au Centre de Réinsertion de Mexicali, 42 déclarent ne pas connaître les avantages offertes par la loi.

¹⁵ À Oaxaca, des informations émanant des conseils juridiques donnés, ont été reçues selon lesquelles, dans plusieurs cas, les avantages ont été refusés sur la base des résultats des études. De même, certains cas dans Mexicali signalent que les autorités demandent "les études" comme condition préalable à la demande d'une audience pour l'octroi d'avantages.

¹⁶ Tesis: 1er. CCXXII/2016 (10ème.). Gazette du Séminaire Judiciaire de la Federación. Dixième Époque. Septembre 2016. P. 504.

¹⁷ Cfr. CIDH. Rapport sur la Situation des Droits Humains au Mexique. OEA/Ser.L/I.L.100, septembre 24, 1998, par. 272 y 277

Le fait que les conditions dans les prisons mexicaines sont loin des standards internationaux de respect des droits humains n'est un secret pour personne. L'Etat mexicain a l'obligation d'adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit à une vie digne¹⁸ pour tous ses citoyens, y compris celles et ceux qui se trouvent en prison, et parvienne progressivement à garantir le plein respect à tous les droits humains reconnus dans les traités internationaux¹⁹.

Dans ce sens, si la loi prévoit des mesures susceptibles de favoriser dans une plus grande mesure le droit à la liberté personnelle, la tâche des juges est de promouvoir l'octroi des remises de peine qui favorisent la réinsertion sociale et donc d'éliminer les obstacles qui limitent l'accès des personnes à ces droits et qui peuvent être considérés en soi comme des mauvais traitements envers les personnes privées de liberté.

b. Droit à la santé

Un des aspects primordiaux de la protection de l'intégrité personnelle des sujets – en tant qu'obligation de l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants – est le droit à la santé. Dans la législation mexicaine, ce droit se trouve protégé par l'article 4 de la Constitution, et, dans le cas spécifique des personnes privées de liberté, dans les articles 9 Fraction II et X, et 77 de la Loi Nationale d'Application des Peines.

Les personnes privées de liberté se trouvent soumises à une situation de grande vulnérabilité en conséquence de la séparation et de l'isolation vis-à-vis du reste de la société propre à la peine de prison. En raison de leur situation de réclusion, cette population n'a accès à aucun type de protection ni de services supplémentaires et se trouve à la merci des services médicaux du système pénitentiaire, lesquels, de même que tous les autres aspects des conditions de réclusion, sont précaires et insuffisants²⁰. C'est ainsi que ce groupe a été exclu des services de santé, ne pouvant pas accéder aux mécanismes pour satisfaire leurs besoins de santé dans les mêmes conditions que les autres individus ou groupes de la société²¹.

¹⁸ Cas Communauté Indigène Sawhoyamaya c. Paraguay, arrêt du 29 mars 2006, série C, no. 146. Par. 153.

¹⁹ Article 2.1 du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention américaine des Droits Humains.

²⁰ Le Diagnostic National de Surveillance Pénitentiaire (2017), réalisé par la CNDH a montré qu'au niveau national il y a des lacunes sur les services de santé et d'alimentation, ainsi que dans les conditions matérielles et l'hygiène des installations pénitentiaires.

²¹ Exclusion en matière de santé dans les pays d'Amérique latine et des Caraïbes série n° 1 extension de la protection sociale en santé. Voir aussi Cour inter-américaine des droits Humains, Cas De la Cruz Flores c. Pérou. Fonds, réparations et coûts. Arrêt du 18 novembre 2004, paragraphe 124, et Affaire Fleury et autres c. Haïti. Fonds et réparations. Arrêt du 23 novembre 2011, paragraphe 84.

L'exclusion des personnes privées de liberté des services de santé est le résultat, entre autres, du manque de coordination entre autorités pénitentiaires et institutions de santé, car la responsabilité a reposé historiquement sur les centres pénitentiaires comme seule figure, laissant le ministère de la santé – responsable des soins médicaux au niveau national - libre de toute responsabilité à partir des arguments suivants.



Graphique réalisé par AsiLegal à partir d'information obtenue auprès du Ministère de Sécurité Publique de Basse Califormie, Demande d'information 00014819

La Loi Générale de Santé établit, dans son article 77 bis 1, que tous les mexicains ont le droit d'être affiliés au système de santé, indépendamment de leur condition sociale, et que l'Etat a l'obligation d'offrir ses services médicaux sans discrimination. Pour sa part, l'article 77 bis 3 de la même loi signale comme conditions pour bénéficier du Système de Protection Sociale de la Santé (Seguro Popular) le fait de n'être affilié à aucune institution de Sécurité Sociale²² et de n'avoir aucun mécanisme de protection sociale de la santé. Les autorités mexicaines ont interprété que les services de santé que donnent les institutions pénitentiaires correspondent à un «mécanisme de protection sociale de la santé» et qu'en conséquence les personnes privées de liberté ne peuvent pas être affiliées au Seguro Popular.

²² Ce régime s'applique aux personnes soumises à une relation de travail.

Les autorités mexicaines ont interprété que les services de santé que donnent les institutions pénitentiaires correspondent à un « mécanisme de protection sociale de la santé » et qu'en conséquence les personnes privées de liberté ne peuvent pas être affiliées au Seguro Popular.

Esta interpretación sobre el significado de “otro mecanismo de previsión social”, así como la restricción sobre la afiliación, se plasma en el Manual de Afiliación y Operación del Seguro Popular:

« Les personnes internées dans les centres pénitentiaires ne pourront pas être affiliées.

[...]

Selon la législation fédérale et des Etats qui régle l'opération des centres pénitentiaires, ceux-ci devront posséder un service de soins médico-chirurgicaux, qui permettra de résoudre les problèmes qui se présentent, et les législations prévoient la possibilité de recevoir les personnes privées de liberté dans les hôpitaux proches du centre pénitentiaire, dans des cas graves”.

Suivant cette logique et les nouvelles Règles d’Affiliation et Opération du Système de Protection Sociale de la Santé publiés dans le Journal Officiel Fédéral le 8 mai 2018, il est prévu que, dans les cas des affiliation familiales, si le titulaire est privé de liberté alors un autre membre de la famille devra prendre sa place avec la possibilité de « solliciter la réactivation de l’affiliation²³ » à la libération. Les Règles en question sont illégales, inconstitutionnelles et inconventionnelles, et provoquent le non-respect des obligations de l’Etat de garantir l’accès à un droit économique et social fondamental comme l’est le droit à la santé.

C’est sur la base des arguments cités plus haut que les personnes privées de liberté ont été exclues explicitement du cadre de protection de la santé auquel le reste de la population a droit, à cause d’une interprétation directement discriminatrice de la loi²⁴, écrite dans un document qui n’a pas de valeur légale et contraire aux droits humains, et ce, malgré les dispositions expresses de la même Loi Générale de la Santé portant sur les services médicaux prioritaires pour les groupes vulnérables (Article 25)²⁵, lesquelles ont valeur de loi, et de plus sont conformes à la Constitution et aux règles internationales sur le sujet.

²³ Dirección general de la afiliación y del funcionamiento. Guía de afiliación y de utilización (2018), p. 83. Disponible en ligne: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/384970/Gu_a_Gu_a_de_Afiliaci_n.pdf

²⁴ Cour IDH. Statut juridique et droits des migrants sans papiers. Avis consultatif. OC-18/03 de 17 septembre 2003. Serie A No. 18. Par. 103.

²⁵ Article 25.- Conformément aux priorités du système national de santé, l’extension quantitative et qualitative des services de santé sera garantie, de préférence aux groupes vulnérables.

Les personnes privées de liberté se trouvent donc déprotégées, dans une zone grise dans laquelle d'un côté le ministère de la Santé prétend de pas avoir d'obligations envers les personnes privées de liberté, et, de l'autre, le système pénitentiaire n'est pas en mesure d'offrir des soins médicaux même basiques comme la législation l'y oblige²⁶.

L'absence d'accès à des soins acceptables de santé au sein des centres pénitentiaires comme résultat du refus explicite des autorités correspond à une violation directe du principe de non-discrimination, lequel est fondamental pour la protection des droits humains ainsi que pour l'interprétation et application de la Convention Contre la Torture. Le traitement discriminatoire envers les personnes privées de liberté est cruel, inhumain et dégradant, puisqu'il affecte directement l'exercice plein de leurs droits, et en particulier celui de la santé comme composant élémentaire du droit à l'intégrité personnelle et relié intimement avec la dignité humaine.

“

Le médecin est un vétérinaire. Il y a plusieurs années, une femme est morte, elle avait un cancer, elle n'a pas reçu de traitement médical, son cancer s'est propagé, quand finalement ils l'ont emmenée à l'hôpital il était trop tard, la cancer avait tout envahi, ils l'ont laissée libre juste avant de mourir, une semaine avant de mourir

-TÉMOIGNAGE D'UNE FEMME PRIVÉE DE LIBERTÉ DANS L'ÉTAT D'HIDALGO

”

Le droit à la protection de la santé implique une obligation d'agir des autorités, car de ses actions et omissions dépend l'efficacité avec laquelle celui-ci sera garanti et²⁷, pour être effectif, il est nécessaire de respecter les principes de disponibilité, accessibilité, acceptabilité et qualité signalés par le Comités de Droits Economiques, Sociaux et Culturels²⁸, c'est-à-dire qu'il doit garantir l'existence d'une quantité suffisante d'établissements, de biens et de services pour que toute la population puisse y accéder librement dans un cadre d'égalité et de non-discrimination. Dans ce sens, pour que les services de santé ne soient pas discriminatoires, ils doivent se baser sur le principe d'équivalence²⁹, c'est-à-dire que toute

²⁶ Article 25.- According to the priorities if the National Health System, it Will be guaranteed the quantitative and qualitative extension of the health services, preferably to vulnerable groups.

²⁷ Observation Générale No. 2. Par. 20

²⁸ Observation Générale No. 14. Comités de Droits Economiques, Sociaux et Culturels. Paragraphe 12

²⁹ Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. R (98) 7 Concerning the Ethical and Organizational Aspects of Health Care in Prison (Apr. 8, 1998), par. 10

politique de santé pénitentiaire doit être intégrée et compatible avec le système de santé nationale, de sorte que les soins soient garantis dans des conditions similaires à celles du reste de la population, avec une attention prioritaire pour les groupes vulnérables et ceux qui se trouvent dans une situation socio-économique difficile.

C'est dans la discrimination que la torture et les mauvais traitements trouvent une voie sans obstacle, puisque celle-ci, en tant que pratique déshumanisante, est perpétrée plus facilement et impunément quand la victime appartient à un groupe socialement dévalorisé. La discrimination fonctionne alors comme une justification de la torture dans les centres pénitentiaires, puisque, à partir des stéréotypes accolés des personnes privées de liberté, on considère qu'elles méritent leur situation et les souffrances qu'elles endurent, ce qui implique un attentat direct contre leur dignité et, en conséquence, un traitement cruel, inhumain et dégradant.

L'enfermement, en soi, génère des conséquences négatives chez les personnes privées de liberté, cependant il existe des affectations particulières dans le cas des femmes. L'impact psycho émotionnel que génèrent les traitements cruels, inhumains qui dominent au sein du système pénitentiaire est, d'un côté, l'abandon, et, de l'autre, l'acceptation ou la normalisation de la punition comme résultat de l'intériorisation par les femmes des stigmas et des stéréotypes construits à leur rencontre. Le Comité a déjà souligné que le genre est un facteur fondamental face aux actes de torture car la condition des femmes se combine avec d'autres caractéristiques qui les met dans une situation de risque de vivre des actes de torture et de mauvais traitements³⁰; c'est pour cela que la discrimination dans l'accès à la santé affecte dans une grande mesure les femmes privées de liberté. Etant donné que la majorité des politiques publiques et des services de santé sont conçus pour les hommes³¹, les besoins spécifiques des femmes sont systématiquement ignorés et il n'existe pas de services médicaux différenciés, raison pour laquelle elles sont soumises à une série de mauvais traitements³² qui se reflètent dans la détérioration des conditions de santé et portent atteinte directement contre leur intégrité personnelle.

³⁰ Cfr. CAT. Observation générale no 2. Par. 22

³¹ Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A / HRC / 31/57. 5 janvier 2016, par. 15.

³² CAT. Observation Générale No. 3. Paragraphe 26

“

Il y a un an, j'étais enceinte et on ne m'a pas laissée sortir à l'hôpital pour suivre ma grossesse, et quand finalement je suis allée à l'hôpital, il était trop tard. J'étais enceinte de 6 mois. Je savais dès le début que j'étais enceinte mais ici les médecins ne se sont pas occupés de moi. C'est seulement au septième mois, quand j'ai eu une très forte poussée de fièvre, qu'ils m'ont conduite à l'hôpital. J'ai répété aux médecins que j'avais mal au ventre mais ils me donnaient juste un médicament pour la pression et des choses comme ça

-ENTRETIEN AVEC UNE FEMME PRIVÉE DE LIBERTÉ DANS L'ÉTAT D'HIDALGO

”

Grâce aux entretiens que nous réalisons, nous avons des informations sur les conditions de vie et en particulier les services de santé dans les centres pénitentiaires de Oaxaca, Chiapas, Hidalgo et Basse Californie³³. A partir de ces entretiens, nous avons identifié une série de pratiques des autorités pénitentiaires. De nombreuses personnes interviewées n'avaient pas de problèmes graves de santé avant d'être incarcérées, ou, dans certains cas, elles sont arrivées en prison avec des séquelles directes dérivées des actes de torture et mauvais traitements subis durant la détention et n'ont pas reçu de soins adéquats.

Dans l'état d'Hidalgo, par exemple, au moment de la détention, parmi les 113 femmes qui ont été interviewées, 33 ont été victimes d'insultes, d'humiliations et de menaces ; 46 ont été victimes de coups et autres violences physiques ; 6 ont été soumises à des chocs électriques étranglements et asphyxie. 8 ont été dénudées et ont souffert d'abus sexuels.

Dans les états de Chiapas et de Oaxaca, parmi les 202 personnes privées de la liberté interviewées, 59 ont affirmé avoir été victimes de menaces, insultes et humiliations au cours de la détention ; 55 ont été victimes de coups et autres violences physiques ; 10 ont vécu des chocs électriques, étranglement et asphyxie.

Le non-respect au droit à la santé se présente dès le moment où la personne est détenue, non seulement parce qu'elle est victime de torture et autres mauvais traitements -une claire violation de l'intégrité personnelle- mais aussi parce qu'une grande partie des personnes détenues ne reçoivent pas de consultation médicale pour vérifier leur état de santé.

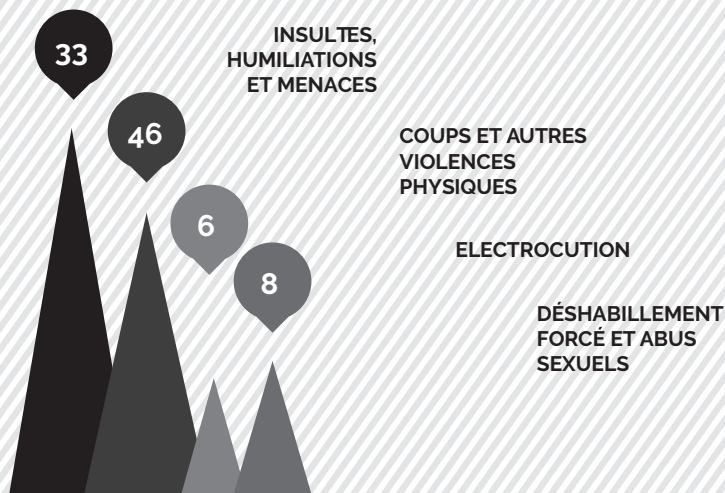
³³ À Hidalgo, 113 femmes ont été interrogées en mai 2018. À Baja California, 78 personnes privées de liberté ont été interrogées au centre de réadaptation sociale de la ville de Mexicali, 50 hommes et 28 femmes, au mois d'octobre 2018. À Chiapas et à Oaxaca, des entretiens ont été menés entre septembre et octobre 2016 dans 11 centres de réadaptation sociale, trois à Chiapas et huit à Oaxaca, auprès de 202 personnes privées de liberté, dont 44 femmes et 158 hommes, comme suit: 25 personnes à CRS El Amate, 17 à CRS Comitán, 44 à San Cristobal de las Casas, 17 à Tanivet, 19 à Huajuapán, 12 à Juchitán, 13 à Juquila, 14 à Miahuatlán, 10 à Pochutla, 14 à Tehuantepec et 17 à Tlaxiaco.

Graphique

5

Hidalgo.

Femmes privées de liberté qui ont été victimes de torture et mauvais traitements au cours de la détention



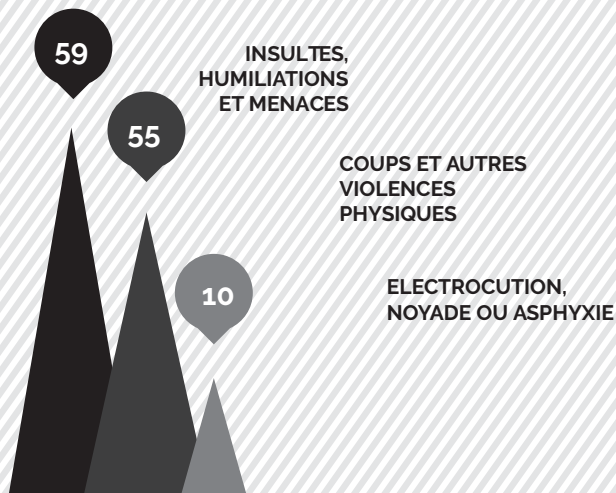
Graphique réalisé par AsiLegal à partir de l'information obtenue au cours d'entretiens avec 113 femmes privées de liberté

Graphique

6

Oaxaca et Chiapas.

Personnes privées de liberté qui ont été victimes de torture et autres mauvais traitements au cours de la détention



Graphique réalisé par AsiLegal à partir de l'information obtenue au cours d'entretiens avec 202 femmes privées de liberté

Parmi les personnes interviewées, dans l'état d'Hidalgo 47 personnes n'ont pas reçu de consultation médicale à la suite de leur détention, dans les états de Oaxaca et de Chiapas 37 personnes reportent la même omission de la part de l'autorité. Cela génère de graves répercussions dans l'état de santé des personnes, lesquelles, une fois dans le Centre Pénitentiaires, ne font pas l'objet des soins nécessaires à cause des carences structurelles en matière de santé.

Le nombre de personnes qui souffrent d'un problème de santé chronique et ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin est très important. Au Chiapas et au Oaxaca, parmi les 202 personnes interviewées, 77 souffrent d'une maladie chronique et 57 affirment ne recevoir aucun traitement ou un traitement insuffisant. A Mexicali, 39 personnes souffrent d'une maladie ou d'un problème chronique, et 25 d'entre elles considèrent que les soins médicaux sont insuffisants. En Hidalgo, 70 ont des problèmes de santé chroniques et 31 sont mécontents du service³⁴ (à cause de sa mauvaise qualité et de l'insuffisance de médecins et de médicaments).



Schéma réalisé par AsiLegal à partir de l'information obtenue au cours d'entretiens avec 77 personnes qui souffrent d'un problème de santé chronique

³⁴Une femme privée de liberté à Mexicali affirme que "la seule chose que le dentiste fait est de prendre des dents, lorsque nos dents nous font mal ou quelque chose, il les extrait seulement. Nous sommes tous sans dents".

Graphique

8

Hidalgo.

Femmes privées de liberté qui souffrent d'un problème de santé chronique et ne reçoivent pas de soins médicaux

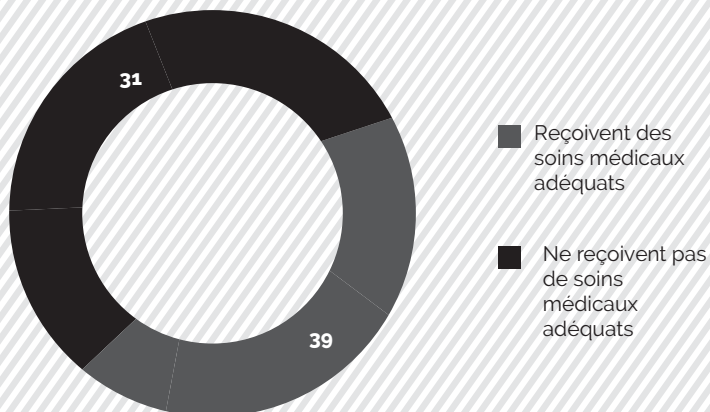


Schéma réalisé par AsiLegal à partir de l'information obtenue au cours d'entretiens avec 70 femmes qui souffrent d'un problème de santé chronique

Graphique

9

Mexicali.

Personnes privées de liberté qui souffrent d'un problème de santé chronique et ne reçoivent pas de soins médicaux

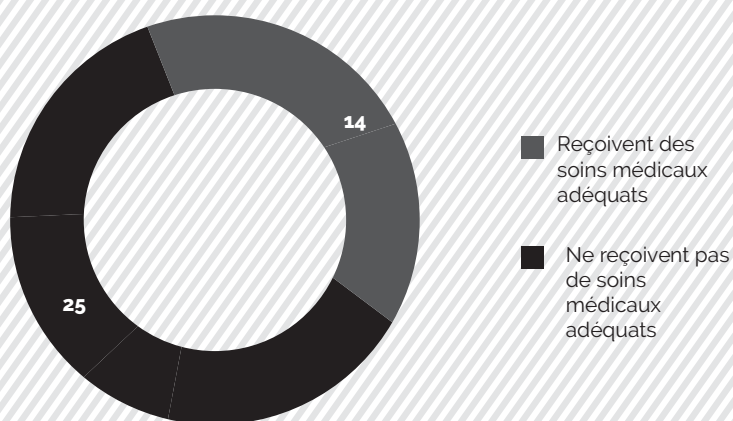


Schéma réalisé par AsiLegal à partir de l'information obtenue au cours d'entretiens avec 39 femmes qui souffrent d'un problème de santé chronique

De la même manière, nous avons obtenu de l'information sur différentes déficiences structurelles au sein des Centres Pénitentiaires³⁵ comme, par exemple, l'absence de médicaments et autres services, ou le fait que les familles des détenus doivent payer pour avoir accès. Quant à l'attention spécialisée pour les femmes, dans les centres où il y a une gynécologue, celle-ci n'est en général pas disponible et les délais pour recevoir une consultation sont très longs.

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, l'Etat mexicain, en refusant l'accès à la santé des personnes privées de liberté, attente contre l'intégrité personnelle sous des critères de discrimination³⁶, violant ainsi le droit à l'égalité, qui est inséparable de la dignité essentielle de la personne³⁷, au détriment d'un groupe social spécifique, le plaçant dans une situation de double vulnérabilité. Les personnes privées de liberté au Mexique sont soumises à des souffrances et traitements cruels, inhumains ou dégradants pendant tout le temps de leur sentence, puisqu'elles doivent supporter des souffrances aiguës et des maladies chroniques sans recevoir un traitement approprié de la part des autorités.

c. L'enfermement comme manière de combattre l'autogouvernement et l'insécurité dans les centres pénitentiaires

Si c'est bien vrai que la sécurité constitue un élément essentiel pour atteindre l'objectif d'un séjour digne pour les détenus, quand elle est la seule qui se privilège, il existe beaucoup de risque par rapport à cette méthode, par exemple l'isolation et la privation du développement d'activités nécessaires pour l'exercice des droits qui sont fondamentaux pour les personnes privées de liberté comme c'est celui de la réintégration sociale³⁸ et qui en ensemble avec les mauvaises conditions de réclusion sous lesquelles la personne ne peut pas accéder à une vie décente, il existe des traitements cruels, inhumains et dégradants.

Selon la Commission Interaméricaine de Droits Humains, il existe un risque supérieur de transgression de la dignité et des droits humains des personnes en situation de réclusion quand le sentiment d'insécurité augmente et qu'une pression politique et médiatique pousse à l'établissement de mesures répressives qui produisent même une érosion dans l'interdiction de la torture³⁹.

³⁵ Un cas très particulier c'était enregistré à Mexicali, car là-bas il n'y a qu'un seul docteur auquel nous ne pouvons pas avoir accès que par bulletin, à travers lequel la personne demande une consultation. Le problème c'est que un seul bulletin est livré par mois, et ça s'applique par tous les aires et activités dans le centre; c'est à dire que si quelqu'un veut une consultation avec le médecin, mais au même temps il veut s'inscrire dans un cours d'éducation, il devra choisir seulement un et attendre le mois prochain pour le demander avec un nouveau bulletin.

³⁶ Cfr. CAT. Observation Générale No. 2 Paragraphe 20 Cour IDH. Condition juridique et droits des migrants non documentés. Opinion Consultative OC-18/03 de 17 septembre 2003. Série A No. 18. Par. 100.

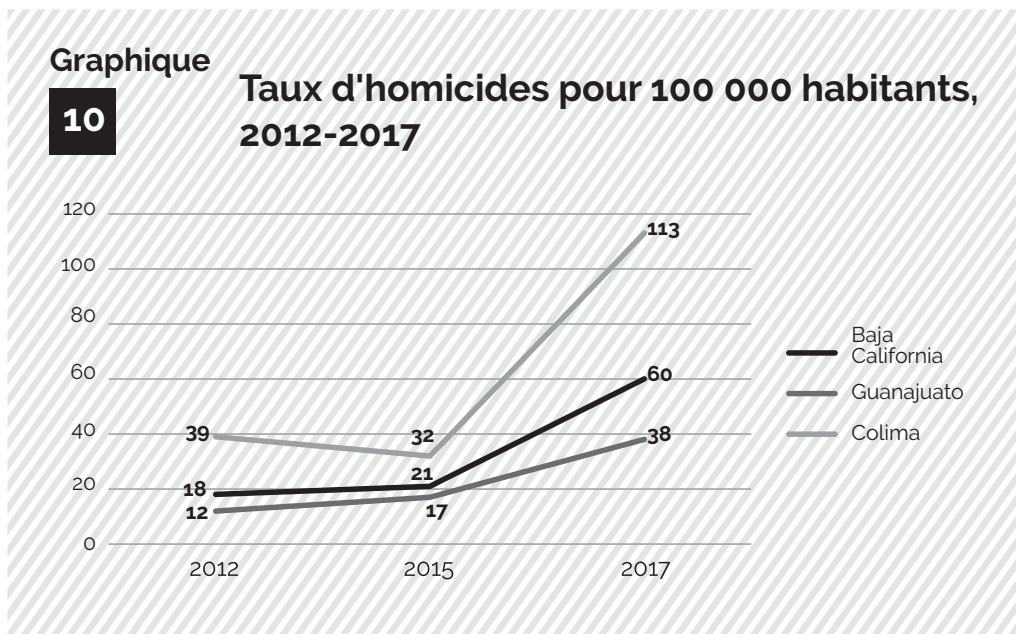
³⁷ Cour IDH. Statut juridique et droits des migrants sans papiers. Avis consultatif. OC-18/03 de 17 septembre 2003. Série A No. 18. Par. 100.

³⁸ Selon la Loi Nationale d'exécution pénale, la réinsertion sociale est définie comme la "restitution du plein exercice des libertés après l'accomplissement d'une sanction ou mesure réalisée avec respect des droits humains". La restitution du plein exercice des libertés doit être comprise pas seulement comme l'action de revenir à la personne dans le contexte où elle était avant; mais comme l'obligation de l'Etat de fournir les outils nécessaires pour que la personne qui est privée de liberté peut se réinsérer dans la société avec plusieurs opportunités et qu'elle soit capable de développer son projet de vie dans un cadre de légalité (qui ne retourne pas être délinquant). AsiLegal; La situation du droit à la réinsertion sociale des femmes, sous la loupe de la Loi Nationale d'exécution pénale. Analyse comparative dans quatre entités; 2018; p. 7. En ligne: <https://asilegal.org.mx/wpcontent/uploads/2019/01/INFORME_PROEQUIDAD_AsiLegal_dic_2018.pdf>

³⁹ CIDH. Rapport sur les droits humains des personnes privées de liberté dans les Amériques. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 64; 31 de décembre 2011; par. 364 (d) En ligne: <<http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf>>

Il a été identifié que la pratique de l'enfermement comme une partie de la politique pénitentiaire du pays, se présentent en plusieurs états de la République, mais ceux dont ces Centres pénitentiaires compte avec alarmants niveaux d'enfermement sont: Baja California, Colima et Guanajuato; ainsi que tous les centres de réclusion fédéraux⁴⁰.

L'état de Baja California, ainsi que Colima et Guanajuato sont entités dans lesquels la perception d'insécurité a augmenté significativement pendant le period compris de 2012 à 2017 a cause du procès de reconfiguration de la violence produit par la guerre contre le narcotrafic. Pendant ces années, Baja California augmenté 240% sa taux d'homicides; en cas de Colima, l'augmente de la taux d'homicides pendant le même period a été 193%. En ce qui concerne à Guanajuato, l'entité a passé d'une taux de 17 homicides par chaque 100 mil habitants en 2015 à 38 en 2017⁴¹.



Elaboré par Asilegal avec l'information de Géographie de la violence. Les taux d'homicide ont augmenté dans certaines zones du Mexique et diminué dans d'autres. Quelles nouvelles zones marquent la violence dans le pays ? Département de statistiques ; 4 septembre 2018

⁴⁰ Pour l'identification des états dans lesquels cette pratique c'est plus fréquent, nous avons analysés les données du Diagnostic National de Supervision Pénitentiaire 2017 de la CNDH, avec ceux de l'Enquête National de Population Privé de Liberté (ENPOL) 2016, de l'INEGI. 4

⁴¹ Géographie de la violence. Les homicides ont augmenté dans certains points du Mexique et sont descendus dans des autres. Quelles nouvelles zones marquent la violence du pays? L'Universel. Unité de données; 4 septembre 2018. En ligne: <<http://interactivo.eluniversal.com.mx/2018/homicidiosgeografia-de-violencia/>>

L'incrément de la violence dans ces entités a eu son composant reflex en l'organisation de ses systèmes pénitentiaires dans lesquels s'a implémenté une politique d'enfermement absolue en contre de les personnes privées de liberté. Les cas les plus sérieux se présentent a Baja California et dans les Centres Federales ou plus de 80% des gens passent dans leurs cellules de 22 a 24 heures⁴².

Dans le cas particulier de Baja California, Il faut ajouter que avant 2002 les Centres de réclusion avaient un sérieux problème d'autogouvernement. Sous l'argument de la sécurité, de 2002 jusqu'à présent, Baja California a opté pour suivre le model de prisons "supermax"⁴³, au moment de développer une infrastructure d' haut sécurité et une politique d'enfermement absolu. Le model "super-max" est aussi implémenté dans tous les Centres Pénitentiaires Federales. Un déficit généralisé du système pénitentiaire mexicaine c'est la manque de personnel, particulièrement de sécurité et garde. Selon la Comision National des Droits Humaines (CNDH), le 83.33% des Centres Pénitentiaires au niveau national manque de cet type de personnel⁴⁴. Cette absence est un des argumentes plus utilisés pour l'autorité pour justifier l'enfermement et l'impossibilité de développer activités dehors les cellules.

Le renforcement de la sécurité en augmentant les heures d'enfermement c'est résultat, en partie, du accomplissement des standards pour l'obtention d'accréditation de l'Association Américaine de Correctionnels (ACA) , qui cherches d'implémenter structures pénitentiaires de maxime sécurité⁴⁵ pour prévoir "que les organizations criminels transnationaux opèrent depuis ces centres"⁴⁶. A propos, la CIDH a montré sa préoccupation par cet type des modèles répressifs et contraires à tous les standards internationaux, donc la priorisation des ressources est dirigé à la limitation des libertés en lieu de rendre digne et humaniser les séjours penitentiaries⁴⁷.

Dans le tableau suivant, c'est possible d'observer les etats et Centres Pénitentiaires dans lesquels les personnes privées de liberté restent pratiquement enfermés dans ces cellules toute la journée. En parallèle, cela montre la façon comment l'enfermement se reflète dans l'inexistence d'autogouvernement et la manque d'activités. Finalement, il s'ajoute combien et quels de ces centres comptent avec certification ACA.

⁴² Données obtenus à travers de:INEGI. Enquête National de Population Privé de Liberté (ENPOL) 2016; données ouvertes. . 6

⁴³ Les prisons 'super-max' se caractérise par un régime de détention très restrictive" APT. En équilibrant la sécurité et la dignité dans les prisons: Un cadre de travail pour la surveillance préventive; ISBN: 978-1-909521-33-9; 2013; p. 17. En ligne: <https://www.apt.ch/content/files_res/balancing-security-and-dignity-es.pdf> 7

⁴⁴ Information obtenu à travers de l'analyse de données du Diagnostic National de Supervision Pénitentiaire (DNSP) 2017, de la Comision National des Droits Humaines. En ligne: <http://appweb2.cndh.org.mx/DNSP/Ceresos/p_diagNacional_Resumen.asp> 8

⁴⁵ Cfr. CIDH. Situation de Droits Humaines au Mexique. 31 décembre 2015. Doc. 44/15, par. 344 9

⁴⁶ Pour que les Centres Pénitentiaires peuvent obtenir sa certification, Ils doivent avoir 137 indicators (40 obligatoires et 77 non obligatoires). Des 137 indicators, le 41.87% est très vinculé à la sécurité des Centres et seulement le 8.76% est relationé avec le sujet "programme et activité". Cfr. SEGÖB. "Demande d'incorporation du Sous Programme; Accreditation (Certification) de établissements penitentiaries. Annexe III" En ligne: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189192/Acreditacion_certificacion_establecimientos_penitenciaros_III.pdf> 10

⁴⁷ Cfr. CIDH. Situation de Droits Humaines en Mexique. Op. Cit. Par. 345

ENTITÉ CENTRE PÉNITENTIAIRE	% DE POPULATION HEURES D'ISOLEMENT			ACTIVITÉS					CERTIF ACA
	22-24 HRS	19-21 HRS	AUT GOUVERNEMENT	TRAVAIL	ÉDUCATION	SPORT	VINC AVEC LA SOCIÉTÉ		
BAJA CALIFORNIA	78.49	6.05							
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL TIJUANA	87.55	2.3	8.09	1.29	6.89	6.82	6.26	SÍ	
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DE MEXICALI	81.54	9.16	8.15	0.9	6.34	5.39	7.66		
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL "EL HONGO"	81.85	2.74	9.06	6.68	7.28	8.38	6.39	SÍ	
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL "EL HONGO II"			7.9	7.27	7.86	9.34	7.32		
COLIMA	16.37	11.36						No	
RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN			8.5	5	7.21	6.21	7.09		
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL COLIMA			8.11	5.84	7.03	7.71	6.94		
CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DE MANZANILLO			8.72	5.69	7.18	7.07	6.86		
GUANAJUATO	17.48	6.39							
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE IRAPUATO			9.32	6.97	7.11	7.57	8.44	SÍ	
CENTRO ESTATAL DE REINSECCIÓN SOCIAL DE GUANAJUATO			8.79	2.62	4.35	2.92	7.48	SÍ	
CENTRO ESTATAL DE REINSECCIÓN SOCIAL DE VALLE DE SANTIAGO			8.87	6.97	7.12	7.32	8.55	SÍ	
CENTRO ESTATAL DE REINSECCIÓN SOCIAL DE LEÓN			8.97	5.76	7.48	7.74	8.38	SÍ	
CENTRO ESTATAL DE REINSECCIÓN SOCIAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE			9.22	3.48	8.04	7.2	8.37	SÍ	
CENTROS FEDERALES	96.26	3.02							
CEFERESO NO. 14 "CPS", GÓMEZ PALACIO, DURANGO			9.59	2.98	5.81	7.93	7.26	SÍ	
CEFERESO NO. 7 "NOR-NOROESTE", GUADALUPE VICTORIA, DURANGO			8.35	3.55	8.34	7.49	6.99	SÍ	
CEFERESO NO. 12 "CPS", GUANAJUATO			9.99	4.98	9.58	4.99	5.21	SÍ	
CEFERESO NO. 1 "ALTIPLANO", ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDOMEX			10	4.91	6.8	6.85	5.95	SÍ	
CEFEREPSI, MORELOS			9.84	2.57	6.71	7.57	5.99	SÍ	
CEFERESO No. 16 "CPS", MORELOS			9.99	3.41	6.65	6.64	6.57	SÍ	
CEFERESO No. 4 "NOROESTE", NAYARIT	21.44	64.79	9.94	4.87	6.72	3.06	4.42	SÍ	
CEFERESO No. 2 "OCCIDENTE", EL SALTO, JALISCO			10	6.5	3.6	6.06	4.06	SÍ	
CEFERESO NO. 13 "CPS", OAXACA	62.36	34.45	10	1.52	3.4	5.59	5.56	SÍ	
CEFERESO NO. 6 "SURESTE", HUIMANGUILLO, TABASCO			9.94	4.37	7.17	7.05	6.58	SÍ	
CEFERESO NO. 11 "CPS", SONORA	62.31	34.49	9.98	3.05	4	6.07	5.94	SÍ	
CEFERESO NO. 5 "ORIENTE", VILLA ALDAMA, VERACRUZ	87.19	7.79	9.29	7.15	8.25	3.8	4.83	SÍ	
CEFERESO NO. 8 "NOR-PONIENTE", GUASAVE, SINALOA			9.62	2.21	7.1	6.66	5.09	SÍ	
CEFERESO NO. 15 "CPS", TAPACHULA, CHIAPAS	84.76	5.17	9.93	0.68	4.71	5.84	5.41	SÍ	
CEFERESO NO. 9 "NORTE", CUIDAD JUAREZ, CHIHUAHUA			9.84	3.05	6.25	6.27	6.98	SÍ	

SOURCE: Tableau élaboré à partir de la systématisation des données de l'Enquête nationale sur la population privée de liberté (ENPOL) 2016, de l'INEGI; du Diagnostic national de la surveillance pénitentiaire 2017, de la CNDH, et du document de la Ministère de l'intérieur: Demande d'incorporation du sous-programme: "" Accréditation (certification) d'établissements pénitenciers "".

* Les centres pénitentiaires analysés sont ceux visités et évalués en 2017 par la CNDH. Chaque année, la CNDH

Il développe une évaluation des centres de détention en fonction de leurs conditions d'internement (l'échelle va de 0 à 10, 10 étant la meilleure valeur pour les problèmes d'internement).

Comme c'est possible d'observer, dans l'état de Baja California, pratiquement toute la population est enfermée dans ses cellules de 22 à 24 heures par jour. Alors, les gens ont un accès extrêmement limité au développement des activités de travail, éducatifs et sportif. Deux des Centres visités par la CNDH (Mexicali y El Hongo) comptent avec certification ACA.

L'information précédent peut se corroborer a partir des trouvailles présentés par le Mécanisme National de Prévention de la Torture dans son rapport sur son visite aux centres pénitentiaires de Baja California en 2018:

“Aux personnes privées de liberté sont autorisés à quitter leurs chambres une heure par semaine (activité dénominé “yarda”), temp ou ils achètent des articles dans un commerce, ils se sont coupé les cheveux, parlent en telephone, et quelquefois Ils pratiquent quelqu´activité sportive... Les gens enquêtés étaient mécontents par cet situation d'enfermement et manque d´activités.”⁴⁸

En parlant des activités, le MNPT a mentionné que seulement le 4.89% de la population privé de liberté a Baja California compte avec une activité laborel rémunéré, le 26.79% ont quelqu´activité éducative - Cette activité plusieurs fois se développe dans la cellule- et 25% faisant quelqu´activité sportif⁴⁹.

Concernant l'état de Colima, ses Centres Pénitentiaires n'a pas avec certification ACA. cependant, presque un tier de la population (27.73%) passe entre 19 et 24 heures dans sa cellule. Selon la CNDH, l'entité ne compte pas avec problèmes d'autogouvernement, mais elle est échoué dans le développement d'activités professionnels dirigés aux personnes privés de liberté.

A Guanajuato, tous les Centres Pénitentiaires comptant avec certification ACA; presque un quartier de son population passe enfermé de 19 a 21 heures par jour. Les centres de cet etat n'ont pas problèmes d'autogouvernement, mais en trois de cinq centres évalués, les gens n'ont pas accès au développement d'activités professionnels, éducatifs ou sportifs.

Finalement, comme on peut identifier dans le tableau, en tous les Centres Federales, il s'utilise la politique de l'enfermement excessive pour garantir la sécurité. Tous les CEFERESOS, a l'exception du numéro 17 “CPS” Michoacán, ont la certification ACA et n'a pas problèmes d'autogouvernement. Cependant, en tous ces centres les gens sont absolument privées de la possibilité de faire activités pour son reinsercion social.

⁴⁸ Rapport de supervision ISP-5/2018 du Mécanisme national de prévention de la torture et de la torture (MNPT) sur les centres de réinsertion sociale de l'État de Baja California, California 12 juin 2018; p. 15. En ligne: <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/5_2018.pdf>.

⁴⁹ Rapport de supervision ISP-5/2018 du Mécanisme national de prévention de la torture et de la torture (MNPT) sur les centres de réinsertion sociale de l'État de Baja California, California 12 juin 2018; p. 16. En ligne: <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/5_2018.pdf>.

Concernant à l'enfermement et la manque d'activités dans les Centres Pénitentiaires Fédérales, le MNPT a manifesté le suivant:

“Dans les six CEFERESOS ‘CPS’ visités, on a trouvé qu’il n’existe pas des activités professionnels rémunérés, et en cinq de ces il ont information sur situations liés avec la manque ou insuffisance de personnel technique pour l’organisation d’activités de travail et de capacitation, éducatifs et sportifs, raison pour laquelle les personnes privées de liberté sont la plupart du temps dans ses séjours. Il est convenient de mentionner que dans les CEFERESOS ‘CPS’ numéros 11 à Sonora et 14 à Durango, les internes ont remarqué qu’ils sont 23 heures par jour dans ses cellules, et qu’inclusive parfois ils ne sortent pas pendant toute la journée, alors que ceux qui sont dans le CEFERESO ‘CPS’ No. 15 a Chiapas, ils ont dit aussi qu’ils restent jusqu’à 22 heures sous ces circonstances.”⁵⁰

Pour sa part, le bureau des Nations Unis contre la Drogue et le Délit (UNODC), a travers de l’opinion technique consultative ex rapport No. 002/2014, a dit que:

“les états de la région doivent s’abstenir de désigner politiques de sécurité qui soit justifiées just’en une réponse répressive. Dans ce sens, c’est important se rappeler qu’une possible sensation généralisée d’insécurité ne dût pas servir comme raison pour la formulation de politiques de flexibilisation et dévaluation des personnes privées de liberté, où normalement se trouvent les minorités les plus exclus de la société.”⁵¹

L’isolation et la privation d’activités qui contribue a la réinsertion social sont des actions violatoires de ce qui est établi dans l’article 18 de la Constitution mexicaine, dans le Loi National d’Exécution Pénal et dans l’article 10 du Pacte International de Droits Civiles et Politiques (ICCPR) dans le sens que selon cet réglementation, le système pénitentiaire doit être basé dans le respect aux droits humains et la dignité de la personne, donc si ces maximes ne sont pas attendus, un chemin libre est ouvert pour les actes de torture et les mauvais traitements⁵² en tant qu’on privilégie la sécurité à travers de mesures qui dévaluent à un des groupes minoritaires et vulnérables plus exclus de la société”⁵³.

⁵⁰ MNPT. Rapport 8/2016 du Mécanisme National de Prévention de la Torture sur les Centres Fédérales de Réadaptation Social Dénominés ‘CPS’; 10 octobre 2016; p. 11. En ligne: <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/8_2016.pdf> 13

⁵¹ UN. ONUDC. La prévention de la torture et des autres traitements ou pénalités cruelles, inhumains ou dégradantes: une possible stratégie pour la République de Panamá; Opinion Technique Consultative ex rapport No. 002/2014; p. 4. En ligne <https://www.unodc.org/documents/ropan/Technical_Consultative_Opinions_2014/Opinion_Consultiva_2014-002.pdf> 14

⁵² Article 18 de la Constitution Politique des États Unis Mexicaines.

⁵³ Cfr. UN. ONUDC. La prévention de la torture et des autres traitements ou pénalités cruelles, inhumains ou dégradantes: une possible stratégie pour la République de Panamá; Opinion Technique Consultative ex rapport ; p. 4. En ligne: <https://www.unodc.org/documents/ropan/Technical_Consultative_Opinions_2014/Opinion_Consultiva_2014-002.pdf>

d. Les femmes oubliées en détention provisoire de la guerre contre le narco

En 2011, le point plus intense de la Guerre contre le narcotrafic impulsé par le président de cette époque, Felipe Calderón, les arrestations massives déployées étaient habituelles comme actes de démantèlement des Cartels de drogues à la fin de montrer l'efficacité de la stratégie militaire du gouvernement contre le crime organisé.

Le résultat de cette politique a été un emprisonnement massive de femmes sous causes pénales conjoint (avec autres coaccusés), dont les cas jusqu'à aujourd'hui n'ont pas reçu sentence et elles se trouvent tous privées de liberté comme mesure de précaution. La prisión preventivo est une mesure exceptionnel qui ont comme finalité assurer la présence de la personne accusé à son procès, avec le limit de deux ans maxim a l'intérieur. Pourtant, au niveau national, l'abuse de cette mesure a généré qu'un tiers des personnes privées de liberté sont en prisión preventiva, plusieurs pendent plus du limit légal.

“

Ils m'ont arrêté à un point de contrôle militaire alors que j'ai rentrée chez moi. Je n'avais pas de pièce d'identité et ils ne m'ont pas laissé partir. Cela fait presque 8 ans que j'attends, sans voir mes filles... je veux juste savoir ce qui se passe

-TÉMOIGNAGE D'UNE FEMME PRIVÉE DE LIBERTÉ À BAJA CALIFORNIA

”

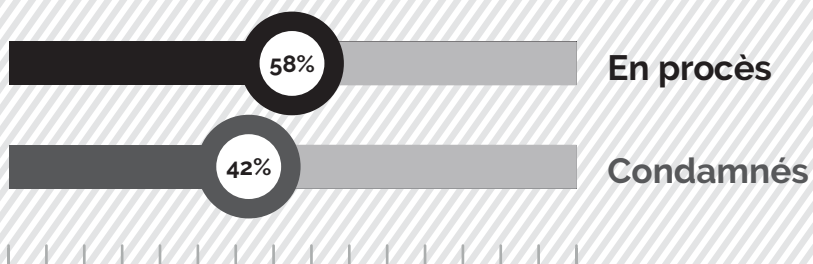
Les femmes accusées de délits de droit fédéral sont victimes de manière disproportionnée des abus de la détention provisoire: pendant le 41% des hommes accusés de crimes de droit fédéral sont en attente de procès, cette situation affecte 58% des femmes accusées de crimes fédéraux⁵⁴.

⁵⁴ Cahier d'information mensuel sur les pénitenciers statistiques, août 2018, Commission de la sécurité nationale.

Graphique

11

Situation juridique des femmes dépendant de la juridiction fédérale

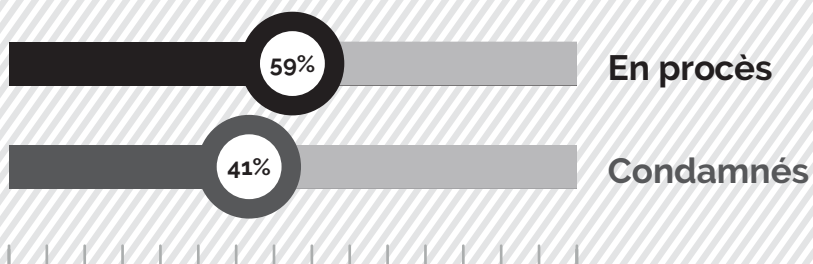


Elaboré par Asilegal à partir de l'information du Cahier Mensuel d'Information Statistique Pénitentiaire, Août 2018

Graphique

12

Situation juridique des hommes dépendant de la juridiction fédérale



Elaboré par Asilegal à partir de l'information du Cahier Mensuel d'Information Statistique Pénitentiaire, Août 2018

A travers d'une série d'entretiens menés à Baja California, il a été possible d'identifier une série de modèles existants dans presque tous les cas, parmi lesquels la dispersion géographique comme cause de la délai prolongée de ces procédures pénales. Les femmes interrogées ont été arrêtées à Cancún, Puebla, État de Mexico, Guanajuato ou Veracruz; tous ont été transférés a Baja California,mais ses co-accusés sont dans divers états. À son tour, le juge responsable de son cas est à Tamaulipas, Puebla ou Veracruz, ainsi que vos défenseurs publics.

“

Ils m'ont arrêté à Oaxaca, j'étais enracinée pendant 80 jours à Mexico, puis ils m'ont mené a Mexicali, mais mon défenseur et le juge sont à Tamaulipas. J'ai beaucoup de coaccusés, certains sont à Morelos, d'autres à Veracruz.

-TÉMOIGNAGE D'UNE FEMME PRIVÉE DE LIBERTÉ À BAJA CALIFORNIA

”

Cette dispersion géographique entrave fortement les progrès dans le processus et place les femmes dans une situation de grave impossibilité juridique de défense qui les expose à des environnements tourmenteurs et à de graves angoisses et souffrances résultant du manque de sécurité juridique, pour lequel constituent traitements cruelles, inhumaines et dégradants. En outre, étant loin de leurs foyers d'origine, éloignés de leurs familles et des autres réseaux de soutien, elles souffrent d'une aliénation encore plus grande au détriment de leur santé mentale

“

Ils m'ont frappé à la tête et à l'estomac, ils m'ont donné des décharges électriques dans le vagin, ils m'ont menacé de tuer mes enfants si je ne signalais pas de papiers, ils ne m'ont pas laissé les lire ... J'étais enceinte, j'ai perdu mon bébé.

-TÉMOIGNAGE D'UNE FEMME PRIVÉE DE LIBERTÉ À BAJA CALIFORNIA

”

De même, un autre des patrons était la torture de laquelle elles ont été victimes lors de leur arrestation arbitraire. Il faut rappeler qu'au Mexique il existe un régime d'exception applicable aux cas de crime organisé qui justifie l'existence de chiffres comme l' "arraigo" (termin mexicaine pour dire 'une détention ne pas prévu dans le loi'), même qui, en plus d'être inefficace, est une violation des droits de l'homme et favorise l'existence d'espaces sans loi où l'autorité agit de manière arbitraire et facilite l'obtention d'aveux sous la torture dans le cadre de totale impunité.

Dans un contexte généralisé de violence sexiste, la violence sexuelle est l'un des formes de torture plus brutales, dont les femmes sont victimes de manière disproportionnée. AsiLegal a eu l'occasion d'interviewer 21 femmes traitées pour les crimes de droit fédérale. 16 d'entre eux ont décrit divers actes de torture physique, psychologique et / ou sexuelle de la part des éléments d'appréhension.

Les méthodes de torture incluent des coups portés à différentes parties du corps, des positions inconfortable pendant plus de vingt heures, de privation de sommeil, le glas des membres de la famille, forçant à regarder d'autres personnes à être torturées, décharges électriques dans les organes génitaux, le viol. Deux des femmes interrogées ont été enceintes et ont perdu leurs bébés à la suite de tortures.

La moitié des femmes victimes interrogées ont dénoncé les actes de torture avant son défenseur ou devant le juge, cependant et malgré l'obligation de poursuivre le crime de torture d'office, aucun membre des forces armées ou de la police n'a été persécuté.

La guerre contre le narcotrafic a servi à légitimer au niveau gouvernemental une série de pratiques illégales qui, depuis lors, ont causé des dommages irréparables à les femmes privées de liberté qui attendent encore une peine qui définit son statut juridique. En attendant, et tout au long de son processus, ils n'ont pas cessé d'être victimes de violations systématiques de leurs droits humains, attaquant directement contre leur intégrité physique et psychologique, ainsi que contre leur dignité et subsistent, toujours innocent, privé de liberté.

III. Orientation sexuelle ; identité et expression de genre non hégémonique

La situation permanente de discrimination, de préjugés et d'inégalité qui existe au Mexique a construit un environnement hostile et particulièrement violent pour les personnes LGBTI en raison de son désaccord avec une société hétéro-dominante qui réprime les diverses manifestations de l'orientation sexuelle et / ou de l'identité de genre et, par conséquent, qui les expose au risque d'être victimes de torture et de mauvais traitements⁵⁵.

⁵⁵ Rapport de surveillance du Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements ou peines cruelles, inhumaines ou dégradants , ONU, 2016

Cette situation provoque une méfiance généralisée, ainsi que de l'angoisse, de l'anxiété et de la peur avec des conséquences psycho-émotionnelles négatives en raison de l'agitation constante causée par la possibilité d'être victime de torture ou d'autres traitements cruels.

Le risque d'être victime de ces actes motivés par la haine et la discrimination, ainsi que la vulnérabilité des personnes LGBT, groupe historiquement exclu, acquiert une pertinence particulière et se renforce lorsqu'il s'associe à d'autres caractéristiques et contextes, tels que privation de liberté, migration, origine ethnique, travail du sexe, défense des droits humains, entre autres. Chacun des environnements précédents constate des violations systématiques des droits de l'homme, en particulier de la liberté, de l'intégrité et de la sécurité personnelle, contre les personnes LGBT.

Aux Lesbien les ont séparées des autres femmes et elles ont interdit de se relacionner avec des autres copines, parce que si elles le font, ils les sanctionnent avec quinze jours d'isolement.

-ENTRETIEN À UNE FEMME PRIVÉE DE LIBERTÉ À MEXICALI

a. Personnes Privées de Liberté

Dans le contexte de la privation de liberté, la nature même de la peine⁵⁶ dans un pays tel que Mexique, où les droits de l'homme sont négligés et les violations de l'intégrité physique et psychologique configurent les pratiques quotidiennes et, de plus, normalisées, expose les personnes LGBTI à un environnement particulièrement torturant dans lequel, en plus de leur refuser leur libre identité, expression, sexe et orientation, l'État n'accorde aucune mesure pour protéger leurs droits et pour répondre à leurs besoins spécifiques⁵⁷. L'absence de registre des personnes LGBTI en isolement les rend invisibles et tous les actes perpétrés à leur rencontre restent impunis, soit de la part des Autorités de l'État ou d'autres personnes privées de liberté en raison de leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre. Actuellement, le statistique pénitentiaire réalisée par le Le ministère de l'Intérieur n'est pas décomposé par blessures, querelles ou homicides où il n'est pas évident si une personne LGBT était impliquée⁵⁸.

⁵⁶ Rapport de surveillance du Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements ou peines cruelles, inhumaines ou dégradants sur sa mission au Mexique: "les personnes LGBTI sont particulièrement exposées à souffrir des tortures et mauvaises traitements dans des situations de privation de liberté", par. 71 19

⁵⁷ Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements ou peines cruelles, inhumaines ou dégradants. Op. Cit. 20

⁵⁸ Les Cahiers mensuels d'Information Statistique Pénitentiaire National, sont émis par la Commission Nationale de Sécurité de la Secrétaire de Gouvernement, et comptent avec un chapitre spécifique des incidences, dans lequel ils ventilent les données relatives aux établissements pénitentiaires, au concept, au nombre de détenus impliqués, aux blessés et aux homicides.

Pouvoir identifier la population LGBT privée de sa liberté ne satisferait pas seulement leurs besoins particuliers, mais aussi aiderait à éviter les situations où elles risquent de souffrir des actes de torture et des mauvais traitements car on sait, par exemple, que les femmes et les hommes trans sont plus susceptibles aux agressions physiques et sexuelles s'ils sont avec la population pénitentiaire générale⁵⁹. Il est important que les informations recueillies pour connaître le nombre de personnes LGBTI en prison ne soient pas utilisées à des fins discriminatoires, ce dans lequel l'État mexicain doit mettre tous ses efforts, donc, jusqu'à présent, dans de nombreuses prisons, les gens LGBT sont séparés, soumis à des critères stigmatisants et préjugés, dans le but de les isoler et de les exclure du reste de la population carcérale, de sorte qu'ils se voient exclus de l'accès aux activités et autres services dans des conditions d'égalité des chances pour les autres. Mettre aux personnes LGBT en régime de ségrégation totale constitue une violation de la interdiction de la torture et des mauvais traitements⁶⁰.

b. Homicides motivés par des préjugés

L'absence de registre de cette population affecte non seulement les centres pénitentiaires, mais également dans d'autres contextes tels que les homicides. L'information disponible actuellement résulte pour la plupart des notes journalistiques et des études rédigées par diverses organisations de la société civil qui se sont donné pour mission de rendre visible la violence contre les personnes LGBT, cependant, et comme résultat du sous-enregistrement et de la discrimination, au niveau gouvernemental il n'y a pas eu d'actions concrètes pour faire des recherches sur des cas d'homicide ni des sanctions efficaces pour les responsables.

Dans les cas d'homicides contre des personnes LGBT, des investigations partielles sont observées, pleines de préjugés et de stigmates⁶¹, ainsi que d'une totale indisposition de mener aux responsables devant la justice. Le contexte général d'impunité qui imprègne les institutions mexicaines, empêche d'obtenir justice et réparation pour les victimes⁶², parce que les autorités ne remplissent pas leurs obligations de diligence raisonnable en matière de lutte, de prévention et de remédier aux agressions⁶³, outre qu'il devient particulièrement difficile sanctionner les responsables dans les cas où les mêmes agents de l'État sont les auteurs.

⁵⁹ ONU. Conseil des droits des hommes. Rapport Annuel de le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits Humaines et rapports de l'Office de le Haut Commissariat et du Secrétaire Général. Lois et pratiques discriminatoires et acts de violence commis contre personnes à cause de leur orientation sexuelle et identité de genre. A/HRC/19/41. 17 novembre 2011. Par. 34 22

⁶⁰ Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements ou peines cruelles, inhumaines ou dégradants. A/HRC/31/57. 5 janvier 2016. Par. 35 23

⁶¹ CIDH. Violence contre les Personnes Lesbienes, Gays, Bisexuelles, Trans et Intersex en Amérique. Op. Cit. Par.483 24

⁶² Conseil des Droits Humains. Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Christof Heyns dans sa mission au Mexique. 28 avril 2014. A/HRC/26/36/Add.1 Par. 87 25

⁶³ Conseil des Droits Humains. Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements ou peines cruelles, inhumaines ou dégradants. 5 janvier 2016. Doc. A/HRC/31/57. Par. 57

L'un des éléments qui caractérisent les homicides dirigés contre cette population est la volonté manifeste d'infliger des dommages physiques et psychologiques, ainsi que des souffrances aux victimes, motivées par la haine et les préjugés qui constituent un traitement cruel, inhumain ou dégradant, sans parler de la terrible brutalité⁶⁴ avec laquelle ces actes sont commis.

De 2015 à 2017, Veracruz a été l'entité fédérale qui a enregistré le plus grand nombre d'homicides reportés contre les personnes LGBT (22 cas), suivie de l'État de Mexico (15 cas), de Quintana Roo (15 cas) et de Chihuahua (14 cas)⁶⁵.

En outre, dans de nombreux cas signalés au public d'homicides de personnes LGBT, l'identité de ces personnes n'est pas reconnue car les victimes sont qualifiées d' "hommes déguisés en femmes" ou de "coutumes efféminées", ainsi que les actes de violence perpétrés au moyen de qualificateurs qualifiés de «crimes passionnels» ou même de réactionnaires, sont minimisés⁶⁶.

c. Migration

Dans le contexte de la mobilité humaine, la discrimination à laquelle sont soumises les personnes LGBT est une constante, dans leur pays d'origine et dans celui de destination. Dans de nombreux cas, les raisons qui conduisent au transfert sont la violence, la persécution et le harcèlement dont ils sont victimes, ce qui explique pourquoi les déplacements forcés sont configurés de manière à protéger la vie, l'intégrité et la liberté de chacun⁶⁷.

En raison de l'absence d'un registre adéquat des migrants, il existe peu de documentation sur le nombre de personnes LGBTI arrivant au Mexique, que ce soit en tant que pays de transit ou de destination, ce qui constitue un obstacle majeur à la satisfaction de leurs besoins, ainsi que de leur accorder une protection adéquate contre les actes de torture et les mauvais traitements. Dans le domaine des migrations, les personnes sont particulièrement vulnérables aux actes de violence, aux menaces et aux enlèvements par les groupes criminels organisés⁶⁸, mais lorsque cette situation recoupe l'orientation sexuelle et / ou l'identité de genre, le risque d'être victime de la violence est beaucoup plus grande.

⁶⁴ In 2014, Edgar Sosa Meyemberg, a gay professor and reproductive rights activist was found dead with signs of torture and his skull destroyed. Source: IACHR. Violence against Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Persons in the Americas. OAS/Ser.L/V/II.rev. 12 novembre 2015. Párr. 352

⁶⁵ Letra S, 202 murders reported of LGBT individuals in the last three years, Letra S, May 17, 2017, Consulted December 5 2018 in: <http://www.letraese.org.mx/reportan-202asesinatos-de-integrantes-decomunidad-lgbt-en-ultimos-tres-anos/>

⁶⁶ Letra S. Hate Crimes Committed by Homophobia: A concept in construction, p. 34

⁶⁷ Rainbow Foundation for the Respect of Sexual Diversity A.C. Cárreaga G. (Coord). LGBT Migration in Mexico City. Diagnose and main challenges. November 2015, p. 18

⁶⁸ Report of the Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment. A/HRC/31/57. January 5, 2016. También, Letra Ese. Crímenes de Odio por Homofobia: un concepto en construcción, p. 62.

La situation de discrimination, qui se conjointe à la qualité de migrant, provoque que plusieurs personnes LGBT vivent dans des conditions précaires lorsqu'elles s'installent au Mexique, soit de manière temporaire ou permanent, soit indépendamment ou dans les centres de détention d'immigration⁶⁹. Les femmes migrantes transgenres ont souvent des difficultés à obtenir un document d'identification qui reconnaisse leur identité de genre⁷⁰, une situation qui crée un obstacle au plein exercice de leurs droits, en particulier dans les secteurs du travail, de l'éducation et de la santé. C'est pourquoi, et en raison de la marginalisation socioéconomique, que beaucoup sont contraints de travailler dans l'informe⁷¹, de rester dans des espaces surpeuplés ou dans des zones urbaines en s'exposant à des risques plus importants⁷².

d. Travail sexuel

Parmi les autres pratiques mises en œuvre, qui font partie du large éventail de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont les victimes des travailleurs sexuels. En raison du contexte social de discrimination et d'exclusion des personnes LGBT, nombreuses femmes transgenres ne peuvent pas accéder aux opportunités d'emploi qui leur permettent d'avoir une solvabilité et une indépendance économique, ce qui les incite à être travailleurs du sexe. La vérité est que, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles exercent le commerce du sexe, cette activité les expose à un risque accru de violence, de torture et d'abus⁷³, car les conditions de travail, en général, ne sont pas sûres ni en bonne santé, surtout pour l'absence d'une réglementation adéquate associée à une approche des droits humains qui protège les travailleurs du sexe.

Le harcèlement et les mauvais traitements à leur préjudice, qui sont toujours présents dans l'exercice de leur profession, ont souvent pour objectif de contraindre les travailleurs du sexe à quitter certains lieux et de les dissuader de se rencontrer. En outre, dans les cas où il existe un acte de violence et même un homicide contre un individu LGBT, le taux d'obtention de la vérité et de la justice est beaucoup moins élevé car non seulement il n'y a pas d'empathie sociale envers ces personnes, ils sont considérés comme une forme de "nettoyage social";⁷⁴ mais aussi les autorités judiciaires découragent les enquêtes fondées sur des préjugés et des stéréotypes.

⁶⁹ Le Rapporteur spécial a soutenu que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles qui sont privées de leur liberté courent un risque particulier de souffrir des tortures et mauvais traitements en contextes de détention pour immigrés. Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. A/HRC/31/57, 5 janvier 2016, Par. 34 32

⁷⁰ Asilegal. Rapport sur la situation des Droits Humains des personnes LGBT au Mexique. Présenté à la CIDH pour la 163 période extraordinaire des sessions. P. 21 33

⁷¹ Dans une étude menée par Lettre S sur les homicides dirigés contre des personnes LGBT, il a été rapporté que deux des migrants assassinés au Mexique, étaient des femmes transgenres et un homosexuel, et tous étaient travailleurs sexuels. Dans, Lettre S. Crimes de haine contre l'homophobie: un concept en construction. 34

⁷² Asilegal. Rapport sur la situation des Droits Humains des personnes LGBT au Mexique. Op. Cit. p. 22 35

⁷³ Dans un rapport présenté par Lettre S sur un suivi réalisé aux notes journalistiques des meurtres aux personnes LGBT, il a résulté que de 203 notes de 2013 à 2017 qui avaient information sur l'occupation des victimes, 41 travaillaient dans le domaine sexuel. En, Lettre S, Violence, impunité et préjugés. Meurtres des personnes LGBTTT au Mexique 2013-2017. Mai 2018 36

⁷⁴ CIDH. Violence contre les Personnes Lesbienues, Gays, Bisexuels, Trans et Intersex en Amérique. OAS/Ser.LV/II.rev. 12 novembre 2015. Par. 29

En plus de ce qui précède, l'extorsion dans l'environnement est une pratique quotidienne; les travailleurs et les travailleuses sexuelles sont souvent obligées de payer pour l'utilisation du sol⁷⁵. Les femmes trans qui ont un travail sexual sont les plus exposées à la violence homicide, parce que leur plus grande visibilité publique les met dans le viseur des attaques par des autorités et des individus (souvent les mêmes clients)⁷⁶.

e. Thérapies et traitements réparateurs

Il est pertinent de mentionner une autre matérialisation de la discrimination et violence souffrant par la communauté LGBT au Mexique: les "thérapies de conversion" ou "thérapies réparatrices". Celles-ci continuent d'être exercées par diverses organisations⁷⁷ dans le but de changer l'orientation sexuelle et/ou l'identité de genre des personnes afin de les transformer conformément à une société hétérogène et (cis)normative régie par des stéréotypes. Ces mécanismes ont pour but de réprimer la façon dont les personnes vivent et expriment leur sexualité, en créant un type de violence caractérisée par des atteintes évidentes à la dignité et à l'intégrité personnelle, constitutives de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants.

Les efforts pour "soigner" les personnes LGBT sont également présentés dans le secteur santé nationale et constituent un obstacle évident au plein exercice de leur droit à la santé et à l'intégrité personnelle. À ce sujet, dans une étude menée par la Fondation Arcoiris concernant l'accès à la santé des personnes LGBT, il a été constaté que 21,21% des interviewés a été forcé au moins une fois pour prendre des traitements liés à l'orientation sexuelle ou identité de genre⁷⁸.

En plus des thérapies mentionnées, ils font souvent d'évaluations psychiatriques, de procédures hormonales et de stérilisation, ainsi que d'interventions chirurgicales, toutes involontaires, qui provoquent des souffrances et des douleurs physiques et psychologiques, ce qui équivaut à la torture et aux mauvais traitements⁷⁹ en tant qu'actes qui violent les droits au libre développement de la personnalité, de la santé, de l'intégrité personnelle, de la dignité à la non-discrimination.

⁷⁵ Lettre S.Crimes haineux pour Homophobie: un concept en construction. Op. Cit, p. 37 38

⁷⁶ Idem, p.80 39

⁷⁷ Exodus Global Alliance, une organisation d'origine américaine avec une portée au Mexique, ainsi que la Clinique Venser à Jalisco, ils constituent l'un des exemples de groupes formés dans le but de convertir des personnes LGBTI. Voir, lettre S. Thérapies Toxiques, par Leonardo Bastida Aguilar. En ligne: <http://letrasec.jornada.com.mx/2018/10/31/terapiastoxicas-7600.html> 40

⁷⁸ Fondation Arcoiris. Attention aux personnes LGBT au Mexique, la situation dans certains états du centre du pays. Coord. Gloria Careaga Pérez. Mexique 2016. p.42)

⁷⁹ Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements ou peines cruelles, inhumaines ou dégradants. A/HRC/31/57. 5 janvier 2016. Par. 48

3.

RECOMMENDATIONS

LA PROCÉDURE ABRÉGÉE

1. Que l'État mexicain assure l'absence de contrainte au moment de proposer le traitement de la procédure abrégée pour les personnes imputées. En ce sens, les autorités juridictionnelles devront assurer en privé que la personne en connaît les conséquences et qu'elle a la volonté de l'accepter.
2. Que la réduction de la peine proposée par le Ministère Public soit garantie, afin que l'accusé ne puisse pas obtenir l'acceptation des faits par l'accusé, pour puis accorder le jugement avec la peine privative de liberté originale.
3. Qu'un recours juridique spécifique soit prévu pour les personnes qui ont été contraint d'accepter la procédure abrégée qui permet la réintégration de la procédure pénale et qui punit les responsables.

ANALYSE DES RISQUES

1. L'État mexicain doit garantir qu'il cesse immédiatement d'appliquer les études de personnalité aux personnes privées de liberté.
2. Le gouvernement devra promouvoir une politique pénitentiaire qui privilégie les mesures non privatives de liberté et accordé, lorsque les conditions légales sont remplies, les avantages de la pré-libération sans aucune restriction qui menace la dignité et la liberté individuelle des sujets.

DROIT À LA SANTÉ

1. Le Mexique devra éliminer tout obstacle législatif, ainsi que toutes les directives relatives à l'affiliation et au fonctionnement du secteur de la santé qui les excluent de la jouissance de ce droit.
2. Sanctionner toute autorité qui refuse de donner des soins médicaux nécessaires pour les personnes privées de liberté.
3. Coordonner toutes les autorités afin de réaliser les accords spécifiques sur l'octroi de services de santé dans les centres pénitenciers.
4. Que l'attention spécialisée dont les femmes ont besoin au sein du centres de réinsertion sociale soit octroyée et qu'elles aient la garantie de pouvoir consulter

un gynécologue qui est disponible à tout moment.

ENFERMEMENT

1. Rendre publiques les directives et les normes sous lesquels sont concédées les accréditations auprès de l'Association Américaine des Prisons (ACA)
2. Établir des politiques pénitentiaires qui équilibrent la sécurité et le développement d'activités dans les centres pénitentiaires pour éliminer la situation d'enfermement. Femmes en prison préventive de la guerre contre le narcotrafic.

LES FEMMES OUBLIÉES EN DÉTENTION PROVISOIRE DE LA GUERRE CONTRE LE NARCO

1. Faire une révision des cas de femmes qui, en raison des arrestations massives qui ont eu lieu pendant cette période, sont toujours en détention préventive, afin de prioriser les cas et de rationaliser les instances juridictionnelles pour accorder un jugement le plus rapidement possible.
2. Assurer que les autorités judiciaires ne tiennent pas compte des confessions ou des autres éléments de preuve obtenus sous la torture au cours de leurs procédures, ainsi que l'assurance qu'ils reçoivent les soins médicaux et psychologiques nécessaires en tant que victimes.
3. Prendre les mesures nécessaires pour concentrer les affaires pénales et éliminer la dispersion géographique qui a encouragé son processus.
4. Accorder une réparation adéquate aux victimes de torture.

LA DIVERSITÉ SEXUELLE

1. Créer un registre qui permet de connaître le nombre de personnes LGBT en prison.
2. L'État mexicain doit réaliser des enquêtes impartiales et libres des préjugés afin de traduire les responsables devant les tribunaux et d'assurer les sanctions correspondantes.

- 
3. Mener un registre officiel des meurtres perpétrés contre les personnes LGBT.
 4. Que l'État mexicain crée un registre des personnes LGBT qui transitent ou qui sont établies dans le pays, ainsi que de leur fournir un document d'identification où leur identité de genre soit reconnue.
 5. Garantir que le développement du travail sexuel se déroule dans des conditions salubres pour les travailleurs sexuels LGBT. Cela implique une obligation de légiférer en la matière et de réglementer les conditions de ce travail en protection des droits des sujets.
 6. Assurer qu'il existe des possibilités d'emploi exemptes de discrimination pour les femmes trans, avec des revenus suffisants et des conditions de travail décentes.
 7. L'État doit interdire et punir juridiquement les pratiques qui ont comme objectif de "convertir" les personnes LGBT, tant dans des institutions privées comme des publics.
 8. Sanctionner les travailleurs des établissements de santé, publics et privés, qui ont l'intention de fournir des médicaments, des chirurgies, des stérilisations et autres traitements involontaires contre les personnes LGBT.



MERCI

MEMBRES DE L'ORGANISATION

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).

Directeur Général

Mtro. José Luis Gutiérrez Román

Coordinateur Administratif

Luis Díaz Carmona

Assistant de Direction

Milton Martínez Molina

Assistants Administratifs

Luciana Contreras Feliciano

Alfredo Medina Hernández

Département de Comptabilité

Norma Guadalupe García García

Département de Communication

Daniel Islas Espinoza (Coordinateur)

Département de Design Graphique

Dulce María Laguna Hernández

Département de Recherche

Adriana Aguilar Arias (Coordinatrice)

Département de Playdoyer International

Verónica Garzón Bonetti (Coordinatrice)

Département d'Éducation

Daffne Ortega Martínez (Coordinatrice)

Département Juridique

Layla Almaraz Olivares (Coordinatrice)

Alfredo Alexander Utrera Dimas

CONTACT

Adresse: Pitágoras 920, col. Del Valle, delegación Benito Juárez, CP. 03100, Ciudad de México.

Téléphone: +52 (55) 5687 8759 | 5639 6755

Page web: asilegal.org.mx

Réseaux sociaux: **Twitter:** @AsiLegal_df **Facebook:** ASILEGAL | **Vimeo:** ASILEGAL



INFORME ALTERNATIVO TORTURA EN MÉXICO:

Elemento estructural
del sistema de justicia

TORTURE IN MEXICO:

A structural element of the justice system

SHADOW REPORT

TORTURE AU MEXIQUE:

Un élément structurel du système de justice

RAPPORT ALTERNATIF

Este documento fue presentado como informe sombra al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas en virtud del séptimo examen periódico a México en el marco del 66° periodo de sesiones que se celebra los días 23 de abril y 17 de mayo de 2019. Es resultado de la información recabada a través del trabajo de campo y de investigación realizado por AsiLegal en diversas partes del país con el objetivo de visibilizar la aún imperante práctica de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en México.

This document was presented as an alternative report to the Committee Against Torture of the United Nations for the 7th periodical examination of the Mexican State in the 66th session held on April 23rd and May 17th of 2019. It is the result of the field and investigation work made by AsiLegal in different parts of the country, with the objective of visualize the still-prevailing practice of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment in Mexico.

Ce rapport alternatif est envoyé au Comité Contre la Torture à l'occasion du septième examen périodique du Mexique dans le cadre de la 66ème période de sessions qui sera célébrée le 23 avril et le 17 mai 2019. C'est le résultat de l'information obtenue grâce au travail de terrain réalisé par AsiLegal dans différentes zones du pays avec l'objectif de visibiliser la pratique commune de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants au Mexique.